



Rev. española de ciencia política v. 36 (2014)

Artículos

Violencia contra violencia. Un análisis de la táctica 'Black Bloc' p. 13 – 33
Valerio D'Angelo

Between ballots and bullets: executive competitiveness and civil war incidence, 1976-2000 p. 35 - 62
Danilo Freire

¿Aliados o enemigos? Un acercamiento a la relación entre el gobernador y su partido político p. 63 - 88
Silvestre Licea Dorantes

Identidad europea en el sur de Europa: un análisis comparado de las percepciones de las élites y opinión pública en España y Portugal.....p. 89 - 114
Aleksandra Sojka, Rafael Vázquez

Notas de investigación

Las relaciones de poder y la memoria colectiva desde una perspectiva espacial..... p. 117 - 128
Sergio C. González García

Recensiones

The Success of the Left in Latin America. Untainted Parties, Market Reforms and Voting Behaviorp. 131 - 133
Manuel Alcántara Sáez

Comportamento eleitoral e comunicação política na América Latina: o eleitor latino-americano.....p. 135 – 139
Lina M. Cabezas Rincón

Selección de candidatos y elaboración de programas en los partidos políticosp. 141 - 144
Noelle Del Giúdice, Aline Burni

La formación de la agenda pública. Análisis comparado de las demandas de hombres y mujeres hacia el sistema político en España.....p. 145 - 148
Juan A. Ramos Gallarín

¿"Democracia sigilosa" en España? Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativosp. 149 – 153
Eduardo Alvarado Espina

Violecia contra violencia. Un análisis de la táctica ‘Black Bloc’

Violence against violence. An analysis of ‘Black Bloc’ tactic

Valerio D’Angelo
Universidad Autónoma de Madrid
valeriodangelo@ymail.com

El poder y la violencia son opuestos; donde el uno gobierna absolutamente, el otro está ausente.

Hannah Arendt

Resumen

Desde su aparición en Seattle en 1999 hasta las recientes Primaveras Árabes, el Black Bloc ha estado presente en las mayores manifestaciones para la justicia global, donde a menudo ha tenido un papel importante en vehicular las protestas. Sin embargo, a pesar del eco mediático, el fenómeno ha merecido escasa atención por parte de los científicos sociales. Asimismo, se ha visto el uso de la violencia como incompatible con una política democrática. En este artículo me propongo analizar el fenómeno de la violencia política del Black Bloc. En una primera parte se procurará identificar el tipo de violencia a partir de las categorías de violencia política tal y como han sido formuladas por los teóricos de los movimientos sociales. A continuación se brindará una interpretación de la identidad y de la acción política del Bloque que permita contextualizar el fenómeno en el interior del tipo de protesta reticular y democrática que se ha venido desarrollando en los últimos diez años.

Palabras claves: Bloque Negro, violencia política, Estado, anarquismo, ideología, violencia simbólica.

Abstract

From its appearance in Seattle in 1999 up to the recent Arabic Springs, the Black Bloc has been present in the major manifestations for the Global Justice Movement, where it often played an important role in

directing the protests. Nevertheless, in spite of the media echo, social scientist barely deserved their attention to the phenomenon. Likewise, the use of the violence has been seen as incompatible with a democratic policy. In this paper I want to analyze the phenomenon of the political violence in the Black Bloc. In the first part I will try to identify the type of violence from the categories of political violence as they have been formulated by the social movements theorists. Later I will offer a different interpretation of Bloc's identity and action which will let to contextualize the phenomenon inside the web and democratic form of protest which have developed in the last decade.

Keywords: Black Bloc, political violence, State, anarchism, ideology, symbolic violence.

DENTRO EL BLOQUE: ORGANIZACIÓN, TÁCTICA, IDEOLOGÍA

Cuando, con ocasión de la Tercera Cumbre Internacional de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tuvo lugar en Seattle el 30 de noviembre de 1999, centenares de manifestantes vestidos de negros y con el rostro cubierto con cascos y pasamontañas, destrozaron los cristales de bancos y multinacionales (como McDonald, Nike, Gap), los observadores internacionales se encontraron frente a un fenómeno cuya identidad, táctica y filosofía se escapaban de la categoría clásica de “nuevo movimiento social” (NMS, de ahora en adelante). Desde la “Batalla de Seattle”, El *Black Bloc* (o Bloque Negro, BB de ahora en adelante) multiplicó sus actuaciones, siempre con ocasión de eventos como las reuniones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, de los encuentros de los Países del G8 y, últimamente, de la Unión Europea.

Los orígenes del Bloque se remontan a diciembre de 1980 cuando decenas de ocupas berlinenses bajaron a la calle equipados con cascos, escudos y armas improvisadas, para protestar contra los desahucios. Posteriormente se llevó a cabo un juicio contra una “organización criminal” conocida como “Bloque Negro (*Schwarzer Bloc*)” y, aunque los cargos fueron retirados, poco después la movilización anarquista *Mayday* en Frankfurt hizo una llamada “para unirse al *Black Bloc*” (Rahmani, 2010). Así pues, se puede rastrear los orígenes políticos del Bloque en el movimiento alemán de los *Autonomen*, que era a su vez una extensión de la Autonomía italiana de los años sesenta y setenta, cuya labor práctica e intelectual marcaba un decisivo alejamiento de las estructuras del Partido Comunista y un giro hacia la autoorganización. Las distintas influencias ideológicas (marxismo, anarquismo, ecologismo, feminismo radical) convergían en la idea de *autonomía* como piedra de toque del movimiento, que se tenía que garantizar a varios niveles: individual, político, de género, decisonal. Como indica George Katsiaficas (2001), se trataba de grupos políticos con un *ethos* igualitario y participativo, donde la autonomía individual y colectiva iban juntas y donde el “aquí y ahora” regulaba la acción política más que cualquier promesa revolucionario-utópica. Durante los ochenta, estos grupos se comprometieron en una serie de acciones contra la energía nuclear, la guerra, el racismo y, en algunos casos,

desembocaron en el enfrentamiento violento con grupos de nazis o con las fuerzas policiales. Esta táctica se difundió pronto en otros países, mayormente a través de revistas de *punk*, encuentros musicales y viajes personales de los mismos activistas, es decir, a través de aquella serie de prácticas colectivas que según McAdam y Rucht (1993) sirven para la promoción y la difusión de una causa. De hecho, ya en 1991 un BB destrozó las ventanas del Banco Mundial en Washington D.C. con ocasión de una manifestación contra la guerra en Iraq. Sin embargo, fue solo con la “Batalla de Seattle” que el Bloque y su táctica se dieron a conocer a nivel mundial. Desde entonces, los medios de comunicación, recuerdan Owens y Palmer (2003), empezaron a prestar mucha atención a la prensa anarquista y a la presencia de anarquistas en las manifestaciones más importantes, aunque se tratase de una atención que iba muy a menudo acompañada a una descripción del Bloque extremadamente negativa. De ello se resaltaba el carácter irracional y vandálico y los *blackers* eran a menudo descritos como un puñado de niños blancos y de clase media (Owens y Palmer, 2003: 350).

A partir de Seattle, el Bloque fue una presencia casi constante en las grandes protestas globales y su *modus operandi* se volvió un patrón más o menos repetido. Tres son, en síntesis, las características más destacadas del Bloque y de las acciones que ha venido desarrollando:

- a) El carácter temporal y cambiante del grupo. El BB no tiene un comité interno ni miembros “oficiales”, se trata más bien de grupos temporales de entre cinco y veinte personas, conocidos como “grupos de afinidad” que a menudo tienen vida solo en el interior de un Bloque y por unas acciones en concreto. Los componentes de un *grupo de afinidad* comparten relaciones no solo políticas, sino también personales y de confianza. Son también conocidos como *amilitant groups*, en cuanto la importancia de las relaciones de amistad (*ami*) entre los miembros se acompaña a la negación de la figura clásica del militante (*a-militant*) (Depuis-Déri, 2010). Además, los distintos grupos que componen un Bloque son totalmente independientes los unos de los otros y no están vinculados por ninguna relación de subordinación. Cada grupo, aunque en un marco general de organización, actúa en relativa autonomía y se puede comprometer con acciones específicas, como la desactivación de las cámaras de seguridad, la distracción de la policía o el socorro de los heridos (Anti-racist Action and The Green Mountain Anarchist Collective, 2001: 11).
- b) Su carácter democrático y horizontal (Milstein, 2010: 75-76). Dado el pequeño tamaño de cada grupo, así como la masiva presencia de anarquistas, las decisiones son tomadas por consenso y en cada grupo se procura respetar los principios de igualdad (ética, de género, etc.) y la autonomía individual (Depuis-Déri, 2011: 60). Este rasgo puede ser visto, de manera a-problemática, como un intento de radicalizar la experiencia democrática y el rechazo a las formas clásicas de representación, a favor de un proceso deliberativo descentralizado, igualitario y participativo.

- c) El uso de la violencia, que puede implicar el destroz de los símbolos del capitalismo mundial, bancos y multinacionales, o el enfrentamiento contra las fuerzas policiales. Sin embargo el uso de la violencia no distingue específicamente las acciones del Bloque, que en distintas circunstancias ha optado más bien por acciones no violentas, como la protección de otros grupos frente a los ataques policiales o la asistencia médica a los heridos. El principio de la autonomía, de hecho, rige lo que se llama *respeto para la diversidad de las tácticas*, es decir, el principio según el cual cada grupo o movimiento de una manifestación elige en autonomía el tipo de protesta más adecuado, que puede o no implicar el uso de la violencia (Depuis-Deri, 2011: 63). Asimismo, los propios miembros del Bloque pueden concertar sus acciones de acuerdo con otros grupos, como los *Tute Bianche*, los *Pink Bloc*, el *Clown Insurgent Rebel Army*, etc., para finalidades que no necesariamente impliquen la utilización de la fuerza (Graeber, 2002: 66).

Estos tres elementos dibujan un paisaje inédito en el interior del mosaico de los NMS, con los cuales el Bloque ha tenido relaciones de cooperación, pero también de choque. Como resulta inmediatamente inteligible, el factor de tensión entre el Bloque y los NMS ha sido el uso de la violencia. En algunas ocasiones, el Bloque ha sido objeto de las más duras críticas (como ha pasado después de Seattle) por parte de los líderes del Movimiento de Justicia Global y ATTAC, que le reprochaban haber desviado la atención de la protesta escenificando el conflicto (Georges y Wolf, 2002: 262); aunque en otros casos, como durante el G20 de Toronto en 2012, las recientes protestas de Barcelona o las manifestaciones en Brasil en 2013, el Bloque recibió un considerable apoyo voluntario por parte de otros manifestantes.

A pesar de la masiva presencia del Bloque en las protestas internacionales, el mundo académico le ha dedicado escasa atención, considerándolo a menudo como una franja extremista de los movimientos sociales de izquierda. Asimismo, se ha visto el uso de la violencia como profundamente incompatible con una sociedad democrática (Habermas, 2008; Rawls, 2006). De esta manera, se ha malentendido sistemáticamente la naturaleza específica del Bloque, su carácter atípico respecto de los NMS y, sobre todo, el papel de la violencia en sus acciones. A continuación examinaremos el tipo de violencia del Bloque, procurando “encasillarla” en algunas de las categorías formuladas por los teóricos de los NMS; veremos cuáles son las variables estructurales de las cuales depende su intensidad, cuál la motivación de los miembros del BB para su uso y cuál es su finalidad general.

UN ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA VIOLENCIA EN EL BLOQUE NEGRO

Cuando se habla de violencia política, uno se encuentra inmediatamente delante de un concepto polimorfo y difícil de formular como categoría general. Por eso, los científicos sociales han preferido a menudo delimitar y encorsetar dicha definición en ámbitos más

restringidos. Wilkinson (1986: 30), consciente de la imposibilidad de abarcar fenómenos tan distintos como el terrorismo, los motines, las revoluciones, etc., en una única definición, circunscribe la noción de violencia política en el interior de un contexto de normalidad, es decir, el Estado liberal, definiéndola como “la provocación deliberada, o la amenaza de provocación, de una lesión física o un daño con fines políticos” o, de forma subsidiaria, como “la violencia que adviene de forma inintencionada en el curso de severos conflictos políticos”. En cambio, Tilly (1978: 172-188), renunciando a una definición omniabarcante de violencia política, prefiere brindar un análisis histórico de ella y, de esta manera, conjurar el peligro de encasillar dicha noción en una categoría demasiado angosta para fenómenos históricos incompatibles entre sí. Sin embargo, el historiador inglés no renuncia del todo a hallar un hilo conductor, comenzando por el papel que las instituciones han desempeñado en favorecer involuntariamente el recrudecimiento de la violencia entre movimientos en principio pacíficos. Este es el caso, observa Tilly, de algunos de los NMS que utilizan la violencia de manera estratégica, actuando como agentes racionales que presionan al Estado para dar curso a un tipo de política de emancipación. Tilly (Tilly *et al.*, 1997: 326-329) opina que, en principio, ninguna forma de acción colectiva es violenta de por sí, sino que la escalada de violencia está a menudo relacionada con la intervención de actores externos, como la represión por parte del Estado. Dentro de una perspectiva bastante parecida a la de Tilly, Coser (1961) ve en la violencia una respuesta al fracaso del Estado en escuchar y concretar las demandas de nuevos actores sociales: la violencia tendría la triple función de dar visibilidad a los grupos marginados; de dar eco a una demanda de justicia social no escuchada, señalando la desafección social hacia un tipo de régimen político; y, por último, crear un círculo de “solidaridad de la violencia”, donde la violencia de unos grupos encuentra respaldo en la violencia de colectivos afines. Otros autores, como Feierabend (1972), ni siquiera consideran la violencia como un tentativo de ruptura con el orden constituido, sino una condición sistémica de la propia modernidad: esta ha engendrado una generalizada frustración en la medida en que ha desatendido las expectativas de cambio institucional, social y económico, generando por tanto la reivindicación violenta de las promesas incumplidas.

Estos y otros autores, como Tarrow y Mc Adam (2004), han tenido el mérito de dar un doble giro en el estudio de la violencia política respecto de las escuelas anteriores: primero, renuncian a una visión de la violencia como “desviación psicológica” o “frustración individual” que había dominado en la literatura académica de los años sesenta y setenta (Gurr, 1970; Kornhauser, 1959); segundo, abrazan una visión relacional de la violencia política, considerándola parte de un contexto que involucra una multiplicidad de actores, factores estructurales y circunstancias históricas. Este método de análisis, que coloca la violencia dentro de un proceso político más amplio, permite, de hecho, y captarla en su dimensión dinámica, como una variable que influencia y es a su vez influenciada por otros factores. Este enfoque teórico, *grosso modo*, se basa en tres ejes: primero, considera la violencia política como una de las muchas formas de confrontación, dentro de un repertorio de acciones y estrategias más amplio; segundo, entiende los grupos violentos como uno

de los elementos que componen una galaxia donde se mueve una pluralidad de actores con los cuales ellos comparten información y finalidades comunes (grupos afines) o contra los cuales luchan (la policía); por último, investiga la escalada o descenso de la violencia en relación al papel del Estado (Gunning, 2009; Googwin, 2012; Tilly, 2003). En conclusión: la violencia es una forma de participación política que no puede ser descontextualizada con respecto al entorno que la favorece o desanima, a las expectativas de los actores involucrados, al éxito o al fracaso político de su uso.

A este filón de análisis pertenece también el trabajo de Donatella Della Porta (1995), que merece una atención especial por haber relacionado de manera muy satisfactoria el tema de la violencia política con las dinámicas de los movimientos sociales. También Della Porta renuncia a una noción omniabarcante de la violencia, limitándose a definirla como un “repertorio particular de acción colectiva que implica la fuerza física, considerada ilegítima en la cultura dominante” (1995: 3-4.) e incluyendo en este macro-marco una pluralidad de acciones (ataques a la propiedad, revueltas, confrontaciones violentas entre grupos políticos antagonistas, altercados con la policía, ataques violentos dirigidos contra personas, etc.). Al mismo tiempo, Della Porta (1995: 4), consciente de la amplitud de dicha definición, distingue entre una violencia política de baja intensidad, que generalmente no está dirigida contra personas, y un nivel de alta intensidad, que hasta incluye el asesinato político. A esta distinción se añade otra, según el grado de organización del actor responsable de la violencia (esto es: espontánea u organizada). La interacción de las dos variables, es decir, el grado de intensidad y el de organización, engendra cuatro categorías:

- a) *unspecialized violence* (violencia de baja intensidad y sin organización);
- b) *semimilitary violence* (violencia de baja intensidad pero más organizada);
- c) *autonomous violence* (la de grupos poco organizados que enfatizan el aspecto espontáneo del uso a una violencia de alta intensidad);
- d) *clandestine violence* (la de grupos especializados que tienen el objetivo específico de comprometerse en acciones muy radicales).

Al querer encasillar la violencia del Bloque en una de las categorías formuladas por Della Porta, es decir, entrelazando la variable de la intensidad con la de la organización, se obtiene un resultado atípico. En cuanto al primer aspecto, esto es, la intensidad, ya vimos en el primer párrafo que el Bloque hace un uso ocasional y no sistemático de la violencia, que es una táctica complementaria a muchas otras y no el medio exclusivo de confrontación con el Poder. Francis Depuis-Derí (2010: 59-61), en una serie de entrevistas realizadas con “miembros” del Bloque, observa que el uso de la violencia es solo una de las facetas de la militancia de personas que están a menudo involucradas en muchas otras actividades políticas, sociales o de voluntariado. El politólogo canadiense argumenta que, incluso durante los enfrentamientos con la policía, el uso de la violencia es solo la más visible de las muchas actividades que tienen ocupados a los participantes en un Bloque (como la transmisión de las informaciones con *walkie-talkie* o móviles, el socorro a los

heridos, el abastecimiento de agua o de materiales de protección). En conclusión: el uso de la violencia es un medio auxiliar y no exclusivo para expresar el descontento político y social.

En cuanto al grado de organización, el Bloque es una estructura reticular compuesta por los ya mencionados grupos de afinidad, es decir, las organizaciones informales que se caracterizan por el limitado número de miembros/amigos y por no tener ninguna jerarquía de mando interno y que a menudo se coordinan entre ellos solo pocos días antes del evento. Asimismo, casi no disponen de armas propiamente dichas, sino solo de herramientas autofabricadas, como los cócteles molotov u objetos varios, como adoquines para enfrenarse a la policía (Thompson, 2010: 44). Así pues, la interacción de estos dos factores examinados situaría la violencia del Bloque entre la primera y la segunda categoría de Della Porta, es decir, entre *unspecialized violence* y *semimilitary violence*.

Llegamos a un resultado parecido si consideramos las seis localizaciones de violencia colectiva que, según Tilly (2003), se obtienen entrecruzando el grado de coordinación de la violencia, con la relevancia de las acciones violentas:

- a) *Violent rituals*: las partes, bien definidas y coordinadas, infligen daños contra grupos rivales con los cuales compiten por la primacía y el privilegio social en un espacio colectivo que ellas reconocen (como linchamientos, ejecuciones públicas, etc.).
- b) *Coordinated destruction*: organizaciones especializadas en el despliegue de medios violentos, que utilizan una violencia programática contra personas u objetos, como es el caso de la guerra, el terrorismo, el genocidio.
- c) *Oportunism*: individuos o grupos de individuos que, para defenderse de la violencia y de la represión del Estado, usan medios violentos para obtener fines prohibidos, como saqueos, violación en grupo, piratería, pillaje militar.
- d) *Brawls*: un grupo de personas, durante una reunión generalmente no violenta, se atacan entre ellas o atacan a las respectivas propiedades.
- e) *Scattered attacks*: se produce cuando, en una situación normalmente pacífica, un grupo de actores responde a los obstáculos o a la represión del Poder a través del uso de la violencia de baja intensidad contra cosas o personas.
- f) *Broken negotiations*: pasa cuando, en el curso de una acción colectiva en principio no violenta, uno de los contendientes trata de reprimir o dirigir las acciones de protesta, con el resultado de dividir y polarizar los actores, que responden por medio de la amenaza o el uso de la violencia (también golpes militares, represión, etc.).

Según esta clasificación, la acción del Bloque oscilaría entre los ataques dispersos (*scattered attacks*), en cuanto muy a menudo el uso de la violencia no está planeado de antemano y surge como fruto de las contingencias, y el oportunismo (*opportunism*), como acción reactiva a una represión.

Ahora bien, estas dos clasificaciones, aunque nos permitan medir la intensidad de la violencia del Bloque en base a la organización de la acción violenta y los medios utilizados, pasan por alto el contexto estructural, el compromiso ideológico y las motivaciones individuales de participación en un Bloque. Della Porta, de hecho, tiene el cuidado de analizar los fenómenos violentos a partir de los tres planos de análisis: el macro que considera la estructura general, es decir, el contexto político en el cual se mueven los actores violentos y la relación entre ellos y el Estado; el nivel *meso*, que estudia sobre todo las características ideológicas de los grupos involucrados; y el *micro*, que se enfoca más bien en las experiencias biográficas de quienes participan en el acto violento. Intentemos entonces, siguiendo a Della Porta, abordar la violencia del Bloque según estos tres niveles.

Por lo que se refiere al primer nivel (el *macro*), es preciso considerar el contexto político en el cual el Bloque se mueve y actúa. Como anticipábamos, Tilly, Coser y Della Porta (entre otros) insisten en la importancia de la relación que los movimientos sociales instauran con el Estado: el grado de violencia, su posible escalada o descenso, más que ser variables constantes en el repertorio ideológico de un movimiento, están íntimamente relacionados con el comportamiento de las autoridades institucionales y con sus respuestas a las demandas de estos movimientos. Según Tilly (Tilly *et al.*: 1975), por ejemplo, las formas de acción colectiva ilegales tienen más probabilidad de usar más violencia ante el riesgo de verse sometidas a represalias y que la represión disminuya la intensidad y frecuencia de las acciones colectivas (lo cual hace que el uso de la violencia sea mucho más eficaz para los gobiernos que para los actores antagonistas).

Sin embargo, a la hora de analizar las acciones del BB, la famosa “estructura de las oportunidades políticas”, elaborada por Eisinger (1973) y luego profundizada por más autores, tiene una utilidad reducida. El grado de apertura o de cierre de un determinado régimen político, el grado de estabilidad o inestabilidad de las alianzas políticas, la postura estratégica de posibles aliados, etc., según el clásico marco formulado por Tarrow (1983: 28), sigue siendo útil para el estudio de fenómenos clásicos de acción colectiva, pero resulta insuficiente a la hora de estudiar un movimiento como el Bloque cuyos propósitos, y cuya percepción de las oportunidades políticas, tienen poco o nada a que ver con la política propiamente institucional. Las acciones del Bloque, como veremos a continuación, no procuran “chantajear” al Estado con un incremento de la violencia para poder pactar con ello, y tampoco le quieren provocar para que ello sobre-reaccione de una manera indiscriminada y se aliene a las simpatías de la población (Zwermann y Steinhoff, 2005). Unos pocos ejemplos de la crónica más reciente pueden ilustrar lo que vamos diciendo.

En enero de 2013, en Egipto, tras días de enfrentamientos con la policía, miembros del Bloque consiguieron robar un vehículo acorazado de la policía y conducirlo hasta plaza Tahir, donde le prendieron fuego. En este caso, como ha argumentado eficazmente Mark LeVine (2013), el Bloque quiso, a través de acciones tan espectaculares como la quema de un coche de la policía, “reclamar” su visibilidad como fuerza política dentro de un contexto en el cual la única oposición a Morsi era el débil e ineficaz Frente de Salvación Nacional.

Tras la derrota de Mubarak y la toma del Poder por parte de los Hermanos Musulmanes, las protestas callejeras del Bloque representaron el cauce simbólico de la oposición al Poder. El recrudecimiento de la violencia contra la policía quería dar voz a un descontento general y presentar su violencia como justificada. Distinto es el caso brasileño: en junio de 2013, el Bloque Negro hace su aparición por las calles de Río y San Pablo, confundándose con los manifestantes (casi un millón) que denunciaban el inmenso gasto que suponía para el Estado brasileño el Mundial de fútbol de 2014. Los manifestantes pedían además cancelar la privatización del estadio Maracanã y parar los desahucios de inmuebles que se decretaron para la celebración de grandes festejos en Río (International Development Research Centre, 2013). Las acciones del Bloque siguieron la ola de protesta: al comienzo de octubre, en Río, el Bloque acompañó la manifestación de los maestros del sector público, de los cuales recibió apoyo y solidaridad. En aquella ocasión se dieron altercados con la policía y algunos establecimientos de McDonald y bancos fueron atacados por el Bloque (Davies, 2014). En este caso la presencia del Bloque, su visibilidad, sirvió más bien para reunir y vehicular las principales demandas de la sociedad civil, como un freno a la violencia policial, al aumento de la inflación, un descontento hacia el alto nivel de corrupción pública, la protesta contra la propuesta de ley que prohíbe el aborto también en caso de violación, la subida del precio de los transportes públicos, etc., que permanecieron desatendidas y explotaron cuando Brasil ganó la candidatura al Mundial de 2014. De este modo, si por un lado el prolongado silencio del Estado frente a estas demandas fue determinante para el recrudecimiento de la violencia del Bloque; por el otro, su táctica de “seguir” las distintas protestas tuvo el efecto de reunir demandas distintas en un marco común. Además, el apoyo que recibió el Bloque, sobre todo con ocasión de la mencionada manifestación de los maestros, corrobora la versión de la pluralidad de tácticas del Bloque y del uso de la violencia como una, pero no la única, de estas tácticas. Por último, el reciente caso italiano (12/04/2014): el Bloque actuó durante una manifestación de protesta en contra del *Jobs Act* del Gobierno Renzi y contra la ley sobre los inmuebles propuesta por el ministro Lupi. En esta ocasión, algunos manifestantes vestidos con un abrigo azul (*Blue Bloc*), y que dieron origen a los altercados, se enfrentaron a la policía cerca del Ministerio del Trabajo: seis fueron detenidos y veintiuna personas quedaron heridas. Sin embargo, el caso italiano resalta por su anomalía y dificulta notablemente el análisis acerca del Bloque. Como han notado Griseri y Viviano (2010), en el Bloque italiano, detrás de las máscaras y de las capuchas negras, se esconden grupos anarquistas, así como de extrema derecha. El caso italiano, tristemente conocido por los acontecimientos del G8 de 2001, muestra una doble anomalía: la “indefinición” política del Bloque y la táctica bélica utilizada. Es decir: no solo el Bloque no tiene una clara orientación política, y en ello pueden “participar” tanto anarquistas como grupos de la extrema derecha o simples hinchas de fútbol, sino que privilegia el momento puramente bélico de choque con la policía sobre otros aspectos de la acción. Además, ya durante el G8 de 2001 se dieron unas anomalías que dejaron sin solucionar la relación pasiva frente a los ataques del Bloque, una táctica que sirvió para luego justificar el ataque policial contra los manifestantes pacíficos

(Iglesias Turrión, 2008: 314-349). Más allá del caso italiano, algunos observadores han notado una diferencia táctica general entre Estados Unidos y Europa: si en el primer caso el Bloque renunciaría casi totalmente al choque contra la policía, centrándose más bien en la destrucción de la propiedad, en cambio la experiencia europea privilegiaría una dinámica de oposición violenta con las fuerzas de seguridad (Flugennock, 2000). Para concluir: el uso que el Bloque hace de la violencia parece seguir más bien facciones regionales y oportunismos políticos relacionados con la contingencia histórica que un esquema rígido de réplicas agudas contra el Estado. El uso de la violencia entonces, a pesar de la división ideológica que caracteriza el fuerte componente anarquista del Bloque (que ve en el Estado el principal factor de opresión), está más bien relacionado a las contingencias histórico-geográficas y al oportunismo político.

Sin embargo sería igualmente incorrecto hacer del BB un actor racional que usa métodos violentos solo y exclusivamente para aumentar sus *chances* de éxito político, como una mayor visibilidad o la búsqueda de simpatías hacia la sociedad civil. De hecho, la ideología (el nivel *meso* de análisis propuesto por Della Porta) es un factor muy importante no solo en la elección de las estrategias del Bloque (lugares de encuentros, objetivos para golpear, etc.), sino, sobre todo, en las motivaciones de sus miembros. Aquí el científico social se topa con tres tipos de problemas: primero, la dificultad de encontrar su objeto de estudio. Sería muy arriesgado, en el caso del Bloque, hablar de “ideología”, como de un núcleo claro y coherente de teorías políticas (como para las Brigadas Rojas o el EZLN, por ejemplo), siendo el Bloque un crisol de almas y sensibilidades distintas que comparten el denominador común de la autonomía. Segundo: la única noción que tenemos de esta ideología es a través de los comunicados o las entrevistas a los mismos miembros del Bloque. Tercero, sería peligroso desde el punto de vista científico equiparar ideología y praxis violenta, es decir, considerar la violencia política como una consecuencia directa de una ideología política antidemocrática o antisistema, como avisa la propia Della Porta (1995: 6). De hecho, este método no solo pasaría completamente por alto la influencia del contexto en la detección de las finalidades, así como de la permeabilidad del sistema en integrar las demandas alternativas, sino que resultaría especialmente capcioso al examinar una ideología política como es el anarquismo, que ha sido históricamente acompañada por acontecimientos violentos. Pues, si por un lado se trata de hallar los elementos ideológicos que justifican la violencia, por el otro hay que tener cuidado con no hacer de la ideología la única legitimación/motivación en el uso de la violencia. La politóloga April Carter (1978: 333-334) subraya la vinculación moral del uso de la violencia en el anarquismo clásico: aunque en principio la violencia sea algo incompatible con los valores anarquistas (ninguna sociedad anarquista sancionará nunca el asesinato o el castigo corporal), en algunas ocasiones los anarquistas han accedido al uso de la violencia para prevenir una violencia mayor. Robert Paul Wolff (1969), en cambio, cuestiona la posibilidad misma de formular un concepto adecuado de violencia política, afirmando que esta noción “sirve como expediente retórico para proscribir aquellos usos políticos de la fuerza que uno considera enemigos de determinados intereses centrales” (Wolff, 1969: 613). De

hecho, el debate acerca de violencia y no violencia que tuvo lugar en los Estados Unidos durante la década de los años sesenta (cuando Wolff escribe), estaba irremediamente comprometido con la postura ideológica de las partes involucradas: los miembros de la clase financiera y las élites políticas identificaban la violencia como el desafío a la autoridad y la amenaza a la propiedad privada, mientras los liberales de clase media estaban dispuestos a tolerar algunas formas de disenso, como *sit-in* y huelgas, mientras no desembocaran en violencia abierta. Asimismo, mientras para los conservadores blancos la violencia era cualquier amenaza “desde afuera”, como el crimen callejero, las revueltas del gueto, las marchas para los derechos civiles, etc., para los negros, los activistas de los derechos civiles o los manifestantes contra la guerra del Vietnam, la violencia era sobre todo la violencia sistémica, la de las fuerzas policiales y del Estado. Wolff (1969: 606) argumenta entonces que el concepto de violencia carece por sí de sentido en cuanto la única violencia “legítima y autorizada” es, weberianamente, aquella del Estado. El autor, simpatizante anarquista, procura desarticular el tinglado legal que rige el Estado liberal y su legitimidad en el uso de la fuerza. La autoridad política del Estado, según él, no puede *de iure* justificarse sino con el uso de la violencia *de facto*, con el inevitable resultado de que el uso estatal de la fuerza no tiene ninguna legitimidad *de jure* y, por lo tanto, no es posible distinguir entre un uso legítimo y uno ilegítimo de la fuerza. La legitimidad, en conclusión, no encuentra otro criterio que el uso de la fuerza misma. Por eso el concepto de violencia política se presenta como intrínsecamente carente de razón y no existe ningún criterio político para el uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, el criterio de Wolff es algo problemático: si por un lado niega la existencia de una violencia justa (la del Estado) y una violencia injusta o indiscriminada (la de los actores no estatales), por el otro renuncia *tout court* a determinar qué es la violencia política y, de esta manera, se priva de un criterio de evaluación para discernir fenómenos muy distintos como la guerrilla, el terrorismo estatal, los paramilitares o, en nuestro caso, el Bloque Negro. Por otro lado, ello está en conformidad con la sensibilidad anarquista que reprocha al Estado el monopolio de los criterios de legitimidad y busca, en cambio, mostrar la opresión sobre la cual se funda el monopolio estatal de la violencia. Los comunicados del propio Bloque, como veremos en el siguiente apartado, respaldan esta interpretación cuando subrayan su “violencia defensiva” frente a la violencia sistémica. La mayoría de los militantes replantean la pregunta sobre lo que es un acto de violencia o, como afirma el anarco-primitivista John Zerzan (2004), la destrucción de la propiedad no se puede considerar un acto violento, sino solo una táctica necesaria.

El último nivel de análisis (*micro*) analiza la adhesión individual de los particulares al movimiento y su compromiso con la “ideología”. Depuis-Derí (2010: 54-58), en el estudio que recordamos al comienzo del artículo, afirma que, aunque el lenguaje de los miembros del Bloque esté fuertemente marcado por una retórica revolucionaria o insurreccional, ellos no se ven a sí mismos como revolucionarios. Asimismo, el politólogo canadiense hace hincapié en el hecho de que muchos participantes considerasen el uso de la violencia como un acto legítimo y defensivo contra un sistema violento e ilegítimo, causa de explotación, discriminación, pobreza e infelicidad. Es decir, ellos perciben su acción con una

fuerte connotación moral: casi todos los entrevistados insistían en el aspecto ético de la destrucción de los símbolos del capital y, en consecuencia, veían en el uso de la violencia no tanto un valor intrínseco en contra del “blando” e ineficaz pacifismo, sino el único (y último) recurso contra la brutalidad del sistema.

El análisis que hemos llevado a cabo, aunque nos brinde una útil clave de lectura del fenómeno de la violencia política en el BB, se queda encerrada en una interpretación de tipo clásico o formal, que estudia el Bloque como un NMS y su acción como todavía enmarcada en la racionalidad instrumental. Sin embargo, proponemos aquí un tipo distinto de interpretación, en base a la cual el Bloque da curso a un tipo distinto de subjetividad y, por tanto, de acción política.

IDENTIDAD FLUIDA Y VIOLENCIA SIMBÓLICA. NUEVAS HERRAMIENTAS CONCEPTUALES PARA ABORDAR LA VIOLENCIA EN EL ‘BLACK BLOC’

Tras la caída del muro de Berlín y el derrumbe del imperio soviético (el fin de la historia de Fukuyama), se ha venido configurando, en el mundo occidental, un orden internacional que no solo ha determinado nuevos equilibrios geopolíticos sino que ha también influenciado los sectores de la contracultura y de la protesta política. Ya al comienzo de los años setenta, estos movimientos habían empezado a desengancharse de la dicotomía vigente durante la guerra, pero es solo con la desaparición de la polarización ideológica que estos grupos encuentran vías alternativas (al comunismo ortodoxo) para expresar el disenso y la protesta al capital. Ya los primeros observadores de los NMS, como Touraine (1965, 1969) y Melucci (1976, 1999), notaron un neto cambio de paradigma de estos movimientos respecto del movimiento obrero clásico. Ellos ya no planteaban el conflicto en términos de lucha de clase o de un cambio de las condiciones estructurales, sino que abrazaban una visión posmaterialista (Ingleheart, 1977) que abogaba por la redefinición de los valores de la identidad, la cultura y el sentido. Estos movimientos rompen con la idea “clásica” de militancia y de cambio de las condiciones sociopolíticas. Como ha notado Offe (1985), ellos desarrollan una crítica metapolítica al orden social y, más en general, a la democracia representativa y llegan a desafiar los cauces tradicionales de “hacer política”, es decir, la toma del Poder. Recogiendo el legado de los movimientos del 68, los NMS acaban con una visión vanguardista del proletariado industrial como sujeto del cambio político y abogan para una democracia directa que no se deje atrapar por los aparatos del Poder (Wallerstein, 2004: 350 y ss). Esto no significa que ellos renuncien a una visión conflictiva de las relaciones sociales, sino que desplazan el conflicto a ámbitos que no han sido considerados tradicionalmente por la teoría marxista: el género, la raza, la vida privada, etc. (Melucci: 1989). En conclusión: estos nuevos actores no piden la intervención del Estado, sino que procuran protegerse de una excesiva presencia del Estado en la vida diaria de los individuos. Tras la influencia de los movimientos feminista y poscolonial de los años

sesenta y setenta, el tema de la identidad, en particular, cobra una relevancia especial. Conscientes de la construcción cultural de la identidad (de raza, género, etc.), estos movimientos empezaron a pensar la identidad como uno de los objetos de la contienda con el Poder: si, de hecho, la identidad es un proceso inacabado y en continua formación, entonces su construcción es una reivindicación colectiva de intereses en perpetuo cambio (Cohn, 1985: 694). Estrictamente relacionado con la cuestión de la identidad, el factor cultural jugó un papel determinante: los NMS intentaron transformar los códigos culturales dominantes, sustituyéndolos por una práctica de vecindad, donde las relaciones personales, cara a cara, formaban un micronivel de la acción política que no podía ser capturada por el macronivel de las relaciones de poder (Darnovsky, Epstein, y Flacks 1995: xiv). Estos cambios iban acompañados por el abandono de las lógicas decisoras de partido (que seguían vigentes en los sindicatos) y a ellas se prefirió un sistema más horizontal, como la toma de decisiones por consenso o el carácter antiautoritario de la organización (Della Porta y Diani, 2006).

El movimiento anarquista también estuvo influido por este cambio, aunque más a nivel ideológico que práctico (las decisiones tomadas por consenso o el carácter horizontal de la organización son una constante del movimiento libertario desde su nacimiento). Neal (1997) habla de un paso desde un anarquismo con la "A" mayúscula a un anarquismo de "a" minúscula, diferenciando entre una teoría y una práctica caracterizadas por un alto nivel de compromiso ideológico (la "A" mayúscula) y un anarquismo menos orientado ideológicamente que deja de lado los imperativos dogmáticos y abraza más bien la praxis antiautoritaria e igualitaria. Más recientemente, David Graeber (2002), retomando la distinción de Neal, sostiene el carácter no sectario y abiertamente democrático de estas nuevas formas de organización que "no carecen de ideología [...], ellas mismas son la ideología" (2002: 70). En conclusión: en los años noventa y en la primera década del siglo XXI hay un significativo cambio de perspectiva ideológica en el anarquismo, que acaba por englobar en su repertorio influencias marxistas, situacionistas, surrealistas, etc. La identidad (anarquista) y el rigor ideológico ceden el paso a una lógica de afinidad con otros grupos (posmarxistas, ecologistas, autónomos, etc.). Pues, si por un lado el anarquismo se desprende de su legado más dogmático, por el otro, hay una difusión de las prácticas libertarias en los NMS.

Sin embargo, solo muy parcialmente se puede adscribir la lógica del Bloque a la de los NMS. Ello podría mejor encajar en la categoría formulada por el sociólogo Richard Day (2005) de *newest social movement*. Con ello el autor indica un tipo de acción no-hegemónica, orientada a la construcción de alternativas al interior del Estado-nación y contra de ello. Day argumenta que los NMS siguen siendo orientados hacia el espacio estatal, es decir, hacia el momento hegemónico de la política. Ellos seguirían pensando en términos de mejoras de las estructuras existentes y, aunque no miren a la toma del Poder, sin embargo, procuran influir sobre ello. Diversamente, los "más nuevos movimientos sociales" quieren desenmarcarse de esta lógica y dan vida a un tipo de acción política que no quiere ni la toma del Poder ni lograr mejoramientos al interior del Estado (2005: 68-70).

En la obra de Day se vislumbran dos procesos que contribuyeron al paso de la política de la hegemonía a la lógica de la afinidad.

Primero, la cuestión de la identidad. Mientras los NMS seguían atrapados en una política de demanda de reconocimiento identitario, los MNMS en cambio (y tras la influencia de los movimientos poscoloniales, *queer* y posfeministas) fomentan una política de la solidaridad que prescinde del reconocimiento estatal (2005: 192).

Segundo: la acción de los MNMS se desplaza de una política de protesta y petición a la de la prefiguración de alternativas. Es decir, ellos no plantean la alternativa política como algo “por venir” sino que actúan como embrión y experimentos para relaciones sociales más justas (2005: 41). El mismo concepto lo ha expresado el politólogo Benjamin Ardití (2012), refiriéndose a los movimientos de las Primaveras Árabes y relacionándolos a un movimiento global más amplio que une a los indignados españoles, *Occupy Wall Street*, y los estudiantes chilenos. Todos ellos, afirma, no tienen un plan, son ellos mismos el plan, es decir, ellos mismos dan vida, en la protesta, a un tipo de acción prefigurativa de políticas futuras.

Las dos características entrañan también al Bloque.

Primero, la cuestión identitaria. No solo el Bloque no reivindica una identidad fija, sino que tampoco hace del factor identitario el pivote de su lucha política. Cuando la socióloga Amory Starr (2005: 227) define el Bloque como una táctica, una modalidad de acción, más que como un grupo con contornos nítidos, está precisamente subrayando esta subordinación de cualquier política de la identidad al carácter móvil e indeterminado de la acción o, más sencillamente, a la preponderancia de la práctica sobre la teoría. Podríamos asimilar esta estructura a la noción de máquina de guerra nómada de Deleuze y Guattari (2002). Se trata de un mecanismo que se coloca en una relación de exterioridad con respecto al Estado, de un no-lugar desprovisto de una identidad propia, de un sitio de la pluralidad, de las diferencias y del devenir, que consigue escapar-se a la codificación del Estado en cuanto que elude sus estructuras binarias. Pues, mientras “La forma-Estado, como forma de interioridad, tiene tendencia a reproducirse, idéntica a sí misma a través de sus variaciones”, en cambio “la forma de exterioridad de la máquina de guerra hace que esta solo exista en sus propias metamorfosis [...] La exterioridad y la interioridad, las máquinas de guerra metamórficas y los aparatos de identidad de Estado [...] no deben entenderse en términos de independencia, sino en términos de coexistencia y competencia, en un campo en constante interacción” (2002: 367-368). Los dos autores precisan que se trata de un modelo, además de conceptual, también social y funcional, que se sale del intento de codificación del Estado para crear y recrear un espacio diferencial. Es un no-sitio, precisamente por la ausencia de toda esencia y de autoridad central y, por ende, fundamentalmente hostil a la lógica del sitio, de la unidad y de la autoridad sobre la cual se basa el Estado. Este modelo resulta útil para entender la lógica interna del Bloque, su carácter plural y descentralizado, su radical irrepresentabilidad e irreductibilidad a cualquier identidad fija. Esta política posidentitaria, por la cual el Bloque no se constituye como sujeto político unitario sino en

su verdadera fragmentariedad, responde a lo que el sociólogo A.K. Thompson (2010: 22) ha llamado “la voluntad de suplantar la representación con la producción”: los activistas del Bloque rechazan las formas tradicionales de representación política (el Estado, pero también el partido, el sindicato, etc.) y procuran producir ellos mismos su modalidad de acción. A este respecto, merece atención el uso metafórico y no solamente táctico (la necesidad de no ser identificados por las cámaras de seguridad) del uso de la máscara (el pasamontañas, los cascos, las capuchas, etc.). Esta expresa la voluntad de enseñar una “identidad política” que no se limita al nacimiento de una nueva subjetividad (feminista, indígena, homosexual, etc.) sino una distinta manera de “ser político”. La máscara es una estrategia que procura deshacerse de las formas clásicas de representación política de las identidades y, por ende, simboliza el rechazo a la identidad individual que requieren el Estado y los partidos para “representar” sus miembros. Pero la máscara significa también la creación de una identidad universal inclusiva y abierta en la cual confluyen las identidades particulares (no todos son blancos, negros, mujeres, homosexuales, etc., pero todos los blancos negros, homosexuales, mujeres pueden ser Black Bloc). Por último, como ha observado Thomas Nail (2013), la máscara responde al principio libertario de derribar las jerarquías políticas: reemplaza la visibilidad de la cara del líder/representante, con un anonimato igualitario sin líderes ni seguidores.

Segundo, el carácter prefigurativo de la acción del Bloque. Como ya tuvimos ocasión de ver, el BB procura reproducir a su interior los rasgos de una utópica sociedad por venir. Este es el sentido de la lógica de la afinidad que une en vínculos de amistad y solidaridad a los miembros del BB, pero también de la democracia directa que se refleja en las decisiones tomadas por consenso o en el carácter autogestionado y antiautoritario de los grupos (Pleyers, 2004: 127).

A raíz de lo dicho, ya se nos plantea otra posible manera de entender el uso de la violencia que, además de sus componentes práctico-instrumentales, cobra una función simbólico-expresiva (Riches, 1986: 11). Pues, mientras las primeras tienen la finalidad de transformar el entorno político-social, la segunda, en cambio, pone el énfasis en la comunicación del mensaje político que quieren transmitir. La violencia del Bloque, como vimos, no aspira a la transformación del contexto político-social (o por lo menos el BB no apunta a esta meta a través de métodos violentos) sino que “escenifica” un distinto entendimiento del hecho social y político. El Bloque da vida a un nuevo lenguaje (Graeber: 2002: 66) que combina exhibiciones espectaculares de violencia icónica (Beeman, 1993), la lucha para la visibilidad mediática (Thompson, 1995), y una movilización de los recursos simbólicos entre los activistas. El ataque a los símbolos del capital (McDonald's, Starbucks, etc.) es ante todo una *comunicación pública* que quiere proveer un marco interpretativo distinto del discurso legitimador (del capital). Ello quiere señalar la violencia misma como la condición más primigenia del orden político-social vigente. Zizek (2009) ha planteado la cuestión en términos de enfrentamientos entre una violencia visible y “subjetiva” y una violencia invisible y “objetiva”, fruto de las consecuencias del funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas económicos y políticos:

“La cuestión está en que las violencias subjetiva y objetiva no pueden percibirse desde el mismo punto de vista, pues la violencia subjetiva se experimenta como tal en contraste con un fondo de nivel cero de violencia. Se ve como una perturbación del estado de cosas ‘normal’ y pacífico. Sin embargo, la violencia objetiva es precisamente la violencia inherente a este estado de cosas ‘normal’. La violencia objetiva es invisible puesto que sostiene la normalidad de nivel cero contra lo que percibimos como subjetivamente violento. La violencia sistémica es, por tanto, algo como la famosa ‘materia oscura’ de la física, la contraparte de una (en exceso) visible violencia subjetiva. Puede ser invisible, pero debe tomarse en cuenta si uno quiere aclarar lo que de otra manera parecen ser explosiones ‘irracionales’ de violencia subjetiva” (2009: 10).

El filósofo esloveno argumenta entonces que siendo la violencia “objetiva” un estado de cosas que se percibe como normal, ella es invisible y su presencia resalta solo frente a episodios de violencia subjetiva. Pero fue Foucault (2010: 27) el primero en percatarse del carácter bélico de las relaciones sociales. Dando la vuelta a la conocida expresión de Von Clausewitz, Foucault propone estudiar las relaciones sociales según el “modelo de guerra” y la tarea del investigador social será exactamente la de “tratar de descifrar el poder político en términos de guerra, de lucha, de enfrentamiento” (2010: 27). La Ley, en vez de ser consenso y acuerdo, esconde constantemente el choque de fuerzas (tanto al nivel estatal como microfísico): la guerra es la condición ontológica de la política, el ser oculto de todas las relaciones sociales y políticas. Todas las leyes y las instituciones no son nada más que la codificación cristalizada de aquellas que antaño fueron conquistas bélicas. Estos discursos se pueden perfectamente aplicar a la filosofía del Bloque, como resuena en muchos de sus comunicados. Entre estos, el primero que fue emitido poco después de la “Batalla de Seattle”, enseña que los miembros del Bloque eran bien conscientes del papel simbólico de la violencia (ACME, 2000):

“... cuando rompemos un cristal, buscamos destruir la sutil línea de legitimidad que rodea los derechos de la propiedad privada. Al mismo tiempo, exorcizamos aquel tinglado de relaciones sociales violentas y destructivas en que está imbuido casi todo lo que está a nuestro alrededor. ‘Destruyendo’ la propiedad privada, convertimos su valor de cambio limitado en un valor de uso expandido [...] muchas personas ya no verán la ventana de una tienda o un martillo de la misma manera que antes. El empleo potencial del panorama urbano entero ha crecido en un millón de veces [...] las ventanas rotas se pueden arreglar o sustituir, pero esperamos que persista por mucho tiempo el hecho de infringir la aceptación pasiva [...] la propiedad privada, especialmente la propiedad privada de las multinacionales, es en sí misma, más violenta que cualquier acción contra de ella... en una sociedad basada sobre los derechos de propiedad privada, los que son capaces de

acumular lo que otros necesitan o quieren, tiene un poder mayor. Consecuentemente, ellos ejercen un control mayor sobre lo que otros perciben como necesidades o deseos, generalmente para el incremento de su provecho” (2000).

En pocas palabras: la violencia del Bloque es una violencia simbólica no tanto en el sentido, bastante obvio, de que golpea los símbolos del capital, sino que intenta romper con la significación válida del símbolo, revelando el juego de fuerzas que se esconde detrás de ello. Se trata de un proceso de deontologización. Así pues, el uso de la fuerza, lejos de ser un acto de modificación del contexto político-social, es en cambio una intervención sobre la única significación (aceptada como) válida: la violencia conlleva el vaciamiento del significante para iluminar el juego de fuerzas que han engendrado el significado. La violencia, con su bruta materialidad, penetra en el terreno del imaginario y del simbolismo para hacerse con la uniformidad de la significación válida. La violencia del Bloque forzaría al sistema al revelar la guerra que se agita detrás de la supuesta paz social y, de esta manera, alumbraría aquel “afuera” del significado corriente, en cuanto el único proveedor de sentido. Es decir, si la destrucción de los cristales del McDonald’s, las fachadas de las multinacionales o los cajeros de los bancos, revela la fragilidad de la ilusión que los sostienen, pues el uso de la violencia deconstruye cierto imaginario y, en este sentido, procura derribar la ideología. Para decirlo en las palabras del ya citado AK Thompson (2010: 9) “el disenso existe en un espacio indeterminado entre el significante y el significado, entre la política y su fetiche representacional”.

CONCLUSIÓN

En este artículo hemos intentado explicar el uso de la violencia dentro del Bloque Negro. Vimos que el uso de la violencia no se debe tanto a una elección fija, sino que depende de un conjunto de factores tanto estructurales como coyunturales y donde la contingencia política y la visibilidad del evento juegan un papel fundamental. Al mismo tiempo vimos que las herramientas clásicas de análisis de la violencia política se revelan insuficientes a la hora de investigar un fenómeno que se escapa de la categoría clásica de movimiento social. Nuestro examen de la composición del Bloque, de los contextos en los cuales actúa, así como de su ideología, si por un lado no indica patrones rígidos en el uso de la violencia (respuesta estatal, intransigencia ideológica, etc.), por el otro revela un fuerte componente comunicativo-simbólico que busca desvelar la violencia sistémica de sus objetos de ataque. Nos parece entonces que la teatralidad de la violencia del Bloque, más que el mero espectáculo del uso de la fuerza, tenga la finalidad de enseñar la violencia como el verdadero fundamento del sistema al cual se opone. Por esto, fallan el tiro las dos versiones opuestas acerca del “comienzo de las violencias”: quienes consideran el Bloque como el principal atacante de las fuerzas policiales, y quienes en cambio lo consideran una fuerza reactiva y que solo se defiende de los abusos de la policía. La primera asimila las

acciones del Bloque al puro acto vandálico, casi a una pelea de estadio. Esta visión va a menudo acompañada por el análisis que respalda la vieja tesis de la “desviación” psicológica de los miembros involucrados y pasa por alto (consciente o inconscientemente) la dimensión contextual de la violencia. En cambio, la segunda postura, compartida por los propios militantes, hace hincapié en el aspecto moral de la violencia del Bloque y la legitimidad en contestar al sistema con cualesquiera medio. Nosotros, en cambio, propusimos leer el Bloque como una organización atípica al interior de los NMS, ya por lo que se refiere a su composición interna, ya con respecto a las finalidades que se propone. En ello, la decisión de acudir a la violencia, ya sea por oportunidad política, ya por elección ideológica, es solo una de las formas a través de las cuales los grupos de afinidad de un Bloque procuran poner en práctica la acción directa y la democracia deliberativa. La violencia es percibida como un tipo de acción compartida e igualitaria, que pretende tener un papel transformador no tanto en el sentido de transformación “total” y escatológica, sino como deontologización del sistema vigente. La violencia, en conclusión, quiere ser una modalidad de la acción colectiva que, en las intenciones de sus promotores, resulta eficaz en la medida en la que consigue comunicar un “otro” contenido acerca de la violencia misma, es decir, lo de ser la condición para el funcionamiento del sistema.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a los dos revisores anónimos por los útiles consejos que han hecho posible este trabajo.

Referencias

- ACME Collective. 2000. *N30 Black Bloc Communique*. Disponible en web: <http://theanarchistlibrary.org/library/acme-collective-n30-black-bloc-communique> (consulta: 21 de abril de 2014).
- Arditi, Benjamin. 2012. “Insurgents don’t have a plan, they are the plan”, *Journalism, Media and Cultural Studies*, 1 (1): 1-17.
- AA. VV, 2003. *Black Block Rising. Social network in Brasil*, SecDev Analytics and The Igarapé Institute, International Development Research Centre, Ottawa.
- Beeman, William O. 1993. “The anthropology of theater and spectacle”, *Annual Review of Anthropology*, 22: 369-393.
- Carter, April. 1978. “Anarchism and Violence”, en J. Pennock y J.R. Chapman (eds.), *Nomos XIX – Anarchism*, New York: NYU Press, pp. 320-340.
- Cohen, Jean. 1985. “Strategy or identity: New theoretical paradigms and contemporary social movements”, *Social Research*, 52 (4): 663-716.
- Coser, Luis. 1961. *Las funciones del conflicto social*. FCE: México.

- Darnovsky, M., B. Epstein y R. Flacks (eds.). 1995. *Cultural Politics and Social Movements*. Philadelphia: Temple University Press.
- Davies, Wyre. 2013. *Black Bloc hijak teacher's protest*. Disponible en web: <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-24453113> (consulta: 20 de abril de 2014).
- Deleuze, Gilles y Felix Guattari. 2002. *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos.
- Della Porta, Donatella. 1995. *Social Movements, Political Violence, and the State*. Cambridge: Cambridge University Press
- Della Porta, Donatella y Mario Diani. 2006. "Social Movements and Organizational Form", en *Social Movements: An Introduction*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Depuis-Déri, Francis. 2010. "Anarquism and the politics of the affinity groups", *Anarchist Studies*, 18 (1): 40-61.
- Depuis-Derí, Francis. 2010. "Black Blocs ten years after Seattle", *Journal For The Study of Radicalism*, 4 (2): 45-82.
- Eisinger, Peter K. 1973. "The Conditions of Protest Behavior in American Cities", *American Political Science Review*, 67, 11-28.
- Feierabend, Ivo K. 1972. "Systemic Conditions of Political Aggression: An Application of the Frustration-Aggression Theory", en Ivo K. Feierabend, Rosalind L. Feierabend y Ted R. Gurr (eds.), *Anger, Violence and Politics, Theories and Research*. Englewood Cliff: Prentice Hall, pp. 136-183.
- Flugenock, Mike. 2000. *A16, a sort of Epilogue: Black Bloc*, Salute. Disponible en web: <http://www.sinkers.org/a16/blackbloc/> (consulta: 21 de abril de 2014).
- Foucault, Michel. 2010. *Genealogía del racismo*. La Plata: Editorial Altamira.
- George, Susan y M. Wolf. 2002. *La Mondialisation libérale*. Paris: Bernard Grasset-Les Échos.
- Goodwin, Jeffrey. 2012. "Introduction to a special issue on political violence and terrorism: political violence as contentious politics", *Mobilization*, 17 (1): 1-5.
- Graeber, David, 2002. "The New Anarchists", *New Left Review*, 13 (5): 66-78.
- Griseri, Paolo y Francesco Viviano, 2010. *Violenti, organizzati o "cattivi" per caso. Da destra e da sinistra un mondo contro*. Disponible en web: <http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2011/10/20/news/mappa-23593744/> (consulta: 20 de abril de 2014).
- Gunning, Jeroen. 2009. *Critical Terrorism Studies: A New Research Agenda*. London: Routledge.
- Habermas, Jürgen. 2008. *Conciencia moral y acción comunicativa*. Trotta: Madrid.
- Iglesias Turrión, Pablo. 2008. *Multitud y acción colectiva postnacional: un estudio comparado de los desobedientes (2000-2005)*. Tesis Doctoral, Departamento de Ciencia Política y de la Administración II, Universidad Complutense de Madrid.
- Inglehart, Ronald. 1977. *The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics*. Princeton: Princeton University Press.
- Katsiaficas, Georges. 2001. "The Necessity of Autonomy", *New Political Science*, 23 (4): 547-553.

- Kristeva, Julia. 1986. *The Kristeva Reader*. New York: Columbia University Press.
- LeVine, Mark. 2013. *The Revolution back in black*, AlJazeera. Disponible en web: <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/02/201322103219816676.html> (consulta: 20 de abril de 2014).
- McAdam Doug y Dietrich Rucht. 1993. "The Cross-National Diffusion of Movement Ideas", *Annals of the American Academy of Political and Social Sciences*, 528: 56-74.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow y Charles Tilly. 2004. *Dynamics of contention*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Magnoli, Demetrio. 2014. *Nas franjas do Black Bloc*. Disponible en web: <http://oglobo.globo.com/opiniaio/nas-franjas-do-black-bloc-9534183> (consulta: 20 de abril de 2014).
- Melucci, Alberto. 1999. *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: El Colegio de México.
- Melucci, Alberto. 1976. *Movimenti di rivolta. Teorie e forme dell'azione collettiva*, Milano: Etas.
- Melucci, Alberto. 1989. *Nomads of the Present*. London: Hutchinson Radius.
- Montes, Jérôme. 2001. "Mouvements anti-mondialisation: La crise de la démocratie représentative", *Études internationales*, 33 (4): 773-782.
- Milstein, Cindy. 2010. *Anarchism and Its Aspirations*. Oakland, AK Press.
- Nail, Thomas. 2013. *The politics of the mask*. Disponible en web: http://www.huffingtonpost.com/thomas-nail/the-politics-of-the-mask_b_4262001.html (consulta: 20 de abril de 2014)
- Neal, David, 1997. *Anarchism: Ideology or Methodology?* Disponible en web: <http://theanarchistlibrary.org/library/dave-neal-anarchism-ideology-or-methodology> (consulta: 21 de abril de 2014).
- Offe, Claus. 1985. New Social Movements: Changing Boundaries of the Political. *Social Research*, 52, 817-868.
- Owens, Lynn y Kendall L. Palmer. 2003. "Making the News: Anarchist Counter-Public Relations on the World Wide Web", *Critical Studies in Media Communication*, 20 (4): 335-361.
- Pleyers, Geoffrey. 2004. "Des black blocs aux alter-activistes: Pôles et formes d'engagement des jeunes altermondialistes", *Lien social et politiques*, 51: 123-134.
- Rahmani, Sina. 2009. "Macht kaputt was euch kaputt macht: On the history and the meaning of the Black Block", *Politics and Culture*, 4. <http://politicsandculture.org/2009/11/09/macht-kaputt-was-euch-kaputt-macht-on-the-history-and-the-meaning-of-the-black-block/> (consultado el 21/10/2014).
- Rawls, John. 2006. *Teoría de la justicia*. México: FCE.
- Riches, David. 1986. *The Anthropology of violence*. Blackwell: Oxford.
- Saviano, Roberto. 2010. *Lettera ai ragazzi del movimento*. Disponible en web: http://www.repubblica.it/scuola/2010/12/16/news/lettera_saviano-10251124/ (consulta: 20 de abril de 2014).
- Starr, Amory. 2005. *Global Revolt. A guide to the movements against globalization*. New York: Zed Books.

- Tarrow, Sidney. 1983. *Struggling to Reform: Social Movements and Policy Change during Cycles of Protest*. Western Societies Paper 15. Ithaca: Cornell University.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Random House: New York.
- Tilly, Charles. 2003. *The Politics of Collective Violence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly, Charles, Louise Tilly y Richard Till. 1975. *The Rebellious Century 1830-1930*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Thompson, Andrew. K. 2010. *Black Bloc, White Riot: Anti-Globalization and the Genealogy of Dissent*, Oakland: AK Press.
- Thompson, John B. 1995. *The media and modernity: a social theory of the media*, Stanford: Stanford University Press.
- Touraine, Alain. 1969. *La sociedad post-industrial*. Barcelona: Ariel.
- Touraine, Alain. 1965. *Sociología de la acción*. Barcelona: Ariel.
- Wallerstein, Immanuel. 2004. *Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos. Un análisis de sistemas-mundo*. Madrid, Akal.
- Wilkinson, Paul. 1986. *Terrorism and the liberal State*. New York: New York University Press.
- Wolff, Robert P. 1969. "On Violence", *The Journal of Philosophy*, 66 (19): 601-616.
- Zerzan, John. 2004. *Futuro Primitivo*. Valencia: Numa Editorial.
- Zizek, Slavoj. 2009. *Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales*. Barcelona: Paidós.
- Zwerman, Gilda y Patricia G. Steinhoff, 2005. "When Activists Ask for Trouble: State-Dissident Interactions and the New Left Cycle of Resistance in the United States and Japan", en Christian Davenport, Hank Johnston y Carol Mueller (eds.), *Repression and Mobilization*. Minneapolis: University of Minnesota, pp. 85-107.

Presentado para evaluación: 5 de mayo de 2014

Aceptado para publicación: 10 de octubre de 2014

VALERIO D'ANGELO, Universidad Autónoma de Madrid
valeriodangelo@ymail.com

Licenciado en Ciencias Políticas por la LUISS Guido Carli de Roma y magíster en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Actualmente está cursando un doctorado en Filosofía Política en la Universidad Autónoma de Madrid.

Between ballots and bullets: Executive competitiveness and civil war incidence, 1976-2000

Entre votos y balas: competitividad del Ejecutivo e incidencia de guerra civil, 1976-2000

Danilo Freire

King's College London
danilofreire@gmail.com

Abstract

Although recent research has yielded some determining elements to civil war, the influence of political factors on internal conflicts remains disputed. This article presents a critical review of the most widely used indices of democracy in civil war studies, and suggests that the competitiveness of the executive power can be a useful measure for quantitative conflict research. The paper also analyses, by means of statistical regression, the relationship between the competitiveness in the executive recruitment and civil war incidence from 1976 to 2000. The findings indicate that both single-candidate and multi-party elections reduce the incidence of civil war. Furthermore, the results lend support to the hypotheses put forward by recent literature that ethnic fractionalisation, mountainous terrain, large population and centralised political systems significantly heighten the risk of incidence of civil war, while high GDP per capita and economic growth decrease the likelihood of internal conflicts.

Keywords: civil wars, elections, executive branch, political regimes, political violence.

Resumen

Investigaciones recientes han establecido diversos elementos causales para las guerras civiles. Sin embargo, la influencia de los factores políticos en conflictos internos permanece cuestionable. Este artículo presenta una revisión crítica de los índices de democracia más utilizados en los estudios de guerra civil, y sugiere que la competitividad del poder ejecutivo puede ser una medida útil para el análisis cuantitativo de conflictos internos. El texto también analiza, con el uso de técnicas de regresión estadística, la relación entre competitividad en el poder ejecutivo e incidencia de guerras civiles de 1976 a 2000. Los resultados obtenidos indican que tanto las elecciones con candidato único

como las multipartidistas reducen la incidencia de guerras civiles. Además, en línea con diversas hipótesis presentadas en la literatura reciente, dichos resultados apuntan que la división étnica, la existencia de un terreno montañoso, una alta población y sistemas políticos centralizados aumentan significativamente la probabilidad de ocurrencia de guerras civiles, mientras que un elevado PIB per cápita y crecimiento económico disminuyen su incidencia.

Palabras clave: elecciones, guerras civiles, poder ejecutivo, regímenes políticos, violencia política.

INTRODUCTION

Political factors have been frequently cited as major sources of civil wars¹. Indeed, a number of recent studies indicate that regime transitions (Hegre *et al.*, 2001), majoritarian systems (Reynal-Querol, 2002), administrative centralism (Lake and Rothchild, 1996), and government repression (Zimmerman and Alves, 2007) tend to increase the likelihood of internal conflicts. On the other hand, the quantitative literature on civil wars has also shown that proportional representation (Saideman *et al.*, 2002), checks and balances in governments (Reynal-Querol, 2005) and the presence of democratic neighbours (Sambanis, 2001) make a state less prone to insurgencies and domestic conflicts.

Nevertheless, the relationship between political regimes and civil wars is still controversial. Although a number of authors have suggested the existence of a quadratic (“inverted-U”-shaped) relationship between political inclusiveness and internal conflicts (Ellingsen and Gleditsch, 1997; Hegre *et al.*, 2001; Regan and Bell, 2010), some scholars have stated that political variables have low explanatory power in civil wars models (Fearon and Laitin, 2003). Others have also claimed that most of the recent statistical results are biased due to problematic coding procedures in different indices of democracy (Cheibub *et al.*, 2010; Strand, 2007; Vreeland, 2008). Hence, by adopting a more specific variable we could shed some light on the contested relationship between political factors and civil conflicts. Not only we would be able to avoid the coding flaws of aggregated democracy indices, but such findings could also lend stronger internal validity to the empirical analyses of civil war incidence.

However, an important question remains: what disaggregated political variable is best suited for this task? In this paper, I adopt Schumpeter’s (2003) definition of democracy as a competition between leaders and argue that *the competitiveness of the executive power* is the most appropriate variable for this work. According to Carey (2007: 49), there are three important advantages in using such measure instead of aggregated democracy indices. First, focusing on the executive gives us considerably more precise results when compared to those obtained with broadly-defined categories as autocracy, anocracy² and

1. In this article, I use the terms “civil wars”, “civil conflicts”, “internal wars”, and “civil strife” interchangeably.

2. Anocracies are usually defined as regimes that fall somewhere in the middle of the Polity IV scale (which goes from -10 to +10), hence featuring characteristics of both democracies and dictatorships (Fearon and Laitin, 2003: 81). However, the concept is purely “data-driven” with almost no theory behind it (Regan and

democracy. Second, the executive tends to be, mainly in developing countries, the most influential branch of the state, thus analysing its features would surely help us understand how those governments work. Last but not least, since the so-called anocracies share a few characteristics with both democracies and autocracies, adopting a specific aspect of the political institutions could reduce the ambiguity of that classification. Carey's work, nonetheless, also has its limitations. Since the author only deals with cases from Sub-Saharan Africa, one may argue the scope of the paper is bit narrow and should be broadened to a global study; moreover, due to the fact that its dependent variable is not limited to civil wars *per se*, since it includes minor violent conflicts as well (Carey, 2007: 50-53), her results are not directly comparable to those obtained in other studies.

The article proceeds as follows. In the first section I briefly present a literature review of the large-N studies of civil war with special attention to the relationship between political regimes and civil conflicts. The second part consists in a critical evaluation of some of the most commonly-used indices of democracy (Polity IV (Marshall and Jaggers, 2002); Freedom of the World (Freedom House, 2001); Polyarchy Dataset (Vanhanen, 2003); Database of Political Institutions (Beck *et al.*, 2001)) and in a justification of why the competitiveness of the executive branch clarifies important aspects of political systems³. Lastly, I analyse, using statistical regression, the relationship between the competitiveness of the executive power and the incidence of civil wars from 1976 to 2000.

LITERATURE REVIEW

Although there is no consensus on what factors should be included in an explanatory "standard model" for civil wars (Dixon, 2009: 719), a number of variables are consistently mentioned as significant predictors of internal conflicts⁴ (Blattman and Miguel, 2010; Dixon, 2009; Hegre and Sambanis, 2006; Mack, 2002; Sambanis, 2004). One of such predictors is *population size*⁵ (Brückner, 2010; Collier and Hoeffler, 2004; Fearon and Laitin, 2003; Hegre and Sambanis, 2006; Sambanis, 2001). The authors suggest two main

Bell, 2010: 748). Even the term itself is misleading, since it suggests a total absence of state control (*άνω* "above" and *κράτος* "state"). This is clearly not the case. Although also vague, "hybrid regime" is perhaps a better term than anocracy (Zimmerman, 2008: 70), and should be used more frequently to describe those forms of government.

3. These two sections are revised and abridged versions of Freire (2012a) and Freire (2012b).

4. Evaluating the similarities of between the factors associated with the onset and continuation of civil wars, Bleaney and Dimico (2011:145) argue that "if we start from the null hypothesis that the factors associated with onset and continuation are essentially the same, and if we only reject this where the data suggest that we should do so, then the conclusions that we are likely to draw from the empirical evidence are somewhat different from those reached by treating onset and continuation as independent". Following the authors' conclusions, in this paper I shall treat both onset and incidence of internal wars as essentially similar phenomena and review texts that use either onset or incidence as a dependent variable.

5. According to Raleigh and Hegre (2009: 224), "a country with a population of 10 million inhabitants has an estimated risk that is twice as high as one of 1 million inhabitants".

causal mechanisms that link a large population to an increase in the risk of civil conflicts⁶: one can argue that when a vast population lives in the same territory it puts strong pressures over scarce natural resources such as water or arable land, hence potentially leading the country to an internal conflict⁷ (Homer-Dixon and Blitt, 1998), while others posit that, simply by its size, a large population could provide a vast supply of potential rebel group members (Fearon and Laitin, 2003: 83).

Low income levels are also frequently associated with higher risk of civil war (Blattman and Miguel, 2010; Collier and Hoeffler, 2004; Dixon, 2009; Fearon and Laitin, 2003; Hegre and Sambanis, 2006). Despite the fact that there is substantial evidence that the relationship between GDP per capita and civil war risk is negative (Dixon, 2009: 715), the causal mechanisms behind such finding are yet unclear. While Collier and Hoeffler (2004) posit that low GDP per capita is a proxy for reduced opportunity costs of rebellion, Fearon and Laitin (2003: 76) affirm that low levels of income actually captures state weakness and indicates that poor states are not able to mobilise resources and fight effectively against rebel groups⁸. More research is still needed in order to distinguish between them⁹.

Economic growth, in its turn, has a more evident relationship with civil war incidence: when there are better economic opportunities for the individuals, they tend to abandon dangerous activities (such as engaging in an armed conflict) in favour of less risky but still profitable occupations (Blattman and Miguel, 2010; Collier and Hoeffler, 2004; Dixon, 2009; Miguel *et al.*, 2004). Therefore, economic growth is negatively correlated with the likelihood of internal conflicts.

The role of ethnicity in internal wars, however, is not entirely clear. To begin with, the notion of ethnicity itself is notably hard to operationalise (Kalyvas, 2008), what makes the indices used to measure that concept predictably problematic (Posner, 2004). Moreover, there is no agreement on whether a conflict should be coded as predominantly ethnic or non-ethnic due to the potential changes in the influence of ethnicity at different levels of analysis (Kalyvas, 2006: 10). Considering such theoretical difficulties, it is not surprising that so far the results are inconclusive. Whereas some authors did not find any significant association between ethnicity (proxied by the *Ethnolinguistic Fractionalization Index*¹⁰)

6. Although interesting and plausible, such mechanisms still have to be scrutinized in further detail by the academic community. So far it has not been possible to test or clearly differentiate their properties. Unfortunately, this is a recurrent problem in cross-national, large-N econometric studies: while statistical analyses are useful to determine which factors consistently predict an event across a variety of cases, they are usually silent about causality processes. For an interesting critique of how this problem affects the civil war literature, see Kalyvas (2008).

7. The argument is clearly neo-Malthusian in nature (see Malthus, 1826).

8. On the “greed versus grievance” debate, cf. Berdal (2005). For an article investigating the relationship between civil war onset and state capacity through a focus on the role of primary commodities see Thies (2010).

9. “[N]either of these two “pure” interpretations is entirely justified given the evidence at hand. The link between income levels and armed conflict is theoretically complex, and finer-grained data –say, on incomes that revert to the state versus the citizenry, or actual longitudinal measures of state capacity– is required to distinguish between these interpretation” (Blattman and Miguel, 2010: 23)

10. The ELF was built in 1964 by a group of Soviet social scientists and it reflects the probability that two random individuals are members of a different ethnic group. For two interesting critiques of the ELF see Laitin and Posner (2001) and Posner (2004).

and civil conflicts (Collier and Hoeffler, 2004; Fearon and Laitin, 2003), other researchers claim that the relationship is indeed significant, even if only upon certain conditions (Sambanis, 2001; Collier, 2010; Cederman and Girardin, 2007; Montalvo and Reynal-Querol, 2010; Toft, 2010).

The single geographical variable that has reached some level of consensus is *mountainous terrain* (Dixon, 2009: 720). Since neither the states nor the rebels groups can change a country's geography, mountainous terrain is one of the few variables in the civil war literature that is perhaps free from endogeneity. The causal mechanisms of this relationship, however, are still under-theorised. Even though it seems intuitive that many rebel groups have historically used mountains or forests as hideouts (Buhaug *et al.*, 2009: 544), the ways in which the terrain helps the insurgents (Fearon, 2010: 33) have not been rigorously tested. The positive relationship of mountainous terrain and internal wars, nevertheless, is relatively consistent and can be seen in a number of papers on the topic (Buhaug and Rød, 2006; Fearon and Laitin, 2003; Hegre and Sambanis, 2006).

With regards to political variables, their influence on civil wars is still widely discussed in the academia. Although many political factors have been used in statistical models over the last years, only a few variables consistently reach statistical significance across a number of studies. Federalism is one of them. Federalism is seen by many authors not only as an efficient tool to prevent conflicts in divided societies (Elazar, 1987; Gurr, 2000; Horowitz, 1985; Lijphart, 1977; Saideman *et al.*, 2002), but as the best option for structuring a country after it has been ravaged by a civil conflict¹¹ (Sambanis, 2002: 236). Political instability is often mentioned as an important predictor of civil violence as well. In his review of the civil war literature, Dixon (2009:718) states that “the only real disagreement is over the strength of the relationship [between political instability and civil war], not its direction: regime change is dangerous”. Regime changes may generate violent conflicts either because they profoundly shift the incentives and opportunities of political actors or due to the fact that they inevitably produces new “losers” and “winners” who might adopt violence strategies in order to obtain or remain in power (Cederman *et al.*, 2010: 387), and there is indeed substantial empirical evidence that confirms this finding (Hegre *et al.*, 2001; Fearon and Laitin, 2003; Gleditsch *et al.*, 2009).

The relationship between political regimes and civil wars, nonetheless, is yet far from clear. This finding (or lack thereof) is indeed puzzling, because even though insurgent groups usually justify their actions with slogans of freedom and democracy, recent statistical data seem not to support such claims. In fact, Dixon (2009: 718) shows that of the 27 articles on civil wars he analysed which included “democracy” as an independent variable, in no less than 19 of them the political measure could not reach statistical significance, and, what is curious, in 5 studies the authors found a *positive* relationship of democracy and civil conflicts.

11. See also Christin and Hug (2012).

What are the possible causes of this lack of significant results on the influence of political regimes on civil war risk? One important point is that the most commonly-used indices of democracy Polity IV (Marshall and Jaggers, 2002), Freedom of the World (Freedom House, 2001), Database of Political Institutions (Beck *et al.*, 2001), Polyarchy Dataset (Vanhanen, 2003) and Scalar Index of Polities (Gates *et al.*, 2006) have very different coding and measurement rules. Hence, it is possible than one may find a strong, statistically significant relationship when using one of those indices but not obtain the same results using another. For instance, if one runs a simple Pearson correlation of “political rights” and “civil liberties” in Colombia (1972-2009) with data from Polity IV and Freedom of the World, the coefficient between the variables is .44, a remarkably low value considering that we are taking only two simple procedural aspects of political regimes into account¹².

Moreover, Vreeland (2008) argues that the most robust link between political regimes and civil war risk, the existence of an “inverted-U” relationship where anocracies (hybrid regimes) are more likely to experience internal conflicts¹³, is due to errors in Polity IV’s (Marshall and Jaggers, 2002) coding procedures and not to the fact that anocracies are *per se* more prone to civil war. Since Polity codes countries in conflict as zero, right in the middle of their scale (-10 to +10), is indeed obvious that anocracies which are by definition situated between democracies and autocracies are over-represented in the models¹⁴. As the author notes, “[for political competition variables], observations are coded in the middle when political participation is factional, a situation where political competition between groups is ‘intense, hostile, and frequently violent. Extreme factionalism may be manifested in the establishment of rival governments and in civil war’. At worst, then, the finding is tautological: civil war is most likely where there is civil war” (Vreeland, 2008: 402). After replicating the regressions presented by Hegre *et al.* (2001) and Fearon and Laitin (2003), Vreeland (2008: 409-412) does not find a quadratic relationship between political regimes and civil war onset¹⁵.

But are the aggregated indices of democracy the only way to measure a country’s political dimensions? Certainly not. In the next chapter, I argue that the executive competitiveness is a good variable for researchers interested in evaluating the impact of political factors on civil war risk. In the next section I offer a criticism of the four most commonly-used indices of democracy [Polity IV (Marshall and Jaggers, 2002), Freedom in the World (Freedom House, 2001), Polyarchy Dataset (Vanhanen, 2003) and the Database of Political

12. I thank Tiago Peterlevitz for the example.

13. See De Soysa (2002), Fearon and Laitin (2003), Hegre *et al.* (2001) and Sambanis (2001).

14. After analysing the data from Hegre *et al.* (2001), Strand (2007: 3) says that 2/3 of all civil wars (88 in 132 conflicts) occur in factional regimes, of which 72% were coded as anocracies by Marshall and Jaggers (2002).

15. Strand (2006: 185) also replicates the analyses of Fearon and Laitin (2003) and Hegre *et al.* (2001) to check the robustness of the “inverted-U”, but his results are identical to those obtained by Vreeland (2008): according to the author, there is no relationship between political regimes and civil war onset.

Institutions (Beck *et al.*, 2001)] in order to verify which political variables are more theoretically consistent and not correlated with civil violence.

AN EVALUATION OF INDICES OF DEMOCRACY

Political regime classifications are perhaps as old as Western political thought itself. The first attempts to analyse government types can be found in the works of classic philosophers such as Herodotus, Plato, Aristotle, and Machiavelli, most of them focusing on how the number of people holding power changed the character of the political structures. More recently, two authors are frequently cited as the key theoretical contributors to the modern indices of democracy, namely Joseph Schumpeter (2003) and Robert Dahl (1972). Schumpeter (2003) places leadership competition at the core of its classification of political regimes¹⁶. His main assumption is that a democracy is exclusively “[...] that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote” (Schumpeter, 2003: 269) and should not be defined in normative terms as a regime that pursues “the common good”, once it is not possible to determine what the common good actually is (Munck, 2009: 122). Instead, democracy is a *procedure* adopted by institutions to make decisions regarding political power¹⁷.

Schumpeter’s definition of political regimes provides a consistent theoretical framework for researchers, and it has been widely used in an array of recent empirical studies on the topic (e.g. Alvarez *et al.*, 1996; Cheibub *et al.*, 2010; Huntington, 1991; Vreeland, 2003; Weffort, 1992). Due to Schumpeter’s clear theoretical formulation and his use of a simple measure (competitive elections), his conceptualisation of democracy is indeed appealing to many political scientists. Additionally, it stresses that alternation of power is “[...] a key criterion to distinguish democracies from nondemocratic government by guardians, who may claim to rule in the name of the people but do not allow for a process of public debate about government decisions and citizen choices among alternatives” (Munck, 2009: 122).

Although it is not true that Schumpeter completely disregarded other aspects of democracy and incurred in the “fallacy of electoralism” (Karl, 1995)¹⁸, it is true that the author

16. Schumpeter’s emphasis on political competition as the defining characteristic of democracy may be parallel to his view that economic competition is the basis of the capitalist system (Hospers, 2004: 42).

17. Schumpeter may have been influenced by Max Weber’s political ideas when he wrote *Capitalism, Socialism and Democracy* (Held, 2006: 142). As summarised by Breiner (1996: 162), “The vote is the way in which the masses subordinate themselves under a leader chosen by themselves, ‘*die Unterordnung unter selbstgewählte Führer*’. The ultimate goal of such direct choice of leaders is, it seems, to turn the whole state into a “proving ground” for the selection of leaders”.

18. Terry Karl himself clearly states that Schumpeter could not be criticised on those grounds: “Schumpeter, unlike Jeane Kirkpatrick and other U.S. policymakers in the 1980s, considered civil liberties a necessary condition for the operation of democracy. Thus, it cannot be assumed that he would have shared the current

indeed limits his analysis of political regimes to the competition between leaders. In that sense, Robert Dahl (1972) provides an important complement to Schumpeter's theory of government and adds a second axis to that framework: *political participation*. Dahl (1972:29) writes that even though other characteristics of regimes could have been included in his model, those two dimensions — competition and participation — are undoubtedly the most relevant ones. For the sake of parsimony, the analysis should be limited to that pair of categories.

Dahl's conceptualisation of democracy has become the main reference for many political indices¹⁹. The criteria used in *Freedom in the World* (Freedom House, 2001) and in *Polity IV* (Marshall and Jaggers, 2002), for instance, are clearly derived from Dahl's bi-dimensional classification of regimes, and one may assume that Dahl's classification is perhaps close to a *de facto* standard in the field.

The theory advanced by Dahl (1972) is indubitably well-developed and consistent, but the way in which it is operationalised is worthy of criticism. Participation is particularly difficult to measure because one may easily incur in anachronisms when evaluating past political regimes. Universal suffrage, for instance, is currently a ubiquitous feature of democracies, but its absence in the beginning of the 20th Century does not mean that all those regimes should be classified as autocracies. As noted by Alvarez *et al.* (1996:19), according to Dahl's participation criteria, the United States should not be considered a democracy until the 1950s, and Vanhanen (2003: 257) acknowledges that in his index of democracy — The Polyarchy Dataset — many polities that had competitive elections could not be considered democracies exclusively due to their low suffrage compared to modern standards.

In fact, what we see is that those indices that tried to substitute the Schumpeterian minimalist definition of democracy for a wider theoretical construct have obtained very questionable results. It seems that even though the minimalist conceptualisations of regimes have their inconveniences, they are preferable to maximalist approaches due to their clarity and parsimony (Munck, 2009: 123). According to Munck (2007: 29), “[...] it is noteworthy that Dahl himself retreats considerably from his broad concept of democracy when he suggests ways to operationalise democracy. Ironically, the list of institutional features he has proposed to measure democracy is strikingly Schumpeterian, stopping at the point in the political process when public officials are elected”.

Hence, there is a trade-off between minimalist definitions of political regimes, limited in scope but clear in their conceptualizations, and maximalist positions, better grounded in modern political theory but potentially problematic. In this paper I adopt the first. The

emphasis on the mere presence of elections, which I have elsewhere referred to as “electoralism”, that is, “the faith that merely holding elections will channel political action into peaceful contests among elites and accord public legitimacy to the winners in these contests” (Karl, 1990: 17).

19. Coppedge *et al.* (2008) aptly refer to Dahl's criteria as “the two persistent dimensions of democracy”, due to its widespread use in Political Science research.

Schumpeterian definition of regimes has not only a sound theoretical foundation but also an extensive coverage over time, since it relies on a single indicator and is based upon observable, not subjective judgements (Alvarez *et al.*, 1996: 3). One shall therefore consider what would be the indicator of existing datasets that better fits this definition. In the subsections below I briefly discuss the four most common democracy indices in order to choose a variable which is consistent with the Schumpeterian concept stated above and is not correlated with our variable of interest, civil war incidence.

Polity IV

The *Political Regime Characteristics and Transitions* dataset, commonly known simply as *Polity* since its first version, is pervasive in civil war studies. Unfortunately, this index of democracy is not perfectly compatible with conflict research. As noted by Strand (2007: 3), there are serious endogeneity problems with two Polity indicators, PARREG (Regulation of Political Participation) and PARCOMP (Competitiveness of Participation). As mentioned above, category number 2 of PARREG tells us that “extreme factionalism can be manifested in the establishment of rival governments and in civil war” (Vreeland, 2008: 402). Needless to say, such category inevitable biases any statistical model of civil conflict. Using a dummy variable for factionalism, Strand (2007: 14-15) did not find any evidence of the so-called “inverted-U” relationship between political regimes and civil wars onset. Moreover, Vreeland (2008: 407) also draws the attention to another problematic feature of Polity IV (Marshall and Jaggers, 2002): “[...] “interregnum” or “anarchy” observations are coded as 0 (on the -10 to +10 scale, hence coding them as anocracies), and “regime transition” observations are coded as the average of the first and last Polity scores before and after the transition. The custodians of the data warn that these observations “are especially prone to outbreaks of political violence”. After removing this category from the dataset, Vreeland (2008) finds no evidence of an “inverted-U” relationship. The author then resumes his findings saying that “[...] the aggregate Polity scale should not be employed to test hypotheses about regime and civil war in the future. My work suggests that we should employ more sharply defined variables to capture the effects of political institutions. [...] We certainly should not group executive powers, elections, and political violence into one scale to figure out the relationship between civil war and political institutions” (Vreeland, 2008: 419-420).

In a nutshell, while the Polity IV (Marshall and Jaggers, 2002) is indeed a useful index for many areas of comparative politics, its use for civil wars research should be avoided. However, since the authors offer the index’s components in a disaggregated form, one may modify and recode the index in different ways. This procedure may help to mitigate some of the index’s problems, thus making it perhaps useful for a wider range of fields of research.

Freedom in the World

The *Freedom in the World* (Freedom House, 2001) is another index which is widely used in international relations (Norris, 2011; Reynal-Querol, 2002), although it is employed less frequently than the Polity IV (Marshall and Jaggers, 2002). The index bases its classification of regimes on only two dimensions, “political rights” and “civil liberties”, but curiously its definitions are considerably broader than most indices of democracy (Munck and Verkuilen, 2002: 9). In fact, the *Freedom in the World* includes a series of concepts that would rarely be considered essential to a strictly defined concept of democracy, such as academic publishing freedom, lack of corruption and equality of opportunity (Rydland *et al.*, 2008: 73). Moreover, not only the *Freedom in the World* has a number of categories that are only loosely related to each other (Munck, 2009: 23), but it is also frequently deemed as a partial index (Archibugi, 2008: 40) because some of its questions are clearly open to subjective answers (Berg-Schlosser, 2007: 22). Lastly, the authors do not offer any information on what are the sources for the coding procedures or how the different variables are combined into a single aggregated scale (Rydland *et al.*, 2008: 75). It is impossible, therefore, for any researcher to recode or modify the *Freedom in the World* to fits his or her needs (Vreeland, 2008: 414).

Regarding its adequacy to civil war research, *Freedom in the World* performs even worse than Polity IV. Although Polity IV does have variables that are endogenous with civil conflicts, it is possible to remove and recode its problematic components; on the other hand, this is not the case for the index built by the Freedom House. The *Freedom in the World* clearly mentions political violence in its coding²⁰, but since there are no means of removing the contaminated elements from the index, the *Freedom in the World* should not be used in civil war studies.

Polyarchy Dataset

The *Polyarchy Dataset* (Vanhanen, 2003) aims to empirically evaluate Dahl’s (1972) bi-dimensional theory of democracy, and since 1984 it has brought data on political competitiveness and inclusiveness for almost 200 countries. The *Polyarchy Dataset*’s two variables are based strictly upon observable qualities of elections (Strand, 2006: 22) — voting percentages of the winner party and the ratio of voter to the total population

20. Civil violence is mentioned in one coding question (“F3: Is the population free from wars and insurgencies?”) and is one of the “general characteristics” of the political rights’ rating in the index (Rating of 7 – Countries and territories with a rating of 7 have few or no political rights because of severe government oppression, sometimes in combination with civil war. They may also lack an authoritative and functioning central government and suffer from extreme violence or warlord rule that dominates political power”). See Freedom House (2001).

(Vanhanen, 2000: 253) — what makes their measuring and aggregating procedures easy and straightforward to evaluate.

In contrast to Freedom of the World (Freedom House, 2001) and Polity IV (Marshall and Jaggers, 2002) datasets, Vanhanen's index of democracy has no problems of endogeneity with civil conflicts (Vreeland, 2008). Nevertheless, it still has a few shortcomings that may negatively affect the quality of statistical models. First, the manner in which Vanhanen codes political competition is questionable, since it may take the values either of the presidential election, or of the parliamentary election or both, depending on which of those institutions is "predominant" in the government (Vanhanen, 2000: 254). Furthermore, although Vanhanen provides individual tables for each of the countries described in the Polyarchy Dataset, he unfortunately does not mention the voting share of the executive power in states where the legislative is predominant and vice-versa. Therefore, it is impossible for a researcher to recode the variable and create a 'pure' indicator of the executive power, for instance.

Second, the index is highly biased towards countries that have a fragmented political system and adopt compulsory voting. Due to Vanhanen's conceptualisation of political competition, a country in which the elected party received, say, around 25% of the votes is considered two times more democratic than another country whose winning group had 63% of the electorate (Hegre, 2003: 17). In that sense, countries like Brazil or Italy, that have a high number of effective political parties, tend to score higher than, for instance, the United Kingdom, although no one would affirm that the UK is less democratic than those two nations. With regards to the share of the voting population as the measure of participation, the Polyarchy Dataset over-represents countries that have compulsory voting and, as acknowledged by the author himself (Vanhanen, 2000: 255), developed countries in general. In both cases the share of the voting population tends to be artificially inflated, not only because of the legal obligation to vote, but also due to the fact that rich countries tend to have an older population, what places more people at the voting age.

The Polyarchy Dataset (Vanhanen, 2003) do not have coding procedures that are incompatible with civil war research, but due to their own operationalisation it should be used with caution by political scientists.

Database of Political Institutions

The last dataset to be reviewed here is the *Database of Political Institutions* (DPI) (Beck *et al.*, 2001). Of all the indices I evaluate in this paper, the DPI is the only that does not provide any suggested criteria for creating an aggregated measure of democracy; instead, the authors argue that this task should be done by the researchers themselves, who could combine any of the DPI's measures according to their specific needs. This innovative approach makes the DPI one of the most flexible political databases in the field of

comparative politics. Also, DPI's wide coverage and detailed coding procedures are worth mentioning, as they show a serious commitment to scientific standards by the authors.

Nonetheless, the DPI also has some limitations regarding its use in political violence studies. In DPI's "Legislative Index of Political Competitiveness" (LEIC) one of the coding rules includes a clear mention to civil violence in its first category (*I - No Legislature*)²¹, and unfortunately it cannot be removed without causing problems to the scale. One may argue that a possible solution to this problem would be simply to code such cases as missing. However, this practice would be mistaken because it would exclude values that *do not* refer to civil wars, but instead represent strong autocracies which have no legislative power. For instance, the LEIC is coded 1 for Bahrein from 1976 to 2002, but once the country had no civil conflict during the period, it is easy to infer that it is reflecting the autocratic nature of the regime. Iran and Zimbabwe, on the other hand, were coded as 1 in 1980, certainly for the turbulences that occurred after their respective Islamic revolution and war of independence. As two very different political situations are included in a single category and there is no way of removing the problematic part from the variable, the use of LEIC is not recommended.

The "Executive Index of Political Competitiveness" (EIEC) shares the same coding procedure with LEIC. But while its first category (*I - No Executive*) is not inherently problematic since it clearly describes civil wars where the sovereign power is being contested²², there is a serious flaw with the category 5: "multiple parties are legal but only one party won seats" (Keefer, 2010: 15). In a majoritarian election for executive, by definition *only a single party* win the seat, regardless of how free and fair the voting procedures had been²³. But since only 15 observations are coded as EIEC = 5 in the whole dataset, they can be removed from the dataset without causing any significant problem to the analyses²⁴.

Competitiveness of the Executive Power

In short, *none* of the most commonly-used indices of democracy is perfectly compatible with civil war research. In that sense, using a simple, intuitive measure as a proxy for different political regimes may be more interesting than adopting the indices' aggregated

21. "1 - No Legislature. Assemblies operating under conditions of civil war or where there are power struggles within a country, with the result that its institutions do not control most of the territory or the most important parts of the territory, are scored as 1. This is irrespective of how competitively the assembly has been elected and its formal powers" (Keefer, 2010: 15).

22. In DPI's codebook, the author writes: "Rival chief executives in one country, particularly in the setting of armed conflicts, are counted as No Executive, and thus a score of 1" (Keefer, 2010: 16).

23. In a private communication via email (5th March 2011), Philip Keefer acknowledged that "[...] EIEC = 5 should be rare or even non-existent. In fact, the 2010 version of DPI has 5900 observations, but only 15 cases of EIEC = 5; I think these are probably mistakes". The message is available upon request.

24. The DPI does not have any measure that directly assesses the political participation, and for that reason I limit my review of the index to their competitiveness variables.

scale. I argue that the competitiveness of the executive power is the best possible measure since it fits Schumpeter's (2003) minimalist definition of democracy and have many other practical advantages. As mentioned by Carey (2007: 49), the indices of democracy have very broad and complex rules to define a political regime is, and concentrating on a single aspect of the political system would allow the researchers to draw more specific conclusions about the role of the institutions in civil war incidence. On the one hand, it is easy to divide the competitiveness of the executive power in a small number of categories (three as in Polity IV, or seven as in the Database of Political Institutions), whereas there are no less than 360 possible combinations for "democracy" and 144 for "autocracy" if we use all the measures available in the Polity III dataset (Gleditsch and Ward, 1997: 367).

Also, the executive power is a major component of the political institutions in a given state: in developing countries, where the vast majority of civil wars occur, the political power tends to be highly concentrated in the hands of the executive, so the competition for this branch has a high impact on the lives of individual citizens and of the nation as a whole. The executive power is usually the most significant feature of regime changes: the transition from an authoritarian to a democracy government (or vice-versa) can only be considered permanent after the chief executive has been replaced, as it has been the case in Latin America's or Asia's recent political history. Although the competitiveness of the executive power is not a perfect proxy for the openness of political institutions, the relationship between both is indeed a close one. As Collier (2010: 6-36) affirms, "in the typical election in one of the developed countries, as defined by membership in the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the incumbent government has a chance of reelection of around 45 percent. [...] Among those countries of the bottom billion in the range -10 to zero [autocracies in Polity IV], the president has [a] healthier chance of electoral victory: an amazing 88 percent. [...] I had no idea who would win the American election of 2008, but I had a pretty clear idea about the outcome of the Zimbabwean elections: I confidently expected that President Mugabe would be reelected".

There is an additional reason for using the competitiveness of the executive power in civil war research. In contrast to the competitiveness of the legislative power, many databases measure the competition of the executive, thus enabling us to test the robustness of the models by using different coding procedures for the same variable. Both Polity IV (Marshall and Jaggers, 2002) and the DPI (Beck *et al.*, 2001) have specific variables for the executive competitiveness, and the Polyarchy Dataset (Vanhanen, 2003) includes in its coding a vast number of countries where there is a predominance of the executive power in government²⁵.

Nevertheless, there are also some shortcomings associated with using the executive competitiveness as a proxy for political regimes. The most evident one is that we do not include any measure of political participation, the second regime dimension discussed by

25. The Freedom in the World (Freedom House, 2001) also has a measure for that concept, but since the Freedom House does not provide disaggregated data I was not able to evaluate this variable.

Dahl (1972). However, although participation is clearly important and could add to our understanding of political institutions, we believe the omission can be justified. As argued in the previous section, measures of political participation vary widely, and often do not follow consistent criteria over time. Should the US or Great Britain not be considered democratic in the beginning of the 20th century, since participation was low by today's standards? The answer is not clear. Moreover, states with compulsory voting systems tend to have higher participation rates than countries with facultative voting. If this measure is taken into consideration, the first group will have their scores artificially inflated in democracy indexes, thus biasing the results of our analyses.

I believe that the omission of such variable does not change the results of this paper. On the one hand, our data set starts in 1975, where all democracies had already legally adopted universal suffrage, thus making the participation criterion less relevant. On the other hand, restrictive authoritarian regimes can be correctly identified by the lack of competitiveness for the executive power (absence of elections). In this regard, including participation would probably add noise to the estimators without bringing relevant information to the models present in this article.

A problem that cannot be easily overcome is the direct comparison between different measures of executive competitiveness. Although the variables designed to classify executive competition were created with a clear goal in mind, the reliability of the measures are far from perfect. In order to minimise this issue, we include all of them in the models below.

DATA ANALYSIS

In this section, I run a series of logistic regression models to estimate the relationship between the competitiveness of the executive power and civil war incidence from 1976 to 2000. The period was chosen due to data availability concerns: since we only have data on all three measures of executive recruitment and the remaining control variables for those years, that was a natural choice. The dependent variable is *incidence of civil war* as measured by the Armed Conflict Dataset (Gleditsch *et al.*, 2002) in its third version (2005). It indicates a contested incompatibility that concerns government and/or territory where the use of armed force between two parties, of which at least one is the government of a state, results in at least 1000 battle-related deaths²⁶. In this article I shall consider both internal and internalised armed conflicts equally as civil wars. I shall analyse the incidence, where all the country-years in which there is a conflict are counted as 1, instead of onset of civil wars, where only the first country-year is coded as 1, due to the short time period I deal

26. The dataset's codebook can be accessed on the following electronic address: http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/55/55205_Codebook_v3-2005.pdf. In this article, I decided to use the threshold of 1000 instead of 25 battle-related deaths in order to restrict the analysis to civil wars and not include minor violent conflicts.

with in this paper. Civil wars onsets are an extremely rare event, and had I included only those years in the analysis the number of cases would have been severely limited and probably no independent variable would reach statistical significance. Actually, even after choosing civil war incidence, we see that conflicts occur in mere 9.8% of the cases²⁷. A number of studies make use of the incidence of civil war as their dependent variable (Caprioli, 2005; Collier and Hoeffler, 2002; Elbadawi and Sambanis, 2000; Garcia-Montalvo and Reynal-Querol, 2005; Melander, 2005), and I consider it to be an adequate measure for this work as well.

The variables that measure the competitiveness of the executive come from three democracy datasets, the Polity IV (Marshall and Jaggers, 2002), the Database of Political Institutions (Beck *et al.*, 2001) and the Polyarchy Dataset (Vanhanen, 2003). As with many variables I use in this article, they are also available in the Quality of Government Dataset (Teorell *et al.*, 2011). The variable from Polity IV was transformed into dummies and, as recommended by the authors²⁸, the values of -66, -77 and -88 were coded as “system missing”²⁹. The first category of the scale (“0 - *Non-regulated*”), non-elected government, is used as a reference, and it describes situations in which “changes in chief executive occur through forceful seizures of power”. 1 – *Selection* implies that “chief executives are determined by hereditary succession, designation, or by a combination of both”, and it includes rigged elections, military selection of civilian executives, selections within a single party, etc. 2 – *Dual/transition* are regimes that those who have both hereditary and competitive succession, and is also used for “transitional arrangements between selection (ascription and/or designation) and competitive election”, and 3 – *Elections* refers to leaders who have been chosen by competitive elections with two or more parties.

The measure from the DPI was also modified. Apart from the coding of dummy variables for all the categories of the scale, the category number one (1 – *No Executive*) was removed due to its endogeneity with the dependent variable. Since it also includes cases where a country is facing a civil war, it was coded as “system missing”. Category number five (5 – *Multiple parties are legal but only one party won seats*) was also coded as missing due to the issues discussed in the previous section of this paper. The category used as reference is 2 – *Non-elected executive*. Category 3 – *Elected, 1 candidate*, describes a common situation in many authoritarian countries, where there are elections but there is only one candidate running for the office. It also includes executive selection via referenda and “popular acclamation” votes (Keefe, 2010: 16). The next category is 4 – *1 party, multiple*

27. There are 4092 country-years in the data set, of which 402 are coded as civil wars.

28. See http://www.qogdata.pol.gu.se/codebook/codebook_standard_20dec13.pdf.

29. According to the Polity IV codebook, -66 refers to “cases of foreign “interruption” are treated as “system missing”, -77 are “cases of “interregnum,” or anarchy”, and -88 represent “transition years”. They were all coded as “system missing” in this article in order to avoid either endogenous results with our civil war measures (as it is the case of -77), or to exclude regimes which have not been correctly defined. Please refer to Polity IV’s website for more information on the coding of the executive competitiveness variable. The descriptions above are taken from http://www.qogdata.pol.gu.se/codebook/codebook_standard_20dec13.pdf. Access: 10/10/2014.

candidates, what used to happen in several Communist nations: more than one candidate in the elections, but all linked to a single party. Categories 6 - *largest party received more than 75% of the seats* and 7 - *largest party received less than 75% of the seats* both describe elections where two or more parties were allowed to compete. The difference is the number that one of the parties received, what serves as an informal proxy for democratic yet unequal elections (use of the state apparatus for electoral means, etc.).

Lastly, the competitiveness variable from the Polyarchy Dataset. It is a continuous measure calculated by subtracting from 100 the share of total votes received by the winning party. However, it is indeed necessary to mention that, although the vast majority of its observations refer to the executive power, it may also be that some of their cases are in fact considering the votes received in legislative elections. Despite this shortcoming, it is perhaps useful to use it as a robustness check for the tendencies described by the other measures.

Following Strand (2007) and Vreeland (2008), I expect that:

- *H1: The relationship between the competitiveness of the executive power and civil war is negative.*
- *H2: There is no inverted-U relationship between the competitiveness of the executive power and civil war incidence.*

The control variables were chosen according to their degree of consensus in the specialised literature. In order to evaluate regime changes, I coded two pairs of variables indicating if there is a negative or positive change in both nominal measures of competitiveness of the executive power (autocratisation or democratisation)³⁰. As previously mentioned in this text, regime changes alter the distribution of power in a country and groups that are then marginalised may resort to violence. The impact of federalism on civil war incidence will be analysed using Norris's (2009) measure of decentralisation. It assigns 1 for unitarian states and zero for federal countries. I assume that a decentralised political and fiscal framework is able to provide a more equitable distribution of resources to the population, thus decreasing the risk of civil conflict. In unitarian countries we may assume the opposite effect.

Ethnic fractionalisation is going to be proxied by the *Atlas Narodov Mira* (Teorell *et al.*, 2011) in its original coding. I expect that ethnically-fragmented nations have a higher incidence of civil wars, not only because ethnic divisions may foster animosity amongst different groups, but also because governments that are structured along ethnic lines tend to favour their own groups when providing public policies (Easterly and Levine, 1997).

30. The Polyarchy Dataset's competitiveness' variable was not coded in a similar fashion because it is a continuous measure.

I included a dichotomous variable for oil exports from Fearon and Laitin (2003), which indicates if oil comprises more than 1/3 of a country's total exports. Since oil generates a significant amount of wealth that could be explored by both the government and the rebels. I also added a logged measure of mountainous terrain to assess the proportion of such type of terrain in a nation's territory (Hegre and Sambanis, 2006). The literature affirms that mountains can be used as hideouts and provide shelter to rebel groups.

The three most recurrent variables in civil war models were added to the regressions below. The first is a logged measure of population as computed by the United Nations Statistics Division (2009). Fearon and Laitin (2003) and Hegre (2003), state that a populous country has a vast supply of possible insurgents and a higher demand for different kinds of resources, therefore such variable is present in all models. Real GDP growth also appears as an independent variable (United Nations Statistics Division, 2009). Since economic growth can be seen as a proxy for better work opportunities, it reduces the chances of civil war incidence (Fearon and Laitin, 2003; Collier and Hoeffler, 2004).

Lastly, a measure of GDP per capita which was created by dividing "real GDP" (in constant 1990 thousand US dollars) (United Nations Statistics Division, 2009) by the non-logged population variable mentioned above was added to the models. Either by reducing the costs of rebellion or by acting as a proxy for strong state capacity, real GDP per capita is associated with lower risks of civil war incidence.

With the exception of ethnic fractionalisation and mountainous terrain, which have constant values for each country, all the variables were lagged in one year ($t-1$) in order to prevent eventual multicollinearity issues. Due to the fact that two of the independent variables (ethnic fractionalisation and mountainous terrain) do not vary across the units, only random effect models were estimated. All models were run in Stata 12³¹. Table 1 shows the descriptive statistics and Table 2 summarises the results.

TABLE 1.
DESCRIPTIVE STATISTICS

Variable	N	Mean	St. Dev.	Min	Max
Incidence	4,092	0.098	0.298	0	1
Unelected (Polity IV)	3,520	0.148	0.355	0	1
Selection (Polity IV)	3,520	0.386	0.487	0	1
Dual/Transition (Polity IV)	3,520	0.112	0.315	0	1
Election (Polity IV)	3,520	0.355	0.479	0	1

31. I also estimated the same regressions using the "rare events" correction suggested by Tomz *et al.* (2008) with $\tau = 0.098$. The results were virtually identical to those obtained with regular logistic regression.

TABLE 1.
DESCRIPTIVE STATISTICS (CONT.)

Variable	N	Mean	St. Dev.	Min	Max
Autocratisation (Polity IV)	3,353	0.013	0.111	0	1
Democratisation (Polity IV)	3,353	0.026	0.158	0	1
Unelected (DPI)	3,779	0.262	0.440	0	1
Election, 1 candidate (DPI)	3,779	0.197	0.398	0	1
1 Party, many candidates (DPI)	3,779	0.015	0.122	0	1
Multiparty Election, winner >75% (DPI)	3,779	0.091	0.287	0	1
Multiparty Election, winner <75% (DPI)	3,779	0.435	0.496	0	1
Autocratisation (DPI)	3,601	0.015	0.122	0	1
Democratisation (DPI)	3,601	0.038	0.191	0	1
Political Competitiveness (Vanhanen)	4,189	27.404	25.682	0	70
Unitarian	4,177	0.729	0.444	0	1
Ethnic Fractionalisation	3,354	0.404	0.290	0.010	0.930
Oil Exporter	3,547	0.158	0.364	0	1
Mountains (log)	3,700	2.099	1.434	0	4.557
Population (log)	4,494	15.139	2.274	8.863	20.936
Economic Growth	4,467	3.072	7.717	-66.720	106.280
GDP per capita (1000 US\$1990)	4,491	5.098	8.165	0.050	74.292

Source: Author's elaboration.

TABLE 2.
LOGIT ANALYSES OF THE DETERMINANTS OF CIVIL WAR INCIDENCE, 1976-2000

Dependent Variable: Civil War Incidence	Model I	Model II	Model III
Selection (Polity IV)	-1.022*** (0.183)		
Dual/Transition (Polity IV)	-2.239*** (0.382)		
Election (Polity IV)	-0.767*** (0.210)		
Autocratisation (Polity IV)	0.448 (0.437)		

TABLE 2.

LOGIT ANALYSES OF THE DETERMINANTS OF CIVIL WAR INCIDENCE, 1976-2000 (CONT.)

Dependent Variable: Civil War Incidence	Model I	Model II	Model III
Democratisation (Polity IV)	0.104 (0.431)		
Election, 1 candidate (DPI)		-0.046 (0.179)	
1 Party, many candidates (DPI)		-2.067** (1.045)	
Multiparty Election, winner >75% (DPI)		-0.581* (0.306)	
Multiparty Election, winner <75% (DPI)		-0.188 (0.173)	
Autocratisation (DPI)		0.770** (0.388)	
Democratisation (DPI)		0.439 (0.295)	
Political Competitiveness (Vanhanen)			-0.008*** (0.004)
Unitarian	0.859*** (0.207)	0.866*** (0.198)	0.848*** (0.187)
Ethnic Fractionalisation	1.097*** (0.249)	1.233*** (0.248)	1.350*** (0.236)
Oil Exporter	0.229 (0.178)	0.170 (0.172)	0.178 (0.159)
Mountains (log)	0.298*** (0.049)	0.299*** (0.045)	0.310*** (0.043)
Population (log)	0.347*** (0.049)	0.246*** (0.047)	0.274*** (0.044)
Economic Growth	-0.028** (0.011)	-0.029*** (0.008)	-0.026** (0.009)
GDP per capita (1000 US\$-1990)	-0.040** (0.016)	-0.037** (0.015)	0.025* (0.015)
Constant	-9.5474*** (1.071)	-8.555*** (1.039)	-9.028*** (0.974)
N	2, 570	2, 591	2, 809
Log likelihood	-764.140	-832.626	-904.943
Akaike Inf. Crit.	1, 554.281	1,693.252	1, 827.887

Standard errors in parentheses. * p < .1, ** p < .05, *** p < .01.
Source: Author's elaboration.

The models lend strong empirical support to most of the hypotheses suggested above. It is indeed important to note that all variables that measure the competitiveness of the executive power have a negative sign, regardless of the dataset being used. The

variables that reach statistical significance are also all negative, thus confirming *H1* and *H2*. In this sense, the results also generalise the findings of Carey (2007) and, with respect to civil war incidence, the results show that “[...] any election of the executive is better than choosing the executive without election” (Carey, 2007: 60). Even non-democratic selection processes seem to significantly reduce the likelihood of civil war incidence. In the first model (Polity IV), setting all variables to their medians, I see that the probability of a country with a “selected” executive having a civil war in any given year³² is about 4%, and with a “dual or transitional” the odds are a mere 1.3%. When using the DPI data set for estimating the chance of civil war for a median country which has one party with several candidates, I found a 6.2% risk of civil war incidence, and if the country had a multiparty election where the winner received more than 75% of the votes the odds are about 4%.

Model III shows that the negative effect of the political competition from the Polyarchy Dataset (Vanhanen, 2003) on civil war incidence, also pointing out that an increase in competition decreased the probability of internal conflicts. Setting the remaining independent variables to their medians, we see that a country which scores 0 at the Vanhanen index has about 3% chance of civil war incidence, whereas another one scoring 70 sees its odds reduced to about 1%.

Moreover, none the models show the “inverted-U” relationship between the competitiveness of the executive power and civil wars, what is also in line with the results presented by Strand (2007) and Vreeland (2008). Although we cannot rule out the possibility that such curvilinear relationship might occur in other political variables, it certainly cannot be seen in the executive power.

The regressions also show other robust findings. Six independent variables are significant in the three models, all with the expected signs and largely in accordance to the quantitative literature on civil wars. On the one hand, unitarian government, ethnic fractionalisation, mountainous terrain and large population increase the risk of civil war incidence. Of all these factors, ethnic fractionalisation and large population have the largest impact on the dependent variable. Using the first model as an example and holding the independent variables at their medians, we see that a democracy with a homogenous population has a predicted likelihood of civil war incidence of 3%, but if the population is highly fractionalised its civil conflict incidence risk triples to 9%. With regards to a large population, a hypothetical country which sees its population increase from 10 to 100 million would see its odds of civil war incidence rise from 5% to 11%.

On the other hand, economic growth and GDP per capita, as expected, reduce the risk of civil war incidence. We see that a democratic country which has experienced a negative economic of growth of 5% has about 6.7% risk of civil war incidence, and a positive 5% economic would reduce this chance by almost 2%. Moreover, our models confirm that GDP per capita is indeed one of the most factors to reduce the incidence of civil conflicts.

32. All post-estimation analyses in this paper were performed using Clarify for Stata 12 (Tomz *et al.*, 2003).

Our results show that whereas a democratic country at the lowest 10th percentile of GDP per capita has about 5.6% likelihood of civil war incidence, the odds for the same country at the 90th percentile of GDP per capita are virtually zero. The measure for oil-exporting country, however, does not reach statistical significance in any of the three models.

Despite having the predicted signs in all the models, regime change is only significant when we measure the impact of DPI's measure of autocratisation on civil war incidence. For a country with elections where the winning party won more than 75% of the votes, the odds of civil war incidence when it moves from democracy to autocracy increases about twofold, from 3.9% to 8.2%.

We observe that, in Model I, "selection" and "dual/transitional" are correlated with higher reduction of civil war incidence than democratic elections when we take "unregulated" as the base category. In Model II, "elections with multiple candidates from a single party" also reduces the chances of civil war incidence, while democratic elections, albeit also with the expected negative sign, are not statistically significant. This finding is indeed relevant, but it should be interpreted very cautiously: since there are only a small number of observations for both "selection" in Model I (11.5%) and "elections with multiple candidates from a single party" in Model II (1.5%), the absence of civil wars in those few cases probably leads us to over-estimate the effect of those variables in the analyses presented above.

DISCUSSION

In the first section of this article, I discussed the theoretical problems of several indices of democracy and its applications in civil war research. Following Strand (2007) and Vreeland (2008), I argued that there are several endogeneity issues that affect the Freedom in the World and Polity IV's full index. In the case of Polity IV, the index can be easily disaggregated and recombined in different ways, thus minimising its potential problems. Unfortunately, as mentioned by Vreeland (2008), one cannot remove the contaminated parts of the Freedom in the World, so the Freedom House index is not recommended for civil war analyses.

The Polyarchy Index is not endogenous with civil wars, but the index is not consistent in its coding of political competition. Also, its participation category may not be accurate since it is biased in favour of countries with an older population and compulsory voting system. The index can be used in civil war studies, but one should be aware of its limitations. Regarding the Database of Political Institutions (DPI), the index allows researchers to combine variables in any way they prefer, although it is important to not include indicators that are problematic for civil war studies. I have also shown that the first category in DPI's "Executive Index of Electoral Competitiveness" variable is endogenous with civil conflicts (*1 – No Executive*), and that category 5 contains a logical error and should be

classified as system missing. Apart from these two cases, the variable can be employed by civil war scholars with no further qualifications.

I have suggested that the competitiveness of executive power is a relatively unbiased proxy for political competition. If one decides to adopt a strictly Schumpeterian/minimalist definition of political regimes, focusing on executive competition seems adequate. One can have at least three similar measures of competitiveness to compare the findings (Polity IV's "xrcomp", DPI's "eiec" and Polyarchy's "competition"), the variable is coded in a relatively straightforward manner, and its interpretation is simple. As noted by Carey (2007), it captures the most important aspects of the government, mainly in developing countries, so authors might consider using that variable in their research.

The article also empirically evaluated the relationship of the competitiveness of the executive power and civil war incidence from 1976 to 2000. The results show that, when compared to leaders who have been selected by force, all other methods of executive recruitment are correlated with a lower likelihood of civil conflicts. Although some of the political variables do not reach statistical significance in the models, all measures of competitiveness of the executive power which are statistically different from zero show a negative sign. This includes indirect nomination via political parties and competitive elections.

The findings presented here also dialogue with the literature on regime transition and federalism. In contrast with other civil war studies, the statistical regressions discussed above do not lend support to the existence of an "inverted-U" relationship between political regimes and internal conflicts. The models suggest that countries which are strongly autocratic become less prone to civil conflicts once they engage in a process of democratisation, even if such process is incomplete. Therefore, promoting elections in closed regimes does not seem to be a bad idea: its positive effects can be seen in this paper. On the other hand, decentralisation/federalism has a negative effect on the probability of civil war incidence, what reinforces the idea that power-sharing arrangements reduce the risk of civil strife.

Additionally, in consonance with most of the civil war literature, the statistical findings indicate that high GDP per capita and fast economic growth make a country less war-prone, whereas a large population, ethnic fractionalisation and mountainous terrain increase the chances of domestic conflicts.

Nevertheless, there is plenty of room for further research on the role of the executive power on civil conflicts. It is indeed necessary to evaluate whether the results presented here would still hold if I had adopted a longer time span for our analysis. Due to DPI's data limitations, such test was not possible. But when more data on executive competitiveness become available, such analysis must be done in order to check the robustness of the findings presented in this work. Moreover, the impact of the competitiveness of the executive power on duration and intensity of civil wars still has to be evaluated. It is plausible to suggest that the executive power affects other dimensions of civil wars rather than their incidence, and this research is still to be written. Due to data limitations, this paper

did not assess the immediate risks of civil outbreak deriving from elections themselves. The data used in this article are only available in country-year format, what is not sufficient to grasp the immediate influence of the election over civil conflicts. This is a promising agenda for new research, but currently we are still dependent on the availability of more disaggregated data.

Finally, not all factors that contribute to civil war incidence can be modelled using large-N statistical tools. Whereas quantitative methods help us to visualise patterns across a wide range of cases, in-depth qualitative studies and formal models can shed light on what causal mechanisms shape conflict dynamics. In this regard, both methods can provide insights on the causes of conflict. By adopting a complementary approach we might be able to have a better understanding of the yet widely unknown phenomenon of civil wars.

AGRADECIMIENTOS

The author thanks Ravi Bhavnani, Mira Fey, Guilherme Kerr, Gustavo Kerr, Rafael Magalhães, Umberto Mignozzetti, João Paulo Cândia Veiga, Rafael Villa, Artur Zimmerman, the editors of the journal, and two anonymous reviewers for their valuable comments. All errors remain my own. The data and Stata code used in this article are available online at <http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.963183>.

References

- Alvarez, Mike, José A Cheibub, Fernando Limongi and Adam Przeworski. 1996. "Classifying political regimes", *Studies in Comparative International Development*, 31 (2): 3-36.
- Archibugi, Daniele. 2008. *The global commonwealth of citizens: Toward cosmopolitan democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Beck, Thorsten, George Clarke, Alberto Groff, Philip Keefer and Patrick Walsh. 2001. "New tools in comparative political economy: The database of political institutions", *The World Bank Economic Review*, 15 (1): 165-176.
- Berdal, Mats. 2005. "Beyond greed and grievance? And not too soon?", *Review of International Studies*, 31 (4): 687-698.
- Berg-Schlosser, Dirk. 2007. "Concepts, measurements and sub-types in democratization research", en *Democratization: The State of the Art*, edited by D. Berg-Schlosser. Opladen: Barbara Budrich.
- Blattman, Christopher and Edward Miguel. 2010. "Civil war", *Journal of Economic Literature*, 48 (1): 3-57.
- Bleaney, Michael and Dimico, Arcangelo. 2011. "How different are the correlates of onset and continuation of civil wars?", *Journal of Peace Research*, 48 (2): 145-155.

- Breiner, Peter. 1996. *Max Weber and Democratic Politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Brückner, Markus. 2010. "Population size and civil conflict risk: Is there a causal link?", *The Economic Journal*, 120 (544): 535-550.
- Buhaug, Halvard, Scott Gates and Pålvi Lujal, 2009. "Geography, rebel capability, and the duration of civil conflict", *Journal of Conflict Resolution*, 53 (4): 544-569.
- Buhaug, Halvard and Jan K Rod. 2006. "Local determinants of African civil wars, 1970-2001". *Political Geography*, 25 (3): 315-335.
- Caprioli, Mary. 2005. "Primed for violence: The role of gender inequality in predicting internal conflict", *International Studies Quarterly*, 49 (2): 161-178.
- Carey, Sabine. 2007. "Rebellion in Africa: Disaggregating the effect of political regimes", *Journal of Peace Research*, 44 (1): 47-64.
- Cederman, Lars-Erik, Simon Hug and Lutz F. Krebs. 2010. "Democratization and civil war: Empirical evidence", *Journal of Peace Research*, 47 (4): 377-394.
- Cederman, Lars-Erik and Luc Girardin. 2007. "Beyond fractionalization: Mapping ethnicity onto nationalist insurgencies", *American Political Science Review*, 101 (01): 173-185.
- Cheibub, José A., Jennifer Gandhi and James Vreeland. 2010. "Democracy and dictatorship revisited", *Public Choice*, 143 (1-2): 67-101.
- Christin, Thomas and Simon Hug. 2012. "Federalism, the geographic location of groups, and conflict", *Conflict Management and Peace Science*, 29 (1): 93-122.
- Collier, Paul. 2010. *Wars, guns, and votes: Democracy in dangerous places*. New York: Harper Perennial.
- Collier, Paul and Anke Hoeffler. 2002. "On the incidence of civil war in Africa", *Journal of Conflict Resolution*, 46 (1): 13-28.
- Collier, Paul and Anke Hoeffler. 2004. "Greed and grievance in civil war", *Oxford Economic Papers*, 56 (4): 563-595.
- Coppedge, Michael, Ángel Álvarez and Claudia Maldonado. 2008. "Two persistent dimensions of democracy: Contestation and inclusiveness", *Journal of Politics*, 70 (3): 632-647.
- Dahl, Robert A. 1972. *Polyarchy: Participation & Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- De Soysa, Indra. 2002. "Paradise is a bazaar? Greed, creed, and governance in civil war, 1989-99", *Journal of Peace Research*, 39 (4): 395-416.
- Dixon, Jeffrey. 2009. "What causes civil wars? Integrating quantitative research findings", *International Studies Review*, 11 (4): 707-735.
- Easterly, William and Ross Levine. 1997. "Africa's growth tragedy: policies and ethnic divisions", *The Quarterly Journal of Economics*, 11 (4): 1203-1250.
- Elazar, Daniel J. 1987. *Exploring Federalism*. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

- Elbadawi, Ibrahim and Nicholas Sambanis. 2000. "Why are there so many civil wars in Africa? Understanding and preventing violent conflict", *Journal of African Economies*, 9 (3): 244-269.
- Gleditsch, Nils P. 1997. *Democracy and Armed Conflict in the Third World*, Oslo: PRIO - North/South Coalition.
- Fearon, James. 2010. "Governance and civil war onset". Background paper prepared for the World Bank's 2011 World Development Report.
- Fearon, James and David Laitin. 2003 "Ethnicity, insurgency, and civil war", *American Political Science Review*, 97 (01): 75-90.
- Freedom House. 2001. *Freedom in the World*. New York: Freedom House.
- Freire, Danilo. 2012a. "Guerras civis: Um balanço da literatura quantitativa". *Intellector*, 9 (17): 1-38.
- Freire, Danilo. 2012b. "Os regimes políticos e as guerras civis: Uma discussão metodológica", *Mediações*, 17 (1): 235-252.
- Gates, Scott, Havard Hegre, Mark P. Jones and Havard Strand. 2006, "Institutional inconsistency and political instability: Polity duration, 1800-2000", *American Journal of Political Science*, 50 (4): 893-908.
- Gleditsch, Kristian S. and Michael D. Ward. 1997. "Double take a reexamination of democracy and autocracy in modern polities", *Journal of Conflict Resolution*, 41 (3): 361-383.
- Gleditsch, Nils, Havard Hegre and Havard Strand. 2009. "Democracy and civil war. In *Handbook of War Studies III: The Intrastate Dimension*, Midlarsky, Manus, pp. 155-192. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Gleditsch, Nils, Peter Wallensteen, Mikael Erikson, Margareta Sollenberg, and Havard Strand. 2002. "Armed conflict 1946-2001: A new dataset", *Journal of Peace Research*, 39 (5): 615-637.
- Gurr, Ted. 2000. *Peoples versus states: Minorities at risk in the new century*. Washington: United States Institute of Peace Press.
- Hegre, Havard. 2003. "Disentangling democracy and development as determinants of armed conflict", *Annual Meeting of International Studies Association*, volume 27.
- Hegre, Havard, Tanja Ellingsen, Scott Gates and Nils Gleditsch. 2001. "Towards a democratic civil peace? democracy, political change and civil war, 1816-1992", *American Political Science Review*, 95 (1): 33-48.
- Hegre, Havard and Nicholas Sambanis. 2006. "Sensitivity analysis of empirical results on civil war onset", *Journal of Conflict Resolution*, 50 (4): 508-535.
- Held, David. 2006. *Models of Democracy*. Stanford: Stanford University Press.
- Homer-Dixon, Thomas. F. and Jessica Blitt. 1998. *Ecoviolence: Links among environment, population and security*. Lanham: Rowman & Littlefield Pub Incorporated.
- Horowitz, Donald L. 1985. *Ethnic groups in conflict*. Berkeley: University of California Press.

- Hospers, Gert-Jan. 2004. *Regional Economic Change in Europe: A Neo-Schumpeterian Vision*. Münster: LIT Verlag.
- Huntington, Samuel. 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Kalyvas, Stathis N. 2006. *The logic of violence in civil war*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kalyvas, Stathis N. 2008. "Promises and pitfalls of an emerging research program: The microdynamics of civil war". In *Order, Conflict, Violence*. Kalyvas, Stathis N., Shapiro, Ian, and Masoud, Tarek, pp. 397-421. Cambridge: Cambridge University Press.
- Karl, Terry L. 1990. "Dilemmas of democratization in Latin America", *Comparative Politics*, 23 (1): 1-21.
- Karl, Terry L. 1995. "The hybrid regimes of Central America", *Journal of Democracy*, 6 (3): 72-86.
- Keefer, Phillip. 2010. DPI2010. Database of Political Institutions: Changes and Variable Definitions, Development Research Group, World Bank.
- Laitin, David and Daniel Posner. 2001. "The implications of constructivism for constructing ethnic fractionalization indices", *APSA-CP: Newsletter of the Organized Section in Comparative Politics of the American Political Science Association*, 12 (1): 13-17.
- Lake, David and Donald Rothchild. 1996. "Containing fear: The origins and management of ethnic conflict", *International Security*, 21 (1): 41-75.
- Lijphart, Arend. 1977. *Democracy in plural societies: A comprehensive exploration*. New Haven: Yale University Press.
- Mack, Andrew. 2002. "Civil war: Academic research and the policy community", *Journal of Peace Research*, 39 (5): 515-525.
- Malthus, Thomas. 1826. *An Essay on the Principle of Population*. London: John Murray, 6th edition.
- Marshall, Monty and Keith Jagers. 2002. *Polity IV project: Political regime characteristics and transitions, 1800-2002*. Ann Arbor.
- Melander, Erik. 2005. "Gender equality and intrastate armed conflict", *International Studies Quarterly*, 49 (4): 695-714.
- Miguel, Edward, Shanker Satyanath and Ernest Sergenti. 2004. "Economic shocks and civil conflict: An instrumental variables approach", *Journal of Political Economy*, 112 (4): 725-753.
- Montalvo, José G. and Marta Reynal-Querol. 2005. "Ethnic polarization, potential conflict, and civil wars". *American Economic Review*, 95 (3): 796-816.
- Montalvo, José G. and Marta Reynal-Querol. 2010. "Ethnic polarization and the duration of civil wars", *Economics of Governance*, 11 (2): 123-143.
- Munk, Gerardo. 2007. "The study of politics and democracy: Touchstones of a research agenda". In *Regimes and Democracy in Latin America: Theories and Method*, Munck, G. New York: Oxford University Press.

- Munck, Gerardo. 2009. *Measuring Democracy: A Bridge between Scholarship and Politics*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Munck, Gerardo and Jay Verkuilen. 2002. "Conceptualizing and measuring democracy evaluating alternative indices", *Comparative political studies*, 35 (1): 5-34.
- Norris, Pippa. 2009. Democracy time-series data, release 3.0 spring 2009.
- Norris, Pippa. 2011. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. New York: Cambridge University Press.
- Posner, Daniel. 2004. "Measuring ethnic fractionalization in Africa", *American Journal of Political Science*, 48 (4): 849-863.
- Raleigh, Clionadh and Havard Hegre. 2009. "Population size, concentration, and civil war. A geographically disaggregated analysis", *Political Geography*, 28 (4): 224-238.
- Regan, Patrick M. and Sam R Bell. 2010. "Changing lanes or stuck in the middle: Why are anocracies more prone to civil wars?", *Political Research Quarterly*, 63 (4): 747-759.
- Reynal-Querol, Marta. 2002. "Political systems, stability and civil wars", *Defence and Peace Economics*, 13 (6): 465-483.
- Reynal-Querol, Marta. 2005. "Does democracy preempt civil wars?", *European Journal of Political Economy*, 21 (2): 445-465.
- Rydland, Lars T., Sveinung Arnesen and Ase G. Østensen, 2008. "Contextual data for the European Social Survey: An overview and assessment of extant resources", *Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS*, 124.
- Saideman, Stephen M., David J. Lanoue, Michael Campenni and Samuel Stanton. 2002. "Democratization, political institutions, and ethnic conflict: A pooled time-series analysis, 1985-1998", *Comparative Political Studies*, 35 (1): 103-129.
- Sambanis, Nicholas. 2001. "Do ethnic and nonethnic civil wars have the same causes? A theoretical and empirical inquiry (part 1)", *Journal of Conflict Resolution*, 45 (3): 259-282.
- Sambanis, Nicholas. 2002. "A review of recent advances and future directions in the quantitative literature on civil war", *Defence and Peace Economics*, 13 (3): 215-243.
- Sambanis, Nicholas. 2004. "What is civil war?: Conceptual and empirical complexities of an operational definition", *Journal of Conflict Resolution*, 48 (6): 814-858.
- Schumpeter, Joseph. A. 2003. *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Routledge, 4th edition.
- Strand, Havard. 2006. *Reassessing the civil democratic peace*. PhD thesis, University of Oslo.
- Strand, Havard. 2006. "Retreating from a civil democratic peace? Revisiting the relationship between political institutions and civil war", Unpublished paper, Political Science Department, University of Oslo and Centre for the Study of Civil War, PRIO.
- Teorell, Jan, Marcus Samanni, Sören Holmberg, and Bo Rothstein. 2011. *The Quality of Government dataset, version 6apr11*. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute.

- Thies, Cameron G. 2010. "Of rulers, rebels, and revenue: State capacity, civil war onset, and primary commodities", *Journal of Peace Research*, 47 (3): 321-332.
- Toft, Monica D. 2010. *The geography of ethnic violence: Identity, interests, and the indivisibility of territory*. Princeton: Princeton University Press.
- Tomz, Michael, Jason Wittenberg and Gary King. 2003. "CLARIFY: Software for interpreting and presenting statistical results", *Journal of Statistical Software*, 8 (1): 1-30.
- Tomz, Michael, Gary King and Langche Zeng. 2008. "ReLogit: Rare events logistic regression", *Journal of Statistical Software*, 8 (i02): 1-30.
- United Nations Statistics Division. 2009. *National accounts main aggregates database*.
- Vanhanen, Tatu. 2000. "A new dataset for measuring democracy, 1810-1998", *Journal of Peace Research*, 37 (2): 251-265.
- Vanhanen, Tatu. 2003. "Measures of democracy 1810-2002", Finnish Social Science Data Archive.
- Vreeland, James R. 2003. "A continuous Schumpeterian conception of democracy". Unpublished manuscript.
- Vreeland, James R. 2008. "The effect of political regime on civil war: Unpacking anocracy", *Journal of Conflict Resolution*, 52 (3): 401-425.
- Weffort, Francisco. 1992. "Novas democracias: Que democracias?", *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, 27: 05-30.
- Zimmerman, Artur. 2008. *Peguem a foice e vamos à luta: Determinantes agrários da guerra civil*. São Paulo: Editora Humanitas.
- Zimmerman, Artur and Hélio Alves. 2007. "Governmental repression and likelihood of civil war onset: World analysis, 1981-1997", *Revista de Ciencia Política*, 27 (2): 49-65.

Presentado para evaluación: 3 de agosto de 2014

Aceptado para publicación: 4 de noviembre de 2014

DANILO FREIRE, King's College London
 danilofreire@gmail.com

Is a PhD Candidate in Political Economy at King's College London. He holds a Bachelor's Degree in Social Sciences and a Master's Degree in Political Science at the University of São Paulo, and a Master's Degree in International Relations at the Graduate Institute Geneva. His main research interests are civil conflicts, prison gangs, quantitative methods and agent-based modelling.

¿Aliados o enemigos? Un acercamiento a la relación entre el gobernador y su partido político

Allies or foes? An approach to the relationship between the governor and his political party

Silvestre Licea Dorantes

Universidad Autónoma de Guerrero, México
silvestrelicea_iiepaima@uagro.mx

Resumen

Se analizan las condiciones en las que el gobernador y su partido político, tanto a nivel local como a nivel nacional, cooperan o entran en conflicto. Para explicar esta relación se utiliza la teoría de la elección racional, en un contexto institucional; y con el fin de contrastar el desarrollo teórico, se han elegido tres estudios de caso, de gobernadores mexicanos. El comportamiento de estos actores se ajusta a las estrategias seguidas en un juego, lo que permite entender las acciones seguidas. A raíz de lo anterior, se puede observar que existen condiciones que precipitan la confrontación entre estos actores, y en algunos casos hasta el rompimiento. Se puede concluir que los niveles de reciprocidad en el intercambio de beneficios entre el gobernador y su partido condiciona el grado de apoyo mutuo.

Palabras clave: partidos políticos, gobernador, cooperación, conflicto, instituciones.

Abstract

We analyze the conditions under which the governor and his political party, both locally and nationally, cooperate or engage in conflict. To explain this relationship both rational choice theory in an institutional context are utilized, and in order to contrast the theoretical development, we have chosen three case studies of Mexican governors. The behavior of these actors is in line with the strategies in a game, which allows us to understand the actions followed. As a result of the above, we can see that there are conditions that precipitate confrontation between these actors, and in some cases a break in relations. It can be concluded that the levels of reciprocity in the exchange of benefits between the governor and his party determines the degree of mutual support.

Keywords: political parties, governor, cooperation, conflict, institutions.

INTRODUCCIÓN

En los trabajos de la ciencia política actual escasamente se ha abordado la relación entre las variables del gobernador y su partido político. En todo caso, se han hecho estudios sobre cada uno de ellos por separado, a costa de descuidar explicaciones sobre el comportamiento de estos actores en su interrelación.

Lo anterior es comprensible si uno piensa que tanto el gobernador como su partido son vistos como una unidad: que enfrentan retos políticos juntos, defienden el actuar de sus funcionarios y cooperan para establecer acciones de gobierno con un perfil definido, acorde a su identidad ideológica. Se puede pensar, también, que el triunfo electoral para obtener la gubernatura es la culminación de una serie de esfuerzos partidistas, y que tanto el partido como el gobernador compartirán el triunfo logrado.

Si bien, hay información que respalda que estos actores mutuamente se apoyan, también existe evidencia que muestra que muchas veces no es así, sino que se relacionan con diversos grados de conflictividad, incluso hasta el punto del rompimiento.

Por otra parte, este estudio también permite entender el papel que juegan las instituciones. A pesar de que tanto el gobernador como el partido actúan motivados por fines particulares, su comportamiento se ve sujeto y orientado por las metas y límites que les imponen las instituciones que representan.

A partir de lo anterior, es posible acercarse a un tema que escasamente sale a la luz en los estudios politológicos, aunque cotidianamente se vive en las relaciones políticas. Por lo general, prevalece la idea de que solo los partidos de oposición se enfrentan al gobernador o de que el gobierno unificado automáticamente se traduce en apoyo al Ejecutivo. Sin embargo, una mirada más cercana permite advertir que la relación entre estos actores es menos tersa de lo que pudiera pensarse.

Este artículo aborda tres casos de exgobernadores mexicanos, quienes tuvieron diversos grados de conflicto con sus respectivos partidos políticos. A partir de estos casos, se intenta explicar las condiciones a partir de las cuales se presenta el conflicto.

MARCO TEÓRICO

Para acercarse al entendimiento de la dinámica existente entre el gobernador y su partido político, este trabajo adopta el enfoque de la elección racional dentro de un marco institucional, el cual delimita los alcances de las acciones del gobernador y el partido.

En esta línea, se establece que tanto el gobernador como su partido político, en sus relaciones cotidianas, protagonizan una serie de intercambios de apoyos, que conllevan un cálculo de ganancia o pérdida. En este sentido, el desacuerdo entre ambos actores sobre el beneficio que reciben por el respaldo que otorgan, resulta en apoyo o conflicto.

Para ampliar el entendimiento de la dinámica entre estos actores, se retoma el institucionalismo racional que establece: 1) las instituciones son un conjunto de reglas establecidas

con el fin de lograr su permanencia y logro de sus metas; y, por otra parte; 2) que en este conjunto de reglas operan y se relacionan actores que poseen intereses y metas particulares, quienes son influenciados en su comportamiento por el conjunto de elementos exógenos que conforman la institución. En este punto, el propio interés de los individuos se combina con las reglas y metas propias de la institución (Greif y Laitin, 2004; Shepsle, 2007; Orlandi y Olivieri, 1998).

En cuanto a la elección racional, se puede establecer que fundamentalmente se basa en tres principios: 1) El individualismo metodológico, que se entiende como el conjunto de actividades que pueden ser explicadas como resultado de la decisión del individuo, derivado del espectro de oportunidades que puede elegir y que están presentes en la sociedad. 2) Una conducta orientada a metas. Se asume que los individuos tienen metas y actúan consecuentemente para alcanzarlas. Esta conducta orientada a metas implica que las acciones de los individuos son internamente consistentes en cuanto a la planificación para llegar a las mismas. No debe entenderse la conducta del individuo como egoísta, sino como autointeresada, en el sentido de que asume sus propios intereses como prioridad sobre los otros. En este orden de ideas, puede haber acciones nobles y altruistas si eso conlleva un interés para el individuo. 3) Se asume que los individuos se enfrentan a circunstancias ajenas a su control; un horizonte formado por la falta de información, restricciones sociales, políticas, culturales, legales y económicas acotan severamente las elecciones que toma (Colomer, 1991: 12-18). Estas fronteras definen el conjunto de decisiones posibles pero también colocan el conjunto de medios disponibles para el logro de metas. En este marco, se entiende que los individuos optimizan porque eligen los mejores medios para establecer la ruta hacia el logro de sus metas.

En consecuencia de lo anterior, en este trabajo se resaltarán los móviles de las acciones del Ejecutivo en relación con los motivos que acompañan las decisiones de su partido político, en el marco de su interacción. Por último, se describirán situaciones que reflejan las condiciones de cooperación y divergencias entre el gobernador y su partido.

LA MOTIVACIÓN DEL PODER EJECUTIVO

Algunos autores (Ames, 1987: 7; Ferejohn, 1986: 11; Canes-Wrone *et al.*, 2006) sostienen que las motivaciones del Ejecutivo se guían por el interés de su permanencia en el puesto. Estos autores argumentan que este solo se conducirá por aquellas acciones de gobierno que le permitan lograr una mejor posición para enfrentar con éxito la próxima reelección, para mantenerse en el poder. Por otra parte, aquellos autores que señalan que el poder ejecutivo actúa motivado por la construcción de un legado positivo imperecedero (Moe, 1993: 364-365; Skowronek, 1993: 17-19; Cameron, 2000: 29-30) argumentan que este se concentra en construir liderazgos positivos, que lo encumbren como guía de su nación. Dado que el puesto no implica en automático que se construyan consensos a su alrededor, ni respeto por sus opiniones y políticas públicas, el liderazgo es una meta dentro de las prioridades del Ejecutivo.

Aunque se puede decir que la motivación del liderazgo está presente en los gobernadores, a este tendría que sumársele su interés por continuar una trayectoria política a puestos más altos. El mantenimiento de una reputación prestigiada como gobernador provee un buen antecedente para un puesto público subsiguiente, específicamente la presidencia del país, en la medida que se le considere como una persona capaz de encontrar soluciones satisfactorias a los problemas públicos. Sin embargo, ser reconocido como un “buen administrador” no es suficiente. La capacidad de liderazgo y habilidad para establecer puentes o alianzas con grupos adversos permite aumentar su reconocimiento en términos de reputación como político, lo cual es útil en la competencia para la postulación como candidato a la presidencia.

No obstante, hay que resaltar la difícil situación que experimentan los gobernadores al llevar adelante sus intenciones. Mizrahi (2001: 7) apunta que los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), de los estados de Baja California y Chihuahua, enfrentaron condiciones adversas durante el ejercicio de su gobierno (con un presidente de la nación de un partido contrario y en el marco de un sistema autoritario), mientras tenían que demostrar frente a su partido y electorado que podían resolver problemas públicos y posicionarse en una mejor situación. También, necesitaban demostrar que eran capaces de ser gobernadores eficientes para ulteriormente facilitar el camino para que su partido permaneciera en la gubernatura en las próximas elecciones. Sin embargo, este camino no es fácil en la medida que los gobernadores tienen que decidir acciones pragmáticas para conseguir recursos para obras en su estado o permanecer fieles a su ideario político.

“[Los gobernadores] tienen que demostrar a sus simpatizantes políticos, que son capaces de introducir cambios sustanciales sin los recursos económicos para llevarlos a cabo. En este proceso se ven atrapados en una situación de pérdida: si desafían el poder central y adoptan una posición de confrontación, entonces corren el riesgo de no recibir los recursos suficientes del gobierno federal. En la medida que permanecen apegados a sus ideales pueden disminuir su capacidad de desempeño y, por lo tanto, arriesgar las oportunidades del partido de ganar votos en futuras elecciones. Por otra parte, si adoptan una actitud más pragmática, una posición más moderada y conciliadora frente a las autoridades centrales, [los gobernadores] pueden obtener más recursos, a expensas de alejar a sus partisanos más duros, en términos ideológicos, y desilusionar a muchos que esperaban cambios radicales como resultado de la alternancia del poder” (Mizrahi, 2001: 21).

Por otra parte, en lo que se refiere a los partidos políticos, cabe subrayar la relevancia que tienen como un actor insustituible en la vida política. El partido político es considerado como un elemento indispensable de la democracia moderna (Stokes, 1999; Diamond y Gunther, 2001; Sartori, 1980; Norris, 2005: 4; Johnston, 2005: 3), que en el contexto de la democracia delegativa se considera de crucial importancia para designar y repartir los puestos públicos (Maravall, 2003). Su papel en el sistema político y en la vida electoral lo colocan

como el actor central de la democracia. Esto le permite convertirse en una fuerza política, tanto en el Congreso como fuera del mismo. En el Congreso debido a que su apoyo se traduce en la aprobación de leyes (García, 2009), mientras que fuera de este se convierte en un agente de opinión y respaldo, o rechazo, abierto a las acciones de gobierno. Dado lo anterior, para el gobernador, el partido se convierte en un actor de referencia en su estrategia de gobierno.

MOTIVACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Las motivaciones de los partidos políticos, según la literatura sobre el tema, están guiadas por la búsqueda y permanencia en el poder, a través del acceso a los puestos públicos (Sartori, 1980: 92; Valdés, 2001: 25; Schlesinger, 1994: 6) e implantación de políticas públicas, cuando estos son partidos gobernantes (Ware, 1996) y más específicamente la puesta en marcha de aquellas políticas que le permitan tener una ventaja sobre los demás partidos políticos en el mercado electoral (Downs, 1957: 138-139). Esto último, pone en un papel central al gobernador a causa de su posición como ejecutor del poder estatal de gobierno, que puede concretar las políticas del partido, las cuales se establecieron como parte de su ideario político o como parte de la agenda, durante la campaña electoral para la conquista de la gubernatura. De tal forma que si los gobernantes no son consecuentes con las propuestas ofrecidas durante la campaña o la base ideológica tendrán un impacto negativo directo en su partido político. Esto convierte al partido en un agente monitor sobre el Ejecutivo y resalta la importancia de la relación entre el gobernador y su partido político (Maravall, 2003).

FUENTES DE COOPERACIÓN Y CONFLICTO

A continuación, se presentan las situaciones que potencialmente distancian a estos actores de un escenario de cooperación. En la tabla siguiente se muestra una columna que contiene las situaciones que son fuente de conflictos, y otra columna que muestra los problemas que se presentan para cooperar, aun cuando los actores implicados lo deseen.

TABLA 1.

FUENTES DE POTENCIAL CONFLICTO Y PROBLEMAS DE CONFIANZA ENTRE EL GOBERNADOR Y SU PARTIDO POLÍTICO

Intereses divergentes	Problemas de confianza y compromiso
Preferencias ideológicas	Cumplimiento del contrato
Problemas de sucesión	Horizontes de tiempo divergentes
Diferentes electorados	

Fuente: elaboración propia, a partir de Romero (2005: 13), *Misaligned interests and commitment problems: a study of presidents and their parties with application to the Mexican presidency and privatization in Latin America*

La tabla anterior muestra los intereses que cada actor maneja y el potencial conflicto derivado de esta circunstancia. A continuación, se desarrolla una explicación de esta clasificación. Para tal efecto, se toma el trabajo de Romero (2005), quien ha contribuido en los estudios sobre la relación entre el Ejecutivo y su partido político.

INTERESES DIVERGENTES

El Ejecutivo y su partido político tienden a cooperar la mayor parte del tiempo; no obstante, en ocasiones entran en conflicto. Al respecto Kiewiet y McCubbins (1991: 2) atribuyen esto a la naturaleza delegativa de los partidos políticos.

Por su parte, Matthew S. Shugart (1998) establece que el Ejecutivo basa su fuerza en el mandato constitucional que lo inviste como autoridad para solucionar problemas públicos, en tanto que la fuerza del partido político no descansa en personalidades sino en su carácter organizacional que provee políticas públicas. Esto sienta las bases para un potencial desacuerdo entre estos actores, sobre el carácter de las políticas y a quiénes debe dirigirse. Ya sea por su carácter delegativo o por su naturaleza organizacional, los partidos políticos presentan dificultades para coordinarse con el Ejecutivo en acciones de gobierno.

En cualquier marco de relación, sea el Congreso o fuera de este, se puede establecer que la divergencia de intereses entre el Ejecutivo y su partido es inherente a su convivencia dado que el gobernador se guía por sus intereses, que no necesariamente se articulan con los que busca el partido.

PREFERENCIAS IDEOLÓGICAS

Aunque todos los individuos pertenecientes a un partido político profesan una misma identidad ideológica, entre ellos existe una percepción diferente acerca de la fidelidad doctrinaria que guardan algunos integrantes hacia su propio partido, incluyendo a aquellos que ocupan cargos en la Administración pública (Ruiz, 2007; Alcántara y Luna, 2004; Alcántara, 2004). Esto implica una necesaria diferencia de opiniones sobre lo que es ser un auténtico representante de la ideología del partido político. Aun si los miembros del partido gobernante y el Ejecutivo se reconocen apegados a una misma expresión ideológica, esto no significa que posean las mismas ideas, ni prioridades sobre la diversidad de temas que están presentes en la sociedad.

PROBLEMAS DE SUCESIÓN

Con el fin de mantener su imagen de liderazgo y estadista en su gobierno, el gobernador tiene incentivos para intervenir en la selección del candidato a la gubernatura por su partido. Sus motivos son aún más poderosos cuando sabe que ha incurrido en actos ilegales, y busca

un candidato que le profiera lealtad a él, y no un candidato del que desconoce su lealtad. El perjuicio hacia el partido político proviene de la percepción de que el candidato seleccionado por el gobernador incline su lealtad más a quien lo eligió que a su propio partido político, colocando a este último en una situación desventajosa.

DIFERENTES ELECTORADOS

Otro de los escenarios que se derivan para entender la fuente de conflicto entre el gobernador y su partido, se origina en los distintos electorados constituidos alrededor de cada uno de estos actores políticos. Mientras que la elección para gobernador se realiza a nivel estatal, la elección de otros miembros del partido se basa en elecciones demarcadas por distritos electorales y listas plurinominales. Esto significa que el Ejecutivo estatal debe responder ante los ciudadanos en el plano estatal, mientras que los otros miembros de su partido, también electos, solo responden a los ciudadanos de sus distritos y en el caso de las listas plurinominales, al propio partido. Por su parte, el partido político está vinculado con sus simpatizantes, miembros y militantes; y las políticas públicas que proponga tendrán como prioridad responder a las necesidades ideológicas de este grupo. En cambio el gobernador considera que su responsabilidad está comprometida con todo el estado, sin distinción de ideologías o preferencias partidistas. Esta situación plantea potenciales conflictos entre el partido político y el Ejecutivo estatal: cada uno considera que las acciones de gobierno deben estar principalmente dirigidas al beneficio de poblaciones diferentes.

PROBLEMAS DE CONFIANZA Y COMPROMISO

Como se ha visto, el Ejecutivo y su partido político se necesitan mutuamente, a pesar de su dependencia, la interacción entre ellos no descansa en un contrato vinculante, no existe un contrato con castigos explícitos por no cumplir su compromiso del pacto al apoyar a la otra parte (Maravall, 2003). Mucho de la política se basa en “valores entendidos” (o beneficios implícitos derivados del apoyo otorgado) lo que conlleva a que cada uno de los actores pueda no entender claramente lo que el otro requiere.

Desde el enfoque del institucionalismo racional, aun con el sincero deseo de cooperar entre ellos, el partido y el Ejecutivo enfrentan problemas para cooperar mutuamente.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La asimetría de autoridad presente en cada uno de los actores influye en la confianza que tenga el uno en el otro. Esta disparidad de autoridad conlleva a los actores a generar expectativas de reciprocidad entre ellos.

Tener mayor poder no implica una mejor relación de confianza. El partido político no está dispuesto a confiar en el Ejecutivo, debido a que el mayor poder de este puede llevarlo a no corresponder al apoyo que le otorgue el partido, ya que no existen medios coercitivos para obligarlo a ello (Maravall, 2003: 20-21; North, 1994: 381; Root, 1994: 3-20).

Se puede decir que el partido político carece de medios para hacer a su gobernador *accountable*. Aunque pueda haber diferencias y desencuentros graves en los aspectos doctrinarios partidistas, el partido no tiene instrumentos para obligar al Ejecutivo estatal a ajustarse a sus principios ideológicos. Con la intención de que el gobernador responda a los intereses de su partido, este puede recurrir a amenazas de expulsión en el marco del reglamento del mismo partido. Pero aun así, es poco probable que ocurra si el gobernador acusado no ha cometido falta alguna según los criterios de la autoridad electoral.

HORIZONTES DE TIEMPO DIVERGENTES

Es posible que la coincidencia del periodo del Ejecutivo estatal en la gubernatura no coincida con los periodos en el Congreso estatal. Esta falta de coincidencia temporal puede provocar que la condición de apoyo al gobernador no pueda garantizarse a causa de su desfase en el tiempo. Las recompensas que espera recibir el partido político por el apoyo otorgado al Ejecutivo estatal en t_0 no están garantizadas para cumplirse en t_1 .

La situación de incertidumbre de la respuesta futura del agente, aun cuando este tenga toda la disposición de cumplir lo pactado, resulta un impedimento para lograr acuerdos presentes, o implica un riesgo muy elevado de no retribución en caso de otorgar el apoyo. (Frye, 2004: 455).

EL ÁRBOL DE JUEGO DEL PARTIDO POLÍTICO FRENTE AL GOBERNADOR

La interacción entre estos actores puede contemplarse como una relación de intercambio, en la que cada actor, en el marco de la institución que comporta, utiliza sus recursos con el fin de lograr una mejor posición para alcanzar sus metas.

Lo anteriormente expuesto puede tomar la forma de un juego, en el que cada uno de los actores elige la mejor estrategia para lograr un beneficio, y asume los costos de sus acciones.

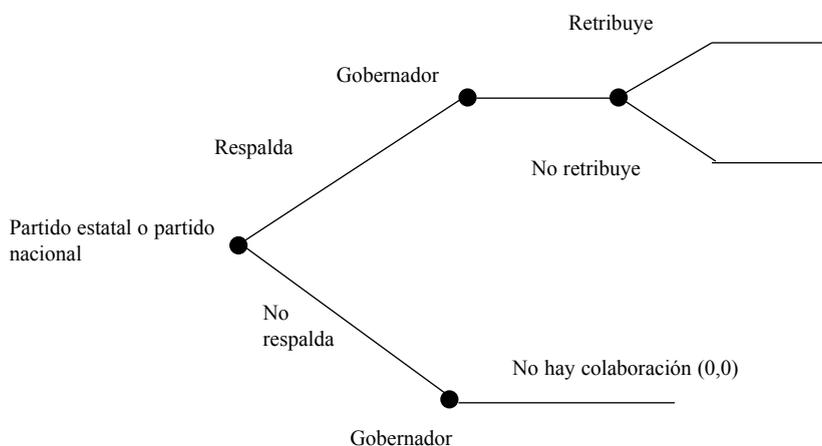
En este sentido, se entiende por acción la elección que hace el actor en un contexto específico, los resultados o productos son aquellos que se desprenden de las acciones seleccionadas y emprendidas. Esto implica un propósito o una respuesta a las acciones de los otros actores.

Los actores involucrados en este juego son racionales, debido a que son egoístas y creadores de estrategias para alcanzar sus fines. En esta misma línea, se asume que invariablemente elegirán los beneficios sobre las pérdidas, por lo que consideran estratégicamente cada decisión con el fin de ponderar sus resultados.

Los actores eligen con base en las expectativas de beneficios, cristalizados en la retribución por parte del actor apoyado. Dado que sus acciones son guiadas de manera maximizadora, la relación entre estos actores adopta la forma de un juego, que se ilustra a continuación:

FIGURA 1.

EL ÁRBOL DE JUEGO DEL PARTIDO ESTATAL/NACIONAL Y EL GOBERNADOR



Fuente: Diagrama de juego basado en Romero (2005: 34), *Misaligned interests and commitment problems: a study of presidents and their parties with application to the Mexican presidency and privatization in Latin America*.

DESCRIPCIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA COOPERACIÓN Y CONFRONTACIÓN

Los beneficios que obtiene el partido por su respaldo al gobernador pueden cristalizarse, por ejemplo, en puestos en la Administración pública, apoyos para campañas políticas, canalización de recursos a presidencias municipales gobernadas por el partido o distritos electorales con alta concentración de simpatizantes.

Se contemplan también los beneficios del partido derivados del efecto arrastre (*coattail effect*) de los ciudadanos sobre el desempeño del Ejecutivo estatal; aun si las acciones del gobernador fueran contrarias a la base ideológica del propio partido.

En cuanto a los costos del partido por apoyar al gobernador, estos pueden resultar de:

1. *La separación de la base ideológica del partido*. Aun cuando en algunos casos es evidente una ruptura ideológica, debe considerarse que la doctrina partidaria suele ser flexible, este punto es centro de debates en la medida en que la ideología suele estar abierta a interpretaciones diferentes que reclaman la legitimidad doctrinal. Tanto

el gobernador como el partido pueden mostrarse como los portadores de la auténtica doctrina partidista. El partido, por su parte, puede considerar la pérdida de credibilidad y legitimidad al apoyar las acciones de un gobernador que ejecuta acciones alejadas de los principios partidistas. Se espera que si el partido apoya al gobernador en tales acciones, entonces reciba a cambio un beneficio que supere el costo asumido. Sin embargo, esto solo puede suceder en la medida en que el partido represente una amenaza creíble para el gobernador. Si el partido puede perjudicar políticamente al gobernador, entonces el Ejecutivo estatal considerará seriamente retribuir al partido. En caso contrario, las motivaciones para retribuir a su partido son escasas.

2. *La diferencia entre los intereses que representa cada electorado.* Mientras el gobernador orienta su interés y responsabilidad en el electorado de todo el territorio que gobierna, el partido estatal se concentra en los reductos que se identifican con el partido o solo en aquellos municipios o distritos electorales que han sido ganados por el partido.
3. *La imposición de un candidato que profesa más lealtad al gobernador que al partido mismo.* Un candidato alejado de los intereses del partido, pero cercano a los intereses del gobernador, debilita la capacidad del partido para implementar una plataforma programática ideológica y lo vuelve dependiente del Ejecutivo estatal, anulando la influencia del partido.

Se derivan costos de la ruptura del partido con su representación. El costo que asume el partido de tomar una decisión contraria a su representación, sea local o nacional.

El gobernador obtiene beneficios por el respaldo de su partido político, que se manifiesta en la aprobación de sus iniciativas ante el Congreso y del apoyo de su partido fuera del Congreso ante situaciones política y legalmente adversas.

El gobernador asume costos por compensar a su partido político. Las formas de compensación asumen varias modalidades;

1. Una de las formas de compensar al partido es ceder en algunas de las pretensiones del gobernador sobre el contenido de sus políticas (*policies*). En este punto el partido se coloca en una posición en la que cosechará los triunfos del gobernador y a la vez enarbolará la defensa de su postura ideológica frente a sus simpatizantes. No obstante, el gobernador asume el costo de no llevar a cabo sus acciones como originalmente las planeó, sino que a cambio de la ayuda de su partido para aprobar sus políticas, cede a las modificaciones que este le exige.
2. Por otra parte, a cambio del apoyo de su partido, el gobernador puede compensarlo a través del financiamiento complementario para las campañas de los candidatos del partido, o recompensas para los miembros de su partido en el Congreso. Esto pone en riesgo su legado y su trayectoria política.
3. La introducción de miembros del partido a la Administración pública. Esto representa, por un lado, que el partido puede tener un mayor manejo de recursos e implementación

de las políticas del gobernador; y por otro, que el partido tiene mayor control sobre el gobernador, debido a que está más cerca de las decisiones que este toma.

Se presentan costos para el gobernador por no retribuir a su partido político. En la medida que el Ejecutivo estatal niegue alguna retribución —o retribución significativa— al partido, se aumenta el riesgo de que este critique abiertamente a su gobierno y manifieste su oposición a las acciones del gobernador. Por otra parte, en caso de no compensar al partido, el gobernador podría perder parte significativa del control del mismo, lo que aumentaría la probabilidad de fracasar en seleccionar para la gubernatura a un candidato de sus simpatías, teniendo como consecuencia que otro partido u otro candidato de su partido llegue al puesto del Ejecutivo estatal.

El gobernador también tiene costos provenientes de la negación de respaldo de su partido, tanto a en su representación estatal como a nivel nacional. Como se ha mencionado, la vida política del gobernador no termina al finalizar su periodo en la gubernatura y una búsqueda posterior de un puesto público requiere el apoyo de un partido político, por lo que la confrontación con su partido nacional es muy costosa.

Lo expuesto anteriormente describe los costos y beneficios de la interacción entre el gobernador y de las dos representaciones de su partido político.

SELECCIÓN DE CASOS Y PERIODO DE ESTUDIO

A diferencia de lo frecuente de las situaciones en que cooperan el gobernador y su partido político, resultan contadas las situaciones en que se presenta una confrontación entre ambos actores. Dada la escasez de eventos en que ocurre esta condición es posible calificarlos por sí mismos como elegibles para este estudio. Del universo disponible compuesto por la relación del gobernador y su partido político, solo aquellos que muestran conflicto están en condiciones de formar un conjunto de elementos que representen el objeto de estudio de este trabajo, dadas las características semejantes que poseen.

En este marco, se tiene que de 1999 a 2011 se han presentado tres episodios de relaciones conflictivas entre el gobernador y su partido: el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, del estado de Guerrero (2005-2011); el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat, del estado de Aguascalientes (2004-2010); y el gobierno de Alfonso Sánchez Anaya, en el estado de Tlaxcala (1999-2005). En virtud de lo anterior, estos gobiernos se presentan como los estudios de caso por analizar.

Por otra parte la selección del periodo está situada a partir de que inicia la alternancia en México, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) llega al poder, en el año 2000. Esto obedece a la nueva configuración que experimentó el sistema político mexicano, que permitió que los gobernadores gozaran de mayor autonomía y poder, sin el contrapeso del poder presidencial presente durante el periodo del partido hegemónico, en el cual los gobernadores eran considerados como meros ejecutores de los intereses del presidente.

EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO Y LOS GOBERNADORES

El régimen autoritario en México configuró una dinámica peculiar del ejercicio del poder del presidente. El ejercicio del poder ejecutivo estuvo enmarcado en un sistema presidencial deformado que permitía al presidente tomarse atribuciones extraconstitucionales, las cuales lo llevaban a involucrarse en decisiones para elegir diputados, senadores, gobernadores, funcionarios y hasta presidentes municipales (Carpizo, 2006: 197).

Durante este periodo, el partido político (Partido Revolucionario Institucional) era una antesala de turnos para apoyar a candidatos designados, acceder a puestos públicos en virtud de su lealtad (y no de sus méritos) y una máquina de organización corporativa del voto en momentos electorales (o de fraude si era necesario). Los políticos de los estados no escapaban de la estructura piramidal, los controles provenían del partido nacional, el cual estaba controlado por el presidente.

México culminó su transición a la democracia con la alternancia política en el año 2000, con la llegada del PAN a la presidencia. No obstante, aún persisten inercias que limitan y estancan la consolidación de la democracia (Aguayo, 2010; Martí, 2012a).

Al respecto, Aziz (2012: 40-41) menciona los obstáculos que frenan el avance de la democracia: la persistencia de gobiernos divididos que resulta en parálisis legislativa; un presidencialismo débil sin capacidad de coordinar; Estado desorganizado y feudalizado a nivel local; mayor recurso financiero a los gobiernos locales que no se refleja en resultados, ni existe transparencia en los gastos; prevalencia de los intereses y dominio de los monopolios, especialmente el televisivo; el proceso electoral se ve adulterado por la persistencia del clientelismo y la *spotización*; la alternancia no ha generado buenos gobiernos ni el establecimiento de una agenda transformadora; una ciudadanía limitada por la pobreza, se mantiene y aumenta la corrupción; el poder legislativo, si bien ha ganado en autonomía, no ha logrado consolidar reformas urgentes, y acaba representando los intereses de los poderes fácticos (gobernadores, grupos políticos, empresas).

Este pasado autoritario e ineficiencias operativas también se ven reflejados en los partidos políticos que continúan funcionando con la lógica y procedimientos que utilizaban en el pasado autoritario, lo que impacta en la credibilidad institucional por parte de los ciudadanos (Martí, 2012b: 58).

Aunque la alternancia política ha sido un avance a nivel nacional las prácticas políticas a nivel local siguen ancladas en el periodo autoritario (Martí *et al.*, 2010).

La influencia de los gobernadores en la posalternancia contrasta con el papel reducido y frágil que tenían anteriormente. El destino político reservado para ellos en el presidencialismo resultaba irrelevante para sus carreras políticas. Actualmente, esta situación ha cambiado, los gobernadores pueden aspirar a ser presidente de la república por méritos propios y no por designación de la autoridad presidencial. La alternancia derivó en nuevas oportunidades para aspirar a la presidencia de la república y otros más accedieron al cargo sin buscar ya el tradicional apoyo del centro.

Ante lo anterior, las actitudes de algunos gobernadores reflejan la línea de pensamiento autoritaria en la que el control de los actores políticos del Estado (que se basa en la lealtad al gobernador¹ más que al interés público) es clave para obtener beneficios. En esta línea, en el sistema federal de representación, tanto los diputados como los senadores tienen lazos con el gobernador —cuando han sido apoyados por este para obtener su cargo— que lleva a aquellos a exponer intereses del propio gobernador en el Congreso o el Senado. De igual forma, algunos gobernadores se acercan a actitudes que reproducen los vicios del presidencialismo pero en una escala estatal, un ejemplo de ello es el intento de influir en las decisiones de su partido político.

“... los gobernadores cada día son más influyentes en la toma de decisiones políticas que las estructuras partidarias. Esto es especialmente notorio en el PRI y en menor grado en el PRD, donde sus gobernadores buscan influir en las nominaciones de candidatos a cargos de elección popular y, sobre todo, en el nombre de sus sucesores, generando de esta forma distorsiones institucionales que llegan a alterar los mecanismos partidarios de participación y selección de los candidatos a estos cargos” (Hernández Norzagaray, 2009: 198).

La intención de algunos gobernadores de extender el alcance de su influencia sobre diputados, senadores, jueces, decisiones dentro de su partido político puede provocar conflictos, surgidos como reacción a tales intentos. Aun sin las formas autoritarias los gobernadores han tomado un papel distinto al de años atrás; tienen una auténtica capacidad de decidir sobre las políticas estatales y diseñan su estrategia para lograr ser ellos mismos una opción política para ocupar la presidencia de la república. Pero ¿puede hacer el gobernador converger sus intereses con los del partido? Aunque ambos se benefician de sus logros los caminos para acumular beneficios políticos pueden tomar rumbos diferentes y dificultar la cooperación.

EL CASO DEL GOBERNADOR ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO (2005-2011) Y SU PARTIDO POLÍTICO, EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD)

La elección para gobernador del estado de Guerrero en 2005 generó muchas expectativas de cambio. El triunfo del candidato del PRD, Zeferino Torreblanca Galindo, irrumpía como el primer gobierno de alternancia en el estado de Guerrero. En consecuencia con lo anterior, se esperaba que miembros del PRD ocuparan puestos claves en la Administración pública del nuevo gobierno para de esta forma manejar el gobierno acorde a su plataforma ideológica. No obstante, el gabinete anunciado mostró una escasa participación de miembros del PRD en la composición del mismo. Esta situación

1. Esto se debe al manejo de los recursos de la Administración pública, que permite recompensar las lealtades (spoils system) y permiten fincar un apoyo directo al gobernador y no tanto al partido.

privó al partido de la posibilidad de favorecer electorados específicos al no disponer de recursos gubernamentales para suministrar apoyos o favores.

De los 18 puestos en la Administración pública uno era ocupado por un priista, seis por perredistas y diez sin partido aparente. Esta situación reflejó la poca influencia que el PRD llegó a tener sobre el gobierno y sobre el gobernador. La omisión de miembros del partido en la conformación del gabinete causó molestia y dio origen a un enfrentamiento de declaraciones y a un posterior distanciamiento entre el gobernador y su partido.

La posición del gobernador acerca de sus responsabilidades en el gobierno frente a sus obligaciones partidistas quedó establecida cuando mencionó: “ni el PRD puede ser gobierno, ni el gobierno puede ser PRD” (Cervantes, Zacarías, 2008), mostrando una distancia que lo separaba como actor político diferenciado. Mientras que el partido estaba interesado en hacer valer sus políticas y se concentró en atender las necesidades de sus simpatizantes o impulsar sus propias políticas. El gobernador, en cambio, debe atender una población más vasta, de hecho, todo el estado de Guerrero.

En este contexto, a pesar de las declaraciones abiertas de rechazo al Ejecutivo estatal y de que este marginara al partido en el gabinete de gobierno, el PRD apoyó al gobernador en aspectos clave de su gobierno, como la aprobación de las iniciativas de ley presentadas por él, excepto una. Esto último es relevante debido a que la composición de la LVIII y LIX legislatura del estado de Guerrero estuvieron integradas por la mayoría de diputados del PRD.

Ideología y candidato

La ideología propia de un partido puede ser interpretada de manera flexible por cada actor, en la medida en que ambos asumen la interpretación auténtica de la doctrina partidista. El gobernador se asumió a sí mismo como un portador de una izquierda democrática y moderna (Torreblanca, 2011), mientras que calificó a los miembros del PRD estatal como:

“... bandoleros que venden principios [...]. Cuando se habla de solidaridad, disciplina, principios, no deja de dar coraje cómo hoy algunos políticos de izquierda venden sus principios por un plato de lentejas y tratan a la gente como si fuera aún menor de edad, voy a seguir defendiendo mis principios porque lo que sobra al ser humano es la dignidad” (Pacheco, 2010).

Y agregó:

“... yo no estoy peleado con la base perredista, estoy peleado con los mezquinos líderes del partido que entregaron los principios, a esos son a los que les reclamo; no puedo permitir que de la noche a la mañana cambiemos el discurso” (Flores, 2010).

El PRD por su parte expresó:

“... es por su mal gobierno que nos llevó a perder las elecciones de alcaldes, diputados locales y federales, en el 2009, por la traición que le hizo al PRD y al pueblo de Guerrero que confió que con él habría el cambio que prometió y no cumplió” (Cervantes, Juan, 2010).

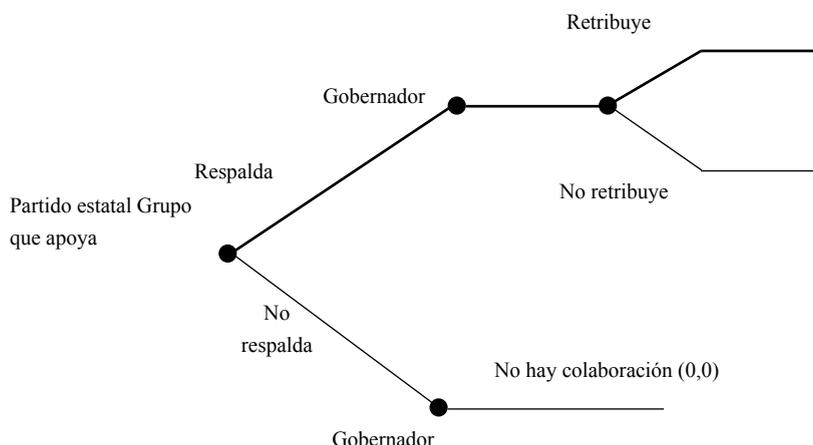
Por otra parte, la sucesión del gobernador permitió a ambos actores expresar sus preferencias y defender sus intereses y posturas al respecto. Esto fue abiertamente expuesto en el rechazo que externó el gobernador a la alianza con el priista Ángel Eladio Aguirre Rivero, como candidato del PRD para contender por la gubernatura de Guerrero. Como se ha apuntado anteriormente, una de las motivaciones del gobernador para participar en la elección de su sucesor es el interés de preservar su legado. La diferencia entre el gobernador y su partido sobre la preferencia del candidato para la gubernatura fue motivo de confrontación.

Explicando la relación entre el gobernador y su partido

A partir de lo anterior, se pueden sentar las bases para identificar la estrategia seguida por el partido ante la solicitud de respaldo por parte del gobernador. Para ilustrar la decisión del partido político se muestra en la figura 2, del árbol de decisiones, la estrategia (en línea remarcada) seguida por el partido político frente al gobernador.

FIGURA 2.

ÁRBOL DE JUEGO DEL PARTIDO ESTATAL Y EL GOBERNADOR DE GUERRERO



Fuente: elaboración propia, basada en Romero (2005), *Misaligned interests and commitment problems: a study of presidents and their parties with application to the Mexican presidency and privatization in Latin America*.

Como se aprecia en la figura 2, la cooperación del partido y su consecuente retribución puede entenderse a partir de que la retribución del gobernador no fue de manera extensiva a todo el partido, más bien se centró en funcionarios perredistas de su confianza y en los miembros del PRD en el Congreso local. Esto causó que los otros miembros del partido se sintieran excluidos y que posteriormente manifestaran abiertamente su inconformidad y rechazo al gobernador.

A manera de recapitulación, se puede exponer que la relación entre el gobernador y su partido político estuvo marcada por un desencuentro entre ambos actores políticos. Pero, a pesar de lo anterior, el gobernador recibió apoyo en aspectos clave de su gobierno, específicamente a través de los miembros del PRD del Congreso local. Por otra parte, la coyuntura electoral resaltó las diferencias tanto en el aspecto ideológico como en la sucesión para gobernador. Ambos actores reclamaban la autenticidad de la doctrina partidista y se criticaban como traidores a los principios ideológicos del partido. El conflicto por el aspecto sucesorio reflejó el interés de cada uno de los actores: mientras el gobernador prefería a alguien que diera continuidad a sus proyectos, el partido prefirió un candidato que fuera creíble para retribuir al partido.

EL CASO DEL GOBERNADOR LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT, GOBERNADOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (2004-2010), Y SU PARTIDO POLÍTICO, EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN)

Uno de los conflictos más sobresalientes entre el PAN estatal y el gobernador Luis Armando Reynoso Femat (LARF) fue el que se derivó de la solicitud, por parte del Ejecutivo al Congreso del Estado, de un financiamiento de hasta por 2.000 millones de pesos para el estado de Aguascalientes, el cual fue aprobado.

El dirigente estatal del PAN, Antonio Martín del Campo, expresó que “Hubo una falta de respeto (al partido). El gobernador está faltando a los principios del partido al endeudar a la entidad, que solo de intereses va a pagar más de 1.800 millones de pesos” (Bañuelos, 2007).

La posición inmediata que tomó el PAN de Aguascalientes fue impugnar la decisión tomada en el Congreso, intentar expulsar al gobernador y retirar los derechos partidistas de aquellos diputados del PAN que votaron a favor de la propuesta del gobernador.

La segunda parte del periodo de gobierno de LARF se caracterizó por la postura que el partido manifestó en el espacio legislativo, donde el Ejecutivo dejó de recibir el respaldo de su partido, lo cual se expresó en la modificación de las propuestas enviadas por el Ejecutivo, para adecuarlas a sus propios intereses. Al respecto, la propuesta de Ley de Ingresos de 2008 y el presupuesto 2009 fueron modificados por el PAN.

La actuación del PAN frente al gobernador reproduce el comportamiento de un partido de oposición. Tanto los intereses del gobernador como los del partido se muestran divergentes en este caso y se hace explícito el rompimiento en la cooperación entre el

gobernador y su partido político en el Congreso, esto lleva al gobernador, por la vía de los hechos, a buscar fórmulas para impulsar sus políticas con el apoyo de otros partidos (García, 2009: 261, 263).

El conflicto por la elección de candidato a gobernador

El conflicto se agudizó nuevamente en el marco de las elecciones de 2010 en el estado de Aguascalientes. La selección del candidato del PAN al gobierno del estado generó una confrontación entre el gobernador y su partido político.

Como una medida preventiva para evitar que el gobernador influyera en la selección del candidato, el PAN estatal se coordinó con el Comité Estatal Nacional (CEN) panista para establecer que los aspirantes a la candidatura para gobernador del estado debían someterse a las reglas establecidas y que sería el PAN estatal quien decidiría su candidato (Navarro, 2009: 3), a través de votaciones internas. No obstante, el CEN panista decidió directamente quién sería el candidato en las elecciones estatales, mientras acusaba a Reynoso Femat de intervenir para favorecer a uno de los precandidatos.

La inconformidad de LARF por la designación del candidato del PAN se hizo manifiesta varias ocasiones. En este contexto, el conflicto entre el gobernador y el PAN estatal llegó a nivel nacional del partido. Ambas representaciones tenían la percepción de que LARF apoyaba al candidato de la oposición política, específicamente al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que trataba de echar para abajo la candidatura del PAN; ante lo cual César Nava, líder nacional del PAN, consideró la opción de expulsar de las filas del partido al gobernador.

Después de celebrarse la elección para gobernador, en la que ganó el candidato del PRI, el PAN actuó en consecuencia con lo que ya había venido expresando anteriormente y expulsó de sus filas a LARF.

No obstante, en enero de 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó la expulsión de LARF, porque las pruebas que presentó el PAN no fueron suficientes para acreditar las acusaciones en su contra, por lo que le exigió al partido restituir los derechos de LARF, como miembro del partido (Cortés, 2012).

Explicando la relación entre el gobernador y su partido político

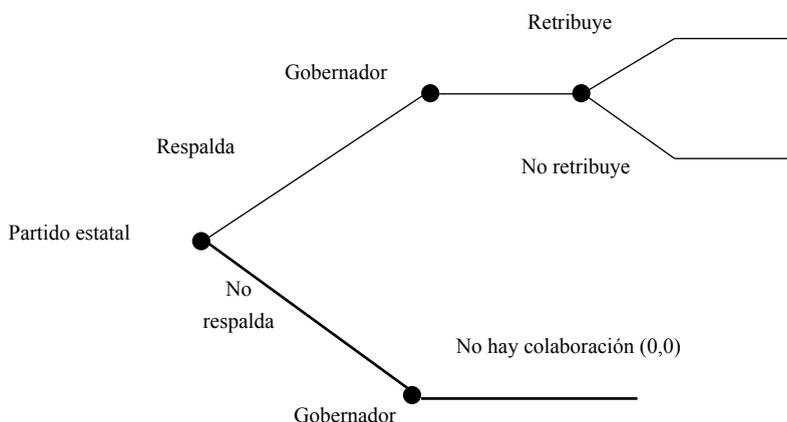
El rompimiento total entre el partido y el gobernador ocurrió en la coyuntura de las elecciones para gobernador en 2010, en que la representación nacional del partido se consideró perjudicada debido a que no recibió compensación alguna de parte del gobernador cuando este manifestó preferencia por un candidato distinto al seleccionado por el CEN panista. Esto dio como resultado la búsqueda de los intereses del partido, local y nacional,

a partir de sus propios recursos (administrativos, legales, normativos, políticos, económicos), descontando el apoyo del gobernador, al que consideró un obstáculo para el mejoramiento de la posición del partido en el estado.

La figura 3 del árbol de juego del partido estatal y el gobernador muestra la estrategia (línea remarcada) y acciones seguidas por el partido estatal.

FIGURA 3.

ÁRBOL DE JUEGO DEL PAN ESTATAL Y EL GOBERNADOR LUIS ARMANDO REYNOSO
FEMAT, 2007-2010



Fuente: elaboración basada en Romero (2005), *Misaligned interests and commitment problems: a study of presidents and their parties with application to the Mexican presidency and privatization in Latin America*.

En el marco de las elecciones para gobernador, en 2010, la relación con el partido nacional se caracterizó por el conflicto y rompimiento entre el gobernador del estado de Aguascalientes y la representación nacional del PAN, que se puede representar en la figura 4.

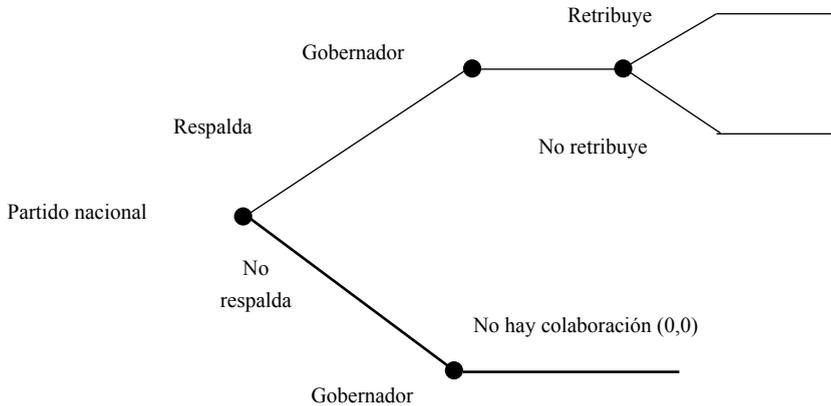
Lo anterior establece que el gobernador se guiaba más motivado por sus intereses que por los intereses del partido, sea la representación nacional o la estatal, y que no podía contar con el apoyo de su partido en el estado para implementar las políticas públicas que consideraba prioritarias en su gobierno.

En suma, es posible apreciar que la representación nacional no actuó inicialmente contra el gobernador en el primer intento de expulsión que propuso la representación estatal, sino que definió su posición contra el gobernador cuando sus intereses se vieron afectados en la definición del candidato panista a gobernador, en 2010.

Para neutralizar la oposición de su partido político, el gobernador debió de haber compensado al partido local de tal manera que este considerara beneficioso apoyarlo. Sin embargo, el rompimiento entre ambos actores expuso la carencia de acuerdos para compensar los apoyos otorgados. Esto se vio reflejado en las modificaciones que hizo el PAN estatal a las propuestas que presentó el Ejecutivo estatal al Congreso local.

FIGURA 4.

ÁRBOL DE JUEGO DEL PARTIDO NACIONAL Y EL GOBERNADOR



Fuente: elaboración basada en Romero (2005), *Misaligned interests and commitment problems: a study of presidents and their parties with application to the Mexican presidency and privatization in Latin America*.

Es posible también que el gobernador considerara muy alto el costo de retribución como para compensar a su partido político.

En el 2010, el PAN, en su representación nacional, consideró que había un mayor beneficio rompiendo con el gobernador que apoyando al candidato por el cual inclinaba sus simpatías el Ejecutivo estatal. Se presume que la retribución del gobernador hacia el PAN tanto estatal como nacional no era lo suficientemente alta como para compensar el costo asumido por ambas representaciones.

De ahí que la expulsión del partido de LARF fuera una expresión de los costos asumidos por el partido ante el escaso “pago” que devolvió el gobernador al PAN. En estas circunstancias extremas, la expulsión del partido es el reconocimiento de que el gobernador era un adversario político más que utilizaría cualquier recurso para perjudicar al partido, si con ello pudiera hacer prevalecer sus intereses.

EL CASO DEL GOBERNADOR ALFONSO SÁNCHEZ ANAYA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE TLAXCALA (1999-2005), Y SU PARTIDO POLÍTICO, EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD)

El primer gobierno de alternancia en el estado de Tlaxcala fue el gobierno de Alfonso Sánchez Anaya (ASA). Su arribo a la gubernatura, el 14 de enero de 1999, fue a través de la Coalición entre el PRD, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. No obstante, la obtención del puesto de gobernador no se vio reflejada en una mayoría en el Congreso estatal, en ninguno de los dos periodos que conformaron su gobierno. Para

este apartado se asumirá que el partido representativo y ligado al gobernador es el PRD debido a su posición dominante en la Coalición.

La confrontación del PRD contra el gobernador se expresó en los problemas surgidos alrededor de la sucesión para gobernador. La postulación de la esposa del gobernador como precandidata y luego como candidata del PRD generó controversias y enfrentamientos del gobernador con las representaciones del propio partido, tanto estatal como nacional.

Las pretensiones de la esposa del gobernador, Maricarmen Ramírez García, se presentaron en el contexto de los rumores de que el Ejecutivo federal, Vicente Fox, deseaba impulsar a su esposa para la candidatura a la presidencia de la república. Al respecto, Sánchez Anaya marcó las diferencias y expresó que su esposa fuera propuesta por un miembro del partido, no por él, además de quedar sujeta al proceso de elecciones internas del partido (Avendaño, 2004a).

La inconformidad del PRD se hizo aún más notoria cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (fundador del PRD) pidió que Maricarmen Ramírez abandonara sus aspiraciones, a la vez que ASA dejara el cargo de gobernador (Cruz Pérez, 2004). En esta situación adversa, ASA expresó “estoy dispuesto a pagar el precio político” (Avendaño, 2004b), en referencia a las críticas sobre sus acciones y las animadversiones que causaron las mismas.

En una franca confrontación con el gobernador, el partido estatal y su representación nacional acordaron rechazar la candidatura de Maricarmen Ramírez García al gobierno del estado.

El PRD estatal, por su parte, impidió el registro de Maricarmen Ramírez ante el Instituto Estatal Electoral, para competir por la gubernatura del estado. En este marco, El PRD recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señalando que Maricarmen Ramírez rebasó el tope presupuestal asignado a cada candidato. Con este argumento el partido procedió a anular su candidatura y nombrar otro candidato. Posteriormente el Tribunal Electoral decidiría que tal señalamiento era improcedente para negarle el registro a Maricarmen Ramírez. También, el Tribunal consideró que las reformas del PRD a sus estatutos, que incorporaban la prohibición de “heredar” el cargo a un familiar, violaban los derechos políticos de las personas; lo que fue considerado una victoria para la candidata electa. (Varela, *et al.*, 2004). Cabe destacar que esta reforma a los estatutos del PRD se realizó en clara alusión a Maricarmen Ramírez. Ante esto, el líder estatal perredista manifestó que “ante la resolución del pleno del Congreso del Estado, el sol azteca tendría que mantener la postura aprobada la semana pasada de quedarse sin candidato y no respaldar la postulación de Maricarmen Ramírez García” (Cruz y Varela, 2004).

Con el fin de encontrar intereses comunes entre el gobernador y el partido político, se celebró una reunión con la cúpula perredista donde se sugirió que el gobernador dejara el cargo, para evitar que apoyara a su cónyuge. No obstante, el gobernador consideró que el partido se extralimitaba en sus funciones, porque no tenía atribuciones para tales solicitudes.

Debido a esta negativa, el PRD dispuso la aplicación de una sanción contra el gobernador, quien expuso que no existía ningún recurso legal para sancionarlo, ni para expulsarlo del partido (Avendaño y Cruz, 2004).

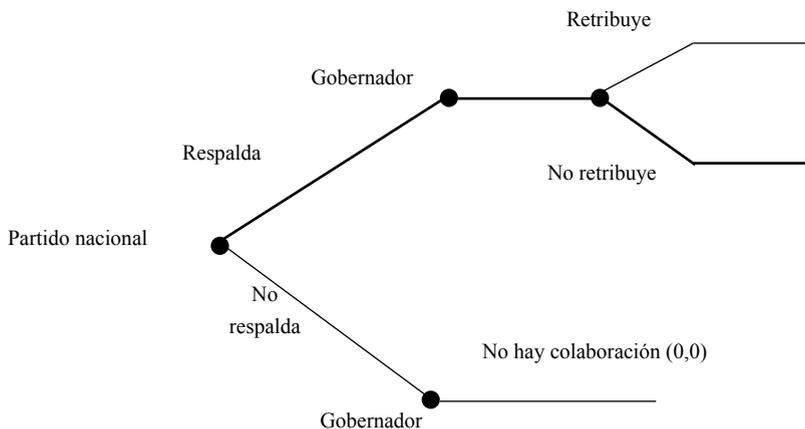
Finalmente, y debido a lo dispuesto por el Tribunal Electoral, el PRD buscó la gubernatura con la candidatura de Maricarmen Ramírez. Al final de la jornada electoral, la candidata de la coalición PRD-Convergencia obtuvo el tercer lugar.

Explicando la relación entre el gobernador y su partido político

En la figura 5 se observa el respaldo del partido nacional a las acciones del gobernador, pero esto debe acotarse a que el apoyo del PRD no provino de una decisión interna sino de un mandato legal. Esto obligó al PRD a respaldar la decisión de ASA, lo que disminuyó la necesidad de pagar el apoyo de su partido. En este sentido, debe entenderse la escasa insistencia en la expulsión de ASA del partido, dado que tal acción no podía sostenerse legalmente frente al tribunal electoral y auguraba un revés para el partido nacional.

FIGURA 5.

ÁRBOL DE JUEGO DEL PARTIDO NACIONAL Y EL GOBERNADOR DE TLAXCALA



Fuente: elaboración propia, basada en Romero (2005), *Misaligned interests and commitment problems: a study of presidents and their parties with application to the Mexican presidency and privatization in Latin America*.

Las acciones posteriores del PRD refuerzan esta postura, debido a que la carrera del ASA prosiguió una vez que fue electo para el Senado para el periodo 2006-2012, por la coalición PRD-PT-Convergencia. No obstante, su candidatura fue descartada para la presidencia del PRD.

COMENTARIOS FINALES

El trabajo desarrollado aquí muestra que la relación entre el gobernador y su partido está lejos de ser armoniosa. En este contexto, la relación siempre se halla en tensión debido a que cada actor orienta sus acciones hacia sus propias metas, que son institucionalmente divergentes, a pesar de tener muchos puntos en común y de que mutuamente se necesitan para tener éxito en sus tareas. Se puede decir que esta situación refleja lo expuesto por Maravall (2003: 128-137), en cuanto a la relación entre el principal (partido) y su agente (su gobernante).

No toda relación entre el Ejecutivo estatal y su partido termina en un conflicto, regularmente estos actores suelen cooperar para beneficiarse uno al otro. Sin embargo, como se ha observado a lo largo de este trabajo, esta cooperación se vio entorpecida por el alto costo que el partido percibió que pagaría y que no era compensado por los beneficios que ofreció el gobernador. A esto se aunó la condición relacionada con el horizonte temporal, que colocó al gobernador en una situación en la que le resultaba imposible garantizar las recompensas a su partido, debido a que su periodo de gobierno estaba por terminar.

Los gobernadores, por su parte, intentaron alejar a su partido político del gobierno, porque, en primera instancia, los resultados del gobierno implicaban la responsabilidad del Ejecutivo estatal y el legado de su gobierno descansó sobre las acciones que emprendieron y no en la obediencia a su partido, aunque su futuro político dependiera del apoyo de este.

Es de destacar que en los casos vistos aquí, se aprecia que los partidos políticos esperaban más de lo que recibieron de sus respectivos gobernadores. Se puede entender que existió un apoyo inicial en la medida en que el partido esperaba que en un futuro cambiara esta situación y recibiría ganancias por el apoyo otorgado al gobernador. No obstante, a medida que pasó el tiempo y se acercaba el final del periodo de gobierno se hizo más claro que las ganancias podrían no materializarse.

En otros casos, fue el mismo gobernador el que mandó un mensaje claro al partido sobre los beneficios que este pudiera esperar, dejando de manifiesto que el partido no tendría participación en el gobierno. En todo caso, el gobernador pudo creer que había cumplido con su parte del trato al incluir en el gabinete a algunos miembros del partido. Empero, de este trabajo se desprende que los miembros del partido que se incorporaron al gabinete de gobierno tendieron a ser más afines con el gobernador que con su partido político.

En resumen, este trabajo ha analizado las condiciones en que el gobernador y su partido político se vieron movidos a la cooperación o entraron en conflicto. De igual manera se destaca el componente racional y las estrategias optadas por los actores para obtener el logro de sus metas, en las que algunas veces no se logró establecer el equilibrio, resultando en el rompimiento.

Referencias

- Aguayo Quezada, Sergio. 2010. *La vuelta en U. Guía para entender y reactivar la democracia estancada*. México: Taurus.
- Alcántara, Manuel y Juan Pablo Luna. 2004. “Ideología y competencia partidaria en dos post-transiciones: Chile y Uruguay en perspectiva comparada”, *Revista de Ciencia Política*, 24 (1): 128-168.
- Alcántara, Manuel. 2004. *¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos latinoamericanos*. Barcelona: ICPS.
- Ames, Barry. 1987. *Political Survival: Politicians and Public Policy in Latin America*. Berkeley: University of California Press.
- Aziz Nassif, Alberto. 2012. “La desorganización del Estado mexicano: cuatro perspectivas de análisis”, en Salvador Martí (ed.), *¿Adónde chingados va México?* Madrid: Catarata.
- Cameron, Charles M. 2000. *Veto Bargaining: Presidents and the Politics of Negative Power, Political Economy of Institutions and Decisions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Canes-Wrone, Brandice. 2006. *Who leads whom? President, Policy and the public*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carpizo, Jorge. 2006 [1978]. *El presidencialismo mexicano*. México: Siglo XXI.
- Colomer, Josep. 2006. *Political Institutions. Democracy and Social Choice*. Reino Unido: Oxford University Press.
- Diamond, Larry Jay y Richard Gunther. 2001. *Political parties and democracy*. EE.UU.: Johns Hopkins University Press.
- Downs, Anthony. 1957. “An Economic Theory of Political Action in a Democracy”, *The Journal of Political Economy*, 65 (2): 135-150.
- Ferejohn, John. 1986. “Incumbent Performance and Electoral Control”, *Public Choice*, 50, 1: 5-25.
- Frye, Timothy. 2004. “Credible Commitment and Property Rights: Evidence from Russia”, *The American Political Science Review*; 98 (3): 453-466.
- García Montero, Mercedes. 2009. *¿Presidentes y Parlamentos: ¿quién controla la actividad legislativa en América Latina?* Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Greif, Avner y David Laitin. 2004. “A Theory of Endogenous Institutional Change”, *The American Political Science Review*, 98 (4): 633-652.
- Hernández Norzagaray, Ernesto. 2009. “Presidencialismo y gobiernos estatales en México: Partidos, elecciones y federalismo”, en Manuel Alcántara Sáenz y Ernesto Norzagaray, *México. El nuevo escenario político ante el Bicentenario*, pp. 181-209. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Johnston, Michael. 2005. *Political parties and democracy in theoretical and practical perspectives. Political finance policy, parties, and democratic development*. Washington: National Democratic Institute for International Affairs.
- Kiewiet, D. Roderick y Mathew D. McCubbins. 1991. *The Logic of Delegation: Congressional Parties and the Appropriations Process*. Chicago: University of Chicago Press.

- Maravall, José María. 2003. *El control de los políticos*. Madrid: Santillana.
- Martí, Salvador, Reynaldo Ortega y María Fernanda Somuano (eds.). 2011. *La democracia en México: Un análisis a diez años de la alternancia*. Barcelona: Edicions Bellaterra.
- Martí, Salvador. 2012a. *¿Adónde chingados va México?* Madrid: Catarata.
- Martí, Salvador. 2012b. “Ciudadanía y cultura política en México”, en Salvador Martí, (ed.), *¿Adónde chingados va México?* Madrid: Catarata.
- Mizrahi, Yemile. 2001. *Pressuring the center: opposition governments and federalism in Mexico*. Documento de trabajo. Ciudad de México: CIDE, 71: 1-17.
- Moe, Terry. 1993. “Presidents, Institutions, and Theory”, en George C. Edwards III, John H. Kessel y Bert A. Rockman (eds.), *Researching the Presidency: Vital Questions, New Approaches*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Navarro, Mauricio. 2009. “Decidirá la militancia panista al próximo gobernador”, *La Jornada Aguascalientes*, diciembre: 3.
- Norris, Pippa. 2005. *Political parties and democracy in theoretical and practical perspectives. Developments in party communications*. Washington: National Democratic Institute for International Affairs.
- North, Douglass C. 1994. “The historical evolution of polities”. *International Review of Law and Economics*, 14, 4: 381-391.
- Orlandi, Hipólito y Alicia Olivieri. 1998. “Las instituciones políticas de gobierno”, en Hipólito Orlandi (ed.), *Las Instituciones políticas de gobierno*. Buenos Aires: EUDEBA, 1998: 15-26.
- Romero, Vidal. 2005. *Misaligned interest and commitment problems: a study of presidents and their parties with application to the Mexican presidency and privatization in Latin America*. David D. Laitin (dir.), Stanford University, Stanford.
- Root, Hilton L. 1994. *The fountain of privilege. Political foundations of markets in old regime France and England*. Berkeley: University of California Press.
- Ruiz Rodríguez, Leticia M. 2007. “Los espacios ideológicos del PP y el PSOE en Castilla y en León”. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 120: 155-173.
- Sartori, Giovanni, 1980. *Partidos y sistemas de partidos*, tomo I, Madrid: Alianza Editorial.
- Schlesinger, Joseph. 1994. *Political parties and the winning in office*. EE.UU.: The University of Michigan Press.
- Shepsle, Kenneth A. 2007. “Estudiando las instituciones: algunas lecciones del enfoque de la elección racional”, *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, diciembre: 15-34.
- Shugart, Matthew S. 1998. “The Inverse Relationship Between Party Strength and Executive Strength: A Theory of Politicians’ Constitutional Choices”, *British Journal of Political Science*, 1, 28: 1-29.
- Skowronek, Stephen. 1993. *The Politics Presidents Make: Leadership from John Adams to George Bush*. Cambridge: Harvard University Press.
- Stokes, S. C. 1999. “Political parties and democracy”, *Annual Review of Political Science*, 2: 243-267.

- Torreblanca Galindo, Zeferino. 2011. *El acento del cambio*. México: Porrúa.
- Valdés, Leonardo. 2001. *Sistemas electorales y de partidos*. México: Instituto Federal Electoral. Cuadernos de la divulgación de la cultura democrática.
- Ware, Alan. 1996. *Political parties and party systems*. Oxford: Oxford University Press.

Fuentes electrónicas

- Avendaño, José Carlos. 2004a. *No hay ninguna similitud entre mi esposa y la de Fox*. Disponible en web: <http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2004/07/07/oriente.html> [consulta: 14 de julio de 2011].
- Avendaño, José Carlos. 2004b. *Reafirma Sánchez Anaya que su esposa es candidata; estoy dispuesto a pagar el precio político*. Disponible en web: <http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2004/07/27/oriente.html> [consulta: 13 de octubre de 2011].
- Avendaño, Carlos y Juan Luis Cruz. 2004. *No hay motivos para que me sancione mi partido, dice Alfonso Sánchez Anaya*. Disponible en web: <http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2004/10/08/oriente.html> [consulta: 12 de octubre 2011].
- Bañuelos, Claudio. 2007. *Protestan panistas en Aguascalientes*. Disponible en web: <http://www.jornada.unam.mx/2007/01/03/index.php?section=estados&article=026n2est>. [consulta: 13 de marzo de 2011].
- Cervantes, Zacarías. 2008. *Llama Zeferino a la dirigencia el PRD a discutir “en privado” los “temas domésticos”*. Disponible en web: http://el-suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_notas=48550 [consulta: 12 de abril de 2011].
- Cervantes, Juan. 2010. *Torreblanca arremete contra PRD en Guerrero*. Disponible en web: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/706004.html> [consulta: 13 de septiembre de 2011].
- Cortés, Nayeli. 2012. *TRIFE revoca expulsión de Reynoso Femat del PAN*. Disponible en web: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/820441.html> [consulta: 14 de agosto de 2012].

- Cruz Pérez, Juan Luis. 2004. *Divide a perredistas llamado de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sobre caso Tlaxcala*.
Disponibile en web:
<http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2004/07/30/oriente.html>
[consulta: 13 de noviembre 2012].
- Cruz Pérez, Juan Luis y Víctor Hugo Varela. 2004. *Niegan diputados permiso a ASA; "cumplí, merezco que mi partido me dé una medalla"*.
Disponibile en web:
<http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2004/09/23/oriente.html>
[consulta: 12 de noviembre de 2011].
- Flores, Israel. 2010. *Mezquindad y desmemoria revientan la unidad en el PRD, no Zeferino Torreblanca, dice Zeferino*.
Disponibile en web:
http://el-suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_notas=87265
[consulta: 01 de marzo de 2011].
- Pacheco, Ossiél. 2010. *Líderes del PRD, "Bandoleros que venden principios"*.
Disponibile en web:
<http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2010/09/30/index.php?section=politica&articulo=003n1pol>
[consulta: 10 de octubre de 2011].
- Varela, V., C. Avendaño y F. Robles. 2004. *Desecha TEPJF recurso de Ramírez, por el que el PRD la desconoció como candidata*.
Disponibile en web:
<http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2004/08/20/oriente.html>
[consulta: 12 de octubre de 2011].

Presentado para evaluación: 11 de diciembre de 2014

Aceptado para publicación: 14 de octubre de 2014

SILVESTRE LICEA DORANTES

silvestrelicea_iiepaima@uagro.mx

Profesor-investigador del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, "Ignacio Manuel Altamirano", de la Universidad Autónoma de Guerrero, México. Doctor en Investigación en Ciencia Política y miembro del padrón de investigadores del estado de Guerrero. Este trabajo es el resultado de una estancia breve de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, Campus Somosaguas, en el Departamento de Ciencia Política y Administración I, bajo la tutoría del Dr. Secundino González Marrero.

Identidad europea en el sur de Europa: un análisis comparado de las percepciones de las élites y opinión pública en España y Portugal

European identity in southern Europe: a comparative analysis of elite and public opinion perceptions in Spain and Portugal

Aleksandra Sojka
Universidad de Granada
sojka@ugr.es

Rafael Vázquez
Universidad de Granada
rvazquez@ugr.es

Resumen

En el actual contexto de creciente politización del proceso de integración europea, que ha puesto de relieve la importancia de las identidades políticas, el presente trabajo trata la cuestión de la identidad europea en el sur de Europa. Valiéndonos de los datos del Proyecto IntUne, analizamos los componentes afectivos y cognitivos que conforman la identidad europea y contrastamos la validez de los distintos modelos explicativos para el caso de las élites y la opinión pública en España y Portugal. Los resultados confirman un mayor grado de identificación con Europa entre las élites españolas y portuguesas, en comparación con la opinión pública. Asimismo, se ratifica que la movilización cognitiva constituye el factor clave para la identificación europea entre las élites mientras que para la opinión pública lo son las consideraciones utilitaristas. Por último, corroboramos a través de nuestro trabajo cómo la identidad nacional y europea resultan

complementarias en un sentido de retroalimentación positiva tanto entre la población como entre las élites españolas y portuguesas.

Palabras claves: *identidad europea, percepciones políticas, élites, opinión pública, sur de Europa, España, Portugal.*

Abstract

The increasing politicization of European integration in the recent decades highlighted the need to study political identities as central elements in the process. Using data from the IntUne project, we explore affective and cognitive identification with Europe among public opinion and elites in Southern Europe (Spain and Portugal) and we compare and contrast the applicability of different explanatory approaches to European identity in the two countries. Our results confirm the existence of an important gap between public opinion and elites in terms of how well identification with Europe is rooted in political identities in Southern Europe. The study provides empirical evidence for the cognitive mobilization processes among elites and utilitarian considerations among public opinion, as main factors which favor the development of attachment to Europe. We also confirm that European and national identities are positively correlated, and, thus, complementary, both among Spanish and Portuguese elites and public opinion.

Keywords: *european identity, political perceptions, elites, public opinion, southern Europe, Spain, Portugal.*

INTRODUCCIÓN: LA PERCEPCIÓN DE EUROPA ENTRE LAS ÉLITES Y LA OPINIÓN PÚBLICA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

El interés por las percepciones de la identidad europea entre la élite y la ciudadanía españolas y portuguesas surge en el contexto general de una progresiva politización de las cuestiones relacionadas con las políticas europeas y los debates acerca de la legitimidad democrática de la Unión Europea (UE) (Thomassen, 2009; Lucarelli, Cerutti, y Schmidt, 2011). Este ha sido un proceso que en las últimas décadas ha hecho crecer los interrogantes sobre la existencia de una identidad europea compartida por los nacionales de los distintos Estados miembros. Pese al importante grado de europeísmo que ambos países aún muestran en su población y sus élites, el advenimiento de la crisis económica en los últimos años exige una renovada atención a la naturaleza de la identificación de portugueses y españoles con el proyecto de integración europea.

Con la celebración de las últimas elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2014 hemos podido constatar cómo la brecha entre electores y clase política tradicional ha ido profundizándose a través de una baja participación, especialmente escasa en el caso de Portugal (34,5% frente al 45,9% en España), así como mediante la apuesta por opciones partidistas más críticas e incluso (si bien no es el caso de España ni Portugal) abiertamente antieuropeístas. Todo ello, nos conduce a reflexionar acerca de la importancia de la relación que los ciudadanos de la península ibérica han tenido y tienen con el proceso de construcción comunitaria.

Tradicionalmente, la opinión pública de Portugal y España se ha caracterizado por un alto grado de posiciones proeuropeístas durante la práctica totalidad de su etapa como miembros de la Unión e incluso con anterioridad a su inclusión en la misma (Magone, 2002: 209-236; Otero Felipe, 2008), así como un elevado consenso entre las élites en torno

a los asuntos europeos (Jerez-Mir, Real-Dato y Vázquez, 2014). Este general acuerdo de élites y ciudadanos se ha venido traduciendo en unos elevados niveles de identificación con Europa y sus instituciones, así como en un claro apoyo a la idea de gobernabilidad compartida entre los Estados miembros y las esferas de decisión comunitarias. Sin embargo, las encuestas de opinión nos indican cómo con el advenimiento de la crisis en la eurozona a partir de 2009 y las políticas de austeridad que le siguieron, este amplio consenso ha sufrido una progresiva e importante erosión, sobre todo entre los ciudadanos de a pie, si bien no tanto entre las élites. Así lo demuestran los estudios del Eurobarómetro: en el año 2007, dos terceras partes de los españoles, y similar proporción entre los portugueses, declaraban confiar en la UE. Cinco años más tarde, estas cifras se han invertido y el 72% de la población española y el 63% de la portuguesa presentaban ya un sentimiento de desconfianza hacia el entramado institucional europeo¹. Hay que señalar que en Portugal este descenso de confianza comienza unos años antes, tras la incorporación a la Unión de los nuevos miembros del centro-este de Europa en 2004, y con el inicio de lo que se ha denominado “fase realista” (Costa Pinto y Lobo, 2004; Soares, 2007).

Este declive ha puesto de relieve la necesidad de algún tipo de identificación con la idea y las instituciones de la Unión Europea para legitimar el mayor desarrollo de esta como una entidad de gobernanza supranacional en el futuro cercano (Bruter, 2005; Cerutti, 2011; Fuchs, 2011a). No resulta extraño, pues, que nos encontremos ante el surgimiento de un amplio número de estudios sobre los procesos de identificación, como un aspecto destacado de la cuestión del apoyo a la integración europea.

En los trabajos existentes predominan estudios de la opinión pública basados en los datos generales del Eurobarómetro, donde a lo largo de las últimas décadas se han incluido variables que pueden relacionarse con los procesos de identificación, a través de preguntas acerca del apoyo a la integración europea, el sentimiento de orgullo nacional y europeo, el pensarse nacional y/o europeo, o el sentimiento de vinculación a los diferentes niveles territoriales. Esta fuente ha sido utilizada para construir diversos modelos de análisis que intentan dar cuenta de algunos aspectos específicos de los procesos de identificación con Europa entre la ciudadanía de los países miembros (Citrin y Sides, 2004; Duchesne y Frogner, 2008; Fligstein, 2008; Risse, 2010; Fuchs, 2011a). En el caso de sur de Europa, los datos del Eurobarómetro (Otero Felipe, 2008) se han complementado en ocasiones, y siempre que ha existido disponibilidad, con los estudios de opinión nacional para obtener una visión más precisa de la evolución de las percepciones de la opinión pública española y portuguesa acerca de sus actitudes hacia Europa (Da Cruz, 1993; Díez Medrano y Gutiérrez, 2001; Costa Lobo, 2003; Szmolka, 2008; Ruiz Jiménez y Egea de Haro, 2011)². Si bien con estos estudios como referencia, nuestro objetivo es un análisis

1. Datos de los Eurobarómetros 67 (primavera 2007) y 77 (primavera 2012).

2. La mayor parte de los estudios dedicados al análisis de los procesos de identificación y vinculación europea se han valido de una metodología cuantitativa mediante la explotación de bases de datos de sondeos de opinión. Mucho menos numerosos han sido los trabajos con perspectiva cualitativa como por ejemplo los de Menéndez-Alarcón (2000), Díez Medrano (2003) y García Faroldi (2008).

de la identificación con la Unión Europea en el caso de España y Portugal en base a los datos proporcionados por el proyecto europeo IntUne. Este estudio se ha llevado a cabo en 18 países de la UE con el principal propósito de proporcionar una herramienta fiable para el análisis comparado de las actitudes de élites y opinión pública frente a las cuestiones de identidad y ciudadanía en el marco de la UE.

La elección de ambos países en el estudio queda justificada por el notable grupo de características en común que hacen relevante el análisis conjunto. Podríamos destacar, en este sentido, dos grandes grupos de elementos de convergencia: históricos y geográficos. En cuanto a los primeros, ambos países muestran ciertas similitudes en el transcurso de los acontecimientos políticos —al menos durante los dos últimos siglos—, que se intensifican de manera muy evidente a partir de la década de los setenta del siglo pasado con los procesos de extinción de regímenes autoritarios y de transición democrática; interacciones comunes que resultan aún más obvias con la entrada conjunta en 1986 de ambos países como miembros del proyecto integracionista europeo (Martín de la Guardia y Pérez Sánchez, 2011). Conviene precisar, no obstante, a pesar de las características distintivas del proceso histórico en Portugal respecto a España en su convergencia europea (Costa Pinto y Teixeira, 2003; Teixeira, 2012; Ruivo *et al.*, 2012) y las diferentes pautas seguidas durante el proceso de transición democrática (Linz y Stepan, 1996), en ambas naciones ibéricas existía el convencimiento de que la CEE haría consolidar sus recién establecidas democracias (Royo y Manuel, 2003). En segundo término, y pese a la realidad atlántica marítima de Portugal, tanto España como Portugal pertenecen al círculo de países democráticos y miembros de la Unión Europea del sur de Europa o la “Europa mediterránea”, junto a Italia y Grecia. Comparten un importante núcleo de valores y tradiciones históricas además de una cultura política con rasgos específicos. A ello habría que añadir importantes paralelismos en la relación con la Unión Europea entre todos estos países (Malefakis, 1995; Magone, 2002 y 2003; Gunther, Diamandouros y Sotiropoulos, 2006) y, de manera muy evidente, a partir del surgimiento de la crisis. Por ello, presentamos, los datos de nuestro estudio en un marco comparativo no solo entre España y Portugal, sino también con respecto al conjunto de los países del Sur de Europa (en nuestra base de datos Italia y Grecia junto a Portugal y España) y con el resto de los países europeos.

Por otro lado, la comparación que mostramos entre élites y opinión pública se debe al hecho de que si bien existe una abundante literatura sobre el apoyo de la ciudadanía a la Unión Europea (véase Loveless y Rohrschneider, 2008 para una revisión), la investigación acerca de las actitudes de las élites hacia el proceso comunitario ha sido mucho más escasa. Junto al hecho de la enorme dificultad para conseguir estos datos, la principal razón —sobre todo hasta la década de los noventa—, tal vez haya sido el punto de vista acerca del papel jugado por las élites en las teorías dominantes sobre la integración europea, oscilantes entre el funcionalismo y el intergubernamentalismo. Sin embargo, durante los años noventa, con el avance del proceso de integración supranacional, el paradigma del “consenso permisivo” dio paso a un nuevo contexto donde los asuntos europeos cada vez estaban más presentes en las agendas políticas (Hooghe y Marks, 2005). Esta nueva

situación supuso un mayor interés sobre las actitudes de las élites domésticas en relación al proceso de integración europea y, particularmente, por su doble condición de actores principales en el proceso y de conformadores de las posiciones partidistas nacionales (Katz y Wessels, 1999; Aspinwall, 2002; Ladrech, 2002).

En relación a los objetivos básicos del presente trabajo, en esta investigación se pretende dar respuesta a dos objetivos principales. El primero sería medir la intensidad de la identidad europea de la opinión pública en España y Portugal, comparada con la de sus élites. En segundo lugar, comprobar en qué medida los factores explicativos del proceso de identificación europea que se han venido utilizando en otros estudios resultan funcionales para el caso de España y de Portugal. A partir de todo ello, el estudio que aquí presentamos se estructura en dos partes principales. En la primera parte ofrecemos un breve repaso de las cuestiones teóricas más significantes para el análisis comparado de la identificación con Europa entre las élites y la opinión pública, mientras que la segunda parte contiene los resultados del estudio empírico: datos descriptivos y modelos explicativos de regresión logística sobre la identidad europea para el caso de las élites y la opinión pública en España y Portugal.

LA IDENTIFICACIÓN CON EUROPA: CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE LAS PERCEPCIONES DE LAS ÉLITES Y LA CIUDADANÍA

La identidad constituye el vínculo necesario entre el individuo y la sociedad. En su formulación política se convierte en la pieza central del funcionamiento de sistemas políticos al proporcionarle legitimidad como un elemento del apoyo difuso (Easton, 1975). Por ello, la identificación europea constituye un aspecto crucial de las actitudes hacia la UE (Boomgaarden *et al.*, 2011).

Desde el punto de vista conceptual, para acercarnos a la identidad europea como un hecho empírico, tomamos como referencia los estudios de psicología social. Los trabajos clásicos de Henri Tajfel sobre la teoría de identidad social nos indican que la identidad la conforma “el conocimiento que posee el individuo de que pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación que tiene para él/ella dicha pertenencia” (Tajfel, 1981: 255). Por lo tanto, podemos diferenciar entre el aspecto afectivo de las identidades y su aspecto cognitivo (sobre la aplicación de la teoría de identidad social al fenómeno de la identidad europea, véase Fuchs, 2011b). En este sentido, en el presente estudio analizamos la vinculación a Europa (así como el país) para ahondar en el aspecto afectivo de las identidades. Para explorar su aspecto cognitivo, nuestra referencia es el grado de incorporación de identificación con Europa en las identidades políticas de las élites y ciudadanos, distinguiendo entre la identificación como nacional y/o europeo. Aquí diferenciamos sobre todo entre las identidades que incluyen el ingrediente europeo y la identidad exclusiva nacional, de acuerdo con la perspectiva teórica que admite la coexistencia de identidades múltiples (Bruter, 2005; Hooghe y Marks, 2005; Risse, 2010).

Respecto a las potenciales diferencias entre las percepciones de élites y opinión pública en su grado de identificación con Europa, conviene reflejar algunas consideraciones teóricas en torno al tema. Parece claro que las actitudes de las élites influyen de manera significativa en el grado de europeización de las identidades de la ciudadanía tal y como han entendido muchos trabajos (Bruter, 2005; Hooghe y Marks, 2005; Pridham, 2007; Risse, 2010) y, por lo tanto, sus percepciones acerca de la Unión Europea y su grado de identificación con Europa constituyen un elemento clave para entender los procesos de incorporación de la identificación con la Unión Europea en los contextos nacionales.

No obstante, el papel de las élites en la construcción de una identidad europea no resulta unívoco. Mientras que las élites pueden influir la percepción de la UE de manera positiva y favorecer la incorporación de la identificación con Europa en las identidades nacionales, su actuación puede igualmente dificultarlo (Bruter, 2005: 4). En este sentido, se ha demostrado empíricamente que en el caso de que las élites políticas mantengan un alto consenso sobre el apoyo a la integración y no lo utilicen como elemento de contestación política, encontramos índices más altos de identificación europea entre la ciudadanía, mientras que la división sobre el apoyo a la integración europea puede proporcionar una base para el euroescepticismo popular (Hooghe y Marks, 2005: 437).

En el caso concreto de España y Portugal, nos hallamos ante un amplio consenso sobre el apoyo a la integración entre las élites, ya que la entrada de ambos países en la UE se ha considerado históricamente como un elemento necesario para completar la transición democrática (Magone, 2003). Este general consenso entre las élites viene acompañado por un alto grado de apoyo a la integración europea entre la ciudadanía, lo que se traduce en la coexistencia de identidades nacionales y regionales con la identificación con Europa (Diez Medrano y Gutiérrez, 2001); hecho que es mucho más perceptible en España por la especificidad de su estructura territorial del poder político, mucho más descentralizada y al tiempo problemática que la del centralismo portugués. Junto a las evidencias en este sentido relativas a la opinión pública y a la postura de las élites, el análisis de los programas electorales de los principales partidos políticos concurrentes a las elecciones al Parlamento Europeo tanto en Portugal como en España, ha presentado un extendido consenso histórico ibérico hacia la necesidad de apoyar el proyecto europeo desde las primeras elecciones en las que se pudo votar en ambos países en 1987 hasta la actualidad. No debe evitarse señalar, en cualquier caso, y pese a esta confluencia ideológica en los asuntos europeos, que la izquierda menos centrada en ambos países y con especial notoriedad en Portugal ha mantenido posturas mucho más críticas hacia la construcción europea, si bien en ningún caso contra la idea misma de Europa desde posiciones eurofobas (Bruneau, 1997; Freire, 2012; Rodrigues Sanches y Santana Pereira, 2012; Vázquez, Delgado y Sojka, 2014). Por lo demás, algunas otras variables relativas al sistema de partidos, la situación económica o las diferentes alianzas geoestratégicas de ambos países, hacen difícil poder hablar de un total desarrollo homogéneo de las actitudes de los partidos políticos hacia el proceso de convergencia europea en los dos estados (Álvarez-Miranda, 1994).

No obstante, esta imagen de euro-optimismo ibérico predominante se ha matizado más recientemente, no solo por el carácter más crítico de algunos partidos —en especial los del espectro ideológico de la izquierda como ya hemos señalado— sino también por algunos estudios que apuntan a un alto grado de desconocimiento de la UE entre la ciudadanía, lo que, en determinadas condiciones, podría proporcionar una base para el surgimiento de actitudes más negativas (Barreiro y Sánchez Cuenca, 2001; Ruiz Jiménez y Egea de Haro, 2011).

Un aspecto significativo de la comparación entre las percepciones de las élites y la ciudadanía es la diferencia habitual entre estos actores que existe en general en la percepción de todo el proceso de integración europea. En este sentido, y tal y como confirmamos en esta investigación, se ha venido observando un mayor europeísmo de las élites y un mayor escepticismo hacia el proceso de integración entre la opinión pública. Algunos autores como Inglehart (1970) argumentan que esta diferencia puede explicarse con la hipótesis de “movilización cognitiva”, la cual se refiere a los mayores niveles de formación de las élites que les permite desarrollar más fácilmente la identificación con una comunidad política remota como la UE. Según este autor, las élites en general tienden a tener una visión más positiva del proceso de integración europea, mientras que la opinión pública exhibe unos niveles más altos de desconocimiento de la Unión Europea y mantiene una postura mucho más crítica respecto a la UE (Inglehart, 1970). Nuestro trabajo pretende corroborar la persistencia de esta diferencia. Por lo tanto, nuestra hipótesis H1 se formula de la siguiente manera: las élites (políticas, sindicales y de los medios de comunicación) en España y Portugal presentan un mayor grado de vinculación a Europa en su identidad que la opinión pública.

Dada la compleja delimitación del concepto de identidad europea al tratarse de una construcción en curso, a menudo se han venido estableciendo vínculos con las identidades nacionales para su análisis y mejor comprensión. Las perspectivas preliminares que asumían la incompatibilidad de las identidades nacionales con una identificación con Europa (Carey, 2002) presuponían que la construcción de una identidad europea debe seguir el mismo proceso que las identidades nacionales (Smith, 1992). No obstante, dada la diversidad cultural de la UE-28, no parece probable el surgimiento de la identidad europea como una identidad fuerte basada en una historia y cultura compartidas, al igual que ocurre en el caso de las identidades nacionales. Por lo tanto, en el presente estudio adoptamos la perspectiva que asume la coexistencia de *identidades múltiples*, predominante en los estudios más recientes (Diez Medrano y Gutiérrez, 2001; Herrmann y Brewer, 2004; Bruter, 2005; Hooghe y Marks, 2005; Risse, 2010). De aquí nuestra segunda hipótesis, H2: La identidad nacional y europea, tanto en España como en Portugal, son complementarias; esto es, a mayor vinculación al país de origen se refuerza la vinculación a Europa.

Para poder extraer conclusiones válidas acerca del impacto de las identidades nacionales sobre la identificación europea, en los modelos explicativos introducimos una serie de variables que dan cuenta de los otros factores que pueden influir a nivel individual en la identificación con Europa, de acuerdo con la literatura ya existente. El primer modelo explicativo básico es el que se refiere a los recursos individuales generalmente vinculados

con la socialización y las orientaciones valorativas que detentan los individuos de una sociedad. Aquí encajan, fundamentalmente, los trabajos de Ronald Inglehart (1970) sobre los procesos de *movilización cognitiva*. Obviamente, la influencia de las variables que agrupamos bajo el concepto de cultura política resulta decisiva para entender este tipo de procesos. En este sentido, y si bien esta tarea excede las pretensiones de nuestro análisis, las confluencias y divergencias que pudieran hallarse respecto al perfil de la sociedad civil en cada uno de los países ibéricos, resultaría de gran interés y relevancia (Fernandes, 2012). Entre estas variables a las que hacemos referencia podrían tomarse en consideración el grado de conocimiento en el funcionamiento de las instituciones, la exposición a medios de información o el perfil materialista/posmaterialista de las preferencias individuales (Janssen, 1991). Así lo han demostrado algunos trabajos en los que se observa cómo a mayor nivel educativo o un mayor interés por la política se produce una mayor intensidad en los sentimientos de vinculación hacia la Unión Europea (Duchesne y Frogner, 1995). De igual modo, se ha contrastado cómo la mayor interacción con otros ciudadanos de la Unión Europea bien por motivos de trabajo o de estudios o por ostentar la capacidad de manejar idiomas de otros países europeos, conducía a un fortalecimiento de una identidad comunitaria compartida (Fligstein, 2008). Nuestra tercera hipótesis (H3) se expresa, por lo tanto, como sigue: los elementos de movilización cognitiva favorecen mayor identificación con Europa entre las élites y la opinión pública en España y Portugal.

Otros factores que se han examinado como relevantes para la identificación con Europa y que se incluyen como variables de control en nuestros modelos son la *evaluación institucional doméstica* y *evaluaciones utilitaristas*. La primera, la evaluación que los individuos llevan a cabo acerca del funcionamiento del sistema político en el país de procedencia (fundamentalmente medido a través de los índices de confianza o la evaluación del funcionamiento de la democracia) influye, en un sentido u en otro, en la toma de postura con respecto a las instituciones europeas y, por ende, puede convertirse en un buen factor explicativo de las actitudes de identificación europea o falta de la misma. Algunos estudios demuestran una correlación positiva (Anderson, 1998) mientras que otros subrayan que es precisamente una ponderación negativa del funcionamiento de las instituciones de un país la que predispone a una mayor confianza hacia los organismos comunitarios (Sánchez Cuenca, 2000) lo que puede conducir a mayor identificación, a la postre, con el orden comunitario. Por otra parte, los cálculos a corto y medio plazo de los beneficios obtenidos o el pronóstico de los mismos por venir parecen, sin duda, proveer un importante caudal explicativo del apoyo ofrecido a los proyectos supranacionales (Bellucci, Sanders y Serricchio, 2012: 72). Aquí podemos distinguir entre el *individualismo egocéntrico*, basado en el saldo positivo de la situación del individuo en el mercado del capital, y el *utilitarismo sociotrópico*, entendido como las ganancias que la apertura de fronteras proporcionaría a un estado en cuestión dentro el mercado común de la UE. Este modelo de *racionalidad instrumental* ha sido positivamente testado correlacionando la percepción de los beneficios tanto personales como colectivos y la vinculación explícita con el proyecto europeo (Eichenberg y Dalton, 1993).

ANÁLISIS

La base de datos utilizada en el análisis procede de la segunda oleada del proyecto europeo IntUne (2009)³. Entre las élites se incluyen las políticas (diputados a Cortes), las de medios de comunicación y las sindicales. En el caso de la opinión pública, la encuesta se llevó a cabo en una muestra representativa de 1.000 entrevistados en cada país. El estudio completo incorpora el conjunto de los países participantes en el proyecto divididos en tres áreas geopolíticas: Europa Occidental (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido), Europa del Sur⁴ (España, Grecia, Italia, Portugal) y nuevos países miembros del Centro-Este de Europa (Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Lituania, Polonia y República Checa). Sin embargo, aquí nos centramos solo en los datos para España y Portugal, comparándolos con el bloque de los países del sur de Europa y Europa en general.

El análisis descriptivo en la primera parte se concreta en las variables relacionadas con lo relativo a la identificación con Europa. De acuerdo con nuestro marco teórico, distinguimos al efecto entre una dimensión afectiva de la identidad europea (vinculación al país/Europa —*attachment*—) y su aspecto cognitivo, que a través de la clásica “*Linz question*” sobre autoidentificación (“Se siente usted...?”) nos permite analizar el grado de identificación con Europa en su relación con la identidad nacional. En ambos casos presentamos los resultados diferenciando entre tipos de élites y opinión pública, al tiempo que mostrando las potenciales divergencias entre España y Portugal y también con respecto al sur de Europa y Europa en su conjunto.

La segunda parte del análisis examina los factores explicativos de la identificación con Europa. Para ello se presentan sendas regresiones logísticas para el caso de las élites y la opinión pública donde se testa el potencial explicativo de las distintas variables agrupadas en los modelos teóricos expuestos en el anterior apartado.

Identificación afectiva: vinculación a Europa

Comenzamos nuestro análisis explorando la dimensión afectiva de la identificación, examinando los niveles de vinculación a Europa (gráfico 1). Estos resultan muy altos para todas las élites, siendo manifiestamente mayor para las élites ibéricas que para la opinión pública, donde se observan las mayores diferencias si comparamos con otros bloques de países. Los porcentajes para élites en España y Portugal se sitúan por encima del 90% en

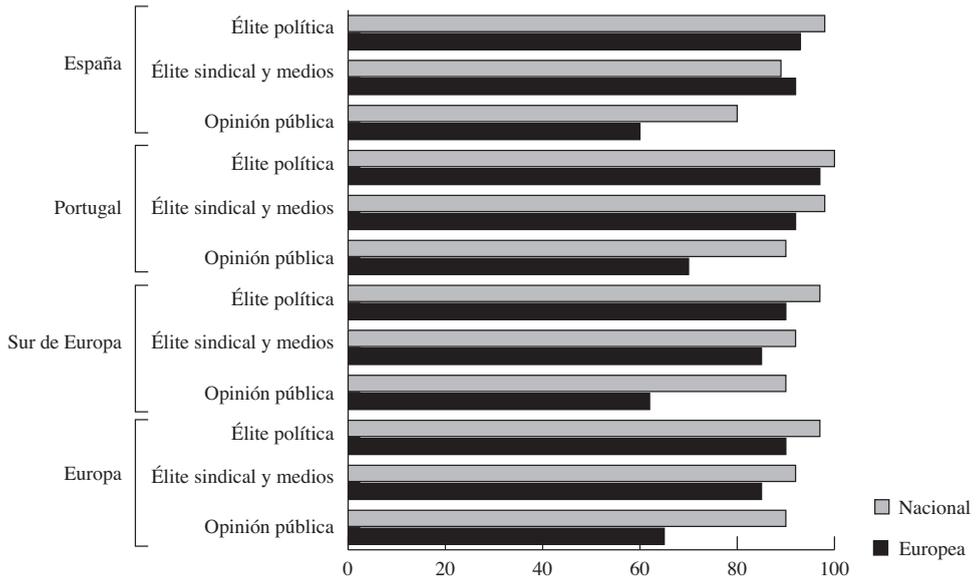
3. Hay que señalar que las dos oleadas del proyecto se llevaron a cabo en 2007 y 2009. Desafortunadamente —y aunque recientemente se ha recuperado la iniciativa de volver a aplicar el cuestionario original—, no contamos con evidencias para el periodo posterior al año 2009, marcado por el advenimiento de la crisis de la eurozona y la resultante pérdida de confianza y apoyo frente a las instituciones europeas. No obstante, dada la estabilidad de los procesos de identificación, consideramos que el presente análisis y sus conclusiones siguen vigente en el contexto actual.

4. Los datos ofrecidos en las tablas para el bloque Europa del Sur, incluyen a España y Portugal, junto a Italia y Grecia.

todos los casos, mientras que la opinión pública apenas roza el 60% en España y se sitúa en torno al 70% en Portugal.

GRÁFICO 1.

IDENTIDAD EUROPEA - AFECTIVA (2009) (%)



Datos: *IntUne Project Survey*, 2009. Pregunta: "La gente siente diferentes grados de afinidad con su país o con Europa. ¿Se siente usted muy unido, bastante unido, no muy unido, o nada unido con...?". Porcentaje de muy y bastante unido. Elaboración propia.

Pese a la notoria homogeneidad entre las élites europeas a la hora de mostrar un sentimiento de vinculación afectiva a Europa, sí que se observan ciertas diferencias subrayables entre los distintos tipos de mandatarios, siendo siempre las élites políticas las que presentan una mayor vinculación a Europa, seguidas a cierta distancia por las de medios de comunicación y las élites sindicales. Este dato puede reflejar la postura frecuentemente crítica de muchas formaciones sindicales hacia el proceso de integración europea. En este último sentido, las diferencias son más acusadas en el sur de Europa y en el caso de Europa en su conjunto, que en los dos países en cuestión.

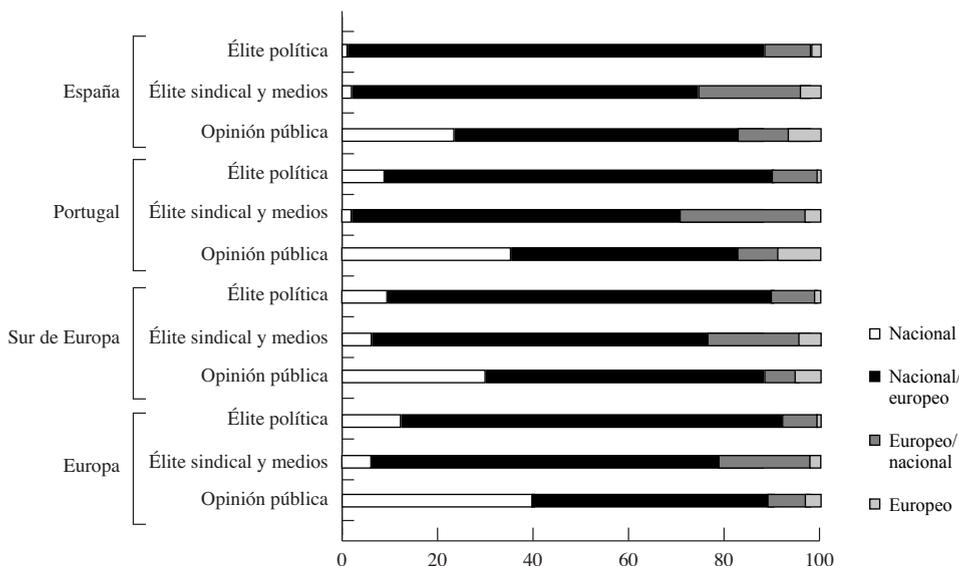
En cuanto a la opinión pública en la península ibérica, resulta evidente que la ciudadanía se muestra claramente vinculada a su espacio geográfico más inmediato (el nacional) como ámbito de preferencia sobre el europeo. La opinión pública portuguesa exhibe un sentimiento de vinculación a Europa algo más fuerte (diez puntos de diferencia) que la opinión pública española; esta última, sorprendentemente, por debajo de la media europea. Esta diferencia hace que la brecha entre el parecer de las élites y el de la ciudadanía sea menor en el caso portugués que en el español.

Identificación cognitiva: grado de europeización de las identidades

La identidad en su aspecto cognitivo se refiere al grado de la penetración de la identificación con Europa en las identidades nacionales (gráfico 2). En este sentido, un destacado 83,3% de los encuestados entre la élite política en España y un 80,6% en Portugal afirma compaginar su percepción como nacional con la del europeo (siendo nacional la primera de ellas en el orden de preferencia). Entre los otros tipos de élite la opción de nacional y europeo igualmente prevalece, pero con unos porcentajes un tanto más bajos. Destaca el relativamente alto porcentaje de identificación exclusivamente nacional entre la élite política portuguesa (menos de 10%). Resulta, por último, reseñable que son las élites ibéricas de medios de comunicación y sindicales las que concentran los mayores porcentajes de identificación europea y nacional y, hasta en ocasiones, de sentimiento exclusivamente europeísta.

En cuanto a la opinión pública, algo más la mitad de los españoles adopta la combinación de una identificación nacional más europea y otro 10% la de europeo y nacional, mientras que casi una cuarta parte indica considerarse exclusivamente nacional. En Portugal, la suma de nacional y europeo es unos 10 puntos más baja que en España, mientras que la identidad nacional exclusiva es 10 puntos más alta (34,2%). Sin embargo, en el resto del continente esta última opción recibe un apoyo incluso más alto, con un 40% entre la ciudadanía indicando una identificación exclusivamente nacional.

GRÁFICO 2.
IDENTIDAD EUROPEA – COGNITIVA (2009)



Datos: *IntUne Project Survey*, 2009. Pregunta: “¿Se ve Vd. a si mismo como...?”. Porcentajes. Elaboración propia.

Todo ello demuestra un mayor grado de integración y convivencia de las identidades nacionales con la europea entre las élites políticas que en la población en su conjunto, que si bien también opta por lo general, y de manera prioritaria, por la doble identificación nacional y europea —en este orden—, se muestra al tiempo más claramente identificada como exclusivamente nacional que las élites europeas.

De manera muy notoria, la exclusiva identificación con Europa aparece muy minoritaria tanto entre las élites como en el caso de la ciudadanía, siendo, sin embargo, siempre algo mayor entre la población. Destaca casi un 7% de los encuestados españoles que indican sentirse exclusivamente europeos, y casi un 10% entre los portugueses, uno de los porcentajes más altos entre todos los países de nuestro estudio. Sin embargo, estos pequeños porcentajes de ciudadanos que afirman sentirse tan solo europeos dan muestra de la debilidad, por no decir ausencia, de la idea de una identidad europea en su sentido fuerte, por encima de las particularidades nacionales.

Identidad europea: factores explicativos en España y Portugal

Por último, nuestro objetivo es dar cuenta de los factores explicativos de las diferencias individuales —tanto en el caso de las élites, como los ciudadanos—, comparando la adecuación de los modelos propuestos para ambos países. La identidad europea, considerada como variable dependiente, ha sido medida a través de la pregunta sobre la vinculación a Europa (*attachment to Europe*) —esto es, el componente afectivo de la identificación con Europa⁵—, siguiendo el argumento de otros estudios que han demostrado que esta variable constituye una satisfactoria medida de la compleja cuestión de identificación (Sinnott, 2006).

Como ya se ha justificado teóricamente, los modelos propuestos reflejan las principales líneas argumentativas de los estudios existentes sobre la identificación europea relacionados con la movilización cognitiva, el grado de confianza institucional, los beneficios percibidos y la (in)compatibilidad identitaria.

En primer lugar, se han considerado los que podríamos considerar referentes sociodemográficos (sexo, edad, ocupación para la opinión pública y tipo de élite en el caso del modelo para las élites) como variables habituales de control. Como se recoge en las tablas 1 y 2 del anexo, el sexo, la ocupación y el tipo de élite han sido recodificadas como variables dicotómicas, siendo las categorías de referencia mujer, trabajador manual y élite política.

El modelo 1 refleja los factores de socialización, directamente relacionados con la propuesta de Inglehart (1970) y su concepto de movilización cognitiva. Debido a algunas diferencias en las variables disponibles para élites y opinión pública, nos hemos visto

5. Debido a la alta homogeneidad de las élites en cuanto a su vinculación a Europa para las élites se lleva a cabo el análisis sobre la respuesta de “muy unido” con Europa, frente a todas las demás opciones, mientras que para la opinión pública la variable dependiente dicotómica es la suma de “unido” como “muy unido” frente a los que se sienten “no muy unidos” o “nada unidos” con Europa.

obligados a operacionalizar esta dimensión de manera diferente para cada grupo. Por una parte, este modelo en el caso de las élites incluye el nivel de instrucción (entendido como el grado educativo más alto alcanzado), el contacto con actores e instituciones de la UE y el consumo de medios de comunicación de otros países. En el caso de la opinión pública, esta dimensión se articula igualmente a través de nivel más alto de la educación alcanzado (variable que comparte con el modelo para élites), pero ahora junto con la experiencia de haber viajado fuera de su propio país y el interés por la política. En ambos casos, en esta dimensión esperamos encontrar una relación positiva con la identificación con Europa, según el modelo teórico de movilización cognitiva (H3).

Las variables de confianza institucional incluyen indicadores de confianza contruidos de variables que miden confianza hacia las distintas instituciones de la UE (la Comisión, el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo). En este caso, las expectativas son igualmente de encontrar una relación positiva con la identificación con Europa.

El modelo referido a los beneficios percibidos es de uso exclusivo para la regresión de la opinión pública, puesto que las variables utilizadas no aparecen en la encuesta realizada a las élites. Como ya se señaló a la hora de presentar los modelos teóricos, se intenta testar si las consideraciones que los ciudadanos tienen acerca de los beneficios percibidos tanto a nivel individual como colectivo (esto es, hacia el conjunto del país al que pertenecen) se correlacionan positivamente con una mayor vinculación afectiva a la Unión Europea.

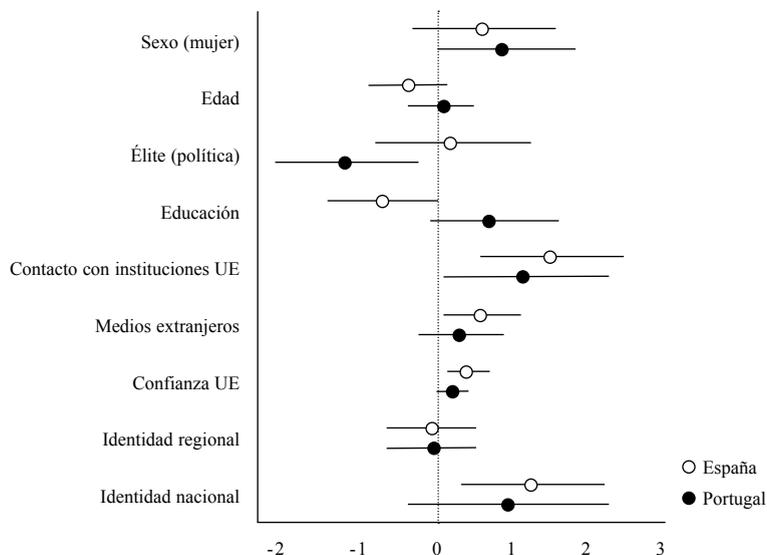
Por último, el modelo identitario incorpora la influencia de las identidades subeuropeas (nacionales y regionales) sobre la propia europea. Aquí verificamos la asunción de las compatibilidades de la identidad europea con otros tipos de identificación y podemos observar si las identidades regional y nacional refuerzan la identificación con Europa (H2).

En el caso del modelo de la identificación europea de las élites, cuyos resultados se recogen en el gráfico 3, ninguna de las variables de control (sociodemográficas) aparece significativa en España, pero sí en Portugal donde la mayor vinculación con Europa parece darse entre mujeres que no pertenecen a la élite política⁶.

En cuanto a los factores de socialización o de movilización cognitiva esta dimensión resulta especialmente relevante en ambos países ya que contactos con instituciones de la UE tienen un claro efecto positivo sobre la identificación con Europa de su élite, un efecto que se mantiene incluso con la inclusión de las demás variables propuestas. Sorprende cómo esta dimensión tiene un efecto negativo en lo referido a la educación de las élites españolas, lo cual querría decir que un mayor nivel de instrucción no parece contener siempre una mayor cercanía afectiva a Europa. Además, para el caso español está positivamente correlacionado con mayor sentimiento de apego a Europa el consumo de medios informativos extranjeros por parte de las élites.

6. Aquí interpretamos los efectos marginales medios (cuyos valores se recogen en las tablas del anexo), en vez de los *odds ratios* como es habitual, con el ánimo de poder comparar entre los distintos modelos, no tan solo la dirección del efecto (positivo / negativo), sino también su magnitud. Asimismo, cabe destacar que hemos comprobado la fiabilidad de los resultados de regresión logística representados aquí mediante una serie de regresiones de modelo de probabilidad lineal (LPM).

GRÁFICO 3.
REGRESIÓN LOGÍSTICA SOBRE VINCULACIÓN A EUROPA (ÉLITES, 2009)



Datos: *IntUne Project Survey*, 2009. Nota: el gráfico representa los coeficientes de una regresión logística sobre el grado de vinculación a Europa. Los *odds ratio* corresponden al modelo completo. La tabla con los valores de los efectos marginales medios para el modelo completo, así como para cada uno de los modelos intermedios se puede consultar en el anexo. Elaboración propia.

En cuanto a la confianza institucional, “confiar en las instituciones de la UE” solo es significativo en el caso de la identificación europea de la élite española, permaneciendo como un factor neutral para el caso luso, lo que tal vez podría estar indicando el mayor grado de homogeneidad en la confianza institucional y apoyo a la Unión Europea entre la élite española frente a los mayores disensos partidistas en el caso de Portugal.

Observamos, por último, cómo con la inclusión de las variables identitarias nos confirma una clara compatibilidad entre las identidades nacionales y europeas. Una mayor vinculación nacional parece tener un notable efecto positivo sobre la vinculación europea. Si bien en el caso portugués no resulta estadísticamente significativo, este efecto lo es y muy notable para el caso español.

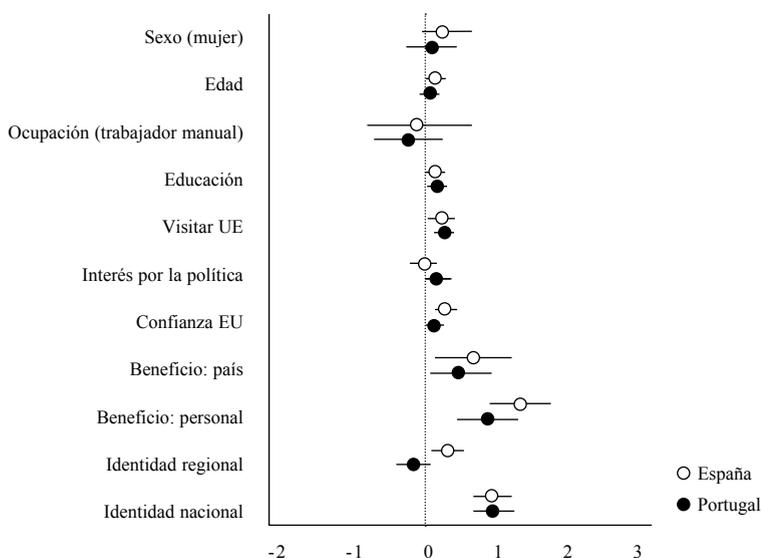
Podemos afirmar, por lo demás, que el modelo completo propuesto funciona mejor para las élites españolas, lo que se observa claramente al comparar el R^2 corregida para ambos países: mientras que para España alcanzamos la explicación de casi un tercio de la varianza, en el caso portugués nos quedamos en menos de un 20%, por lo que parece quedar claro que para mejorar la precisión deberíamos buscar otras variables explicativas para el caso concreto de Portugal.

En resumen, para la élite portuguesa la hipótesis de socialización centrada en el contacto previo con otras instituciones europeas resulta muy relevante, mientras que en España

podemos afirmar que con excepción de la correlación negativa en la variable educación, las demás variables significativas —contacto con instituciones y actores de la UE, consumo de medios extranjeros, confianza en las instituciones comunitarias, así como la identidad nacional— refuerzan su identificación europea.

En el caso de la opinión pública el modelo explicativo propuesto refleja las mismas dimensiones que hemos analizado para el caso de las élites con la salvedad a la hora de operacionalizar la dimensión de movilización cognitiva como ya se ha aclarado arriba y la inclusión de un nuevo submodelo en la regresión referida a la racionalidad instrumental (gráfico 4).

GRÁFICO 4.
REGRESIÓN LOGÍSTICA SOBRE VINCULACIÓN A EUROPA (OPINIÓN PÚBLICA, 2009)



Datos: *IntUne Project Survey*, 2009. Nota: el gráfico representa los coeficientes de una regresión logística sobre el grado de vinculación a Europa. Los *odds ratio* corresponden al modelo completo. La tabla con los valores de los efectos marginales medios para el modelo completo, así como para cada uno de los modelos intermedios se puede consultar en el anexo. Elaboración propia.

Los resultados no difieren por lo general de los de las élites, si bien debido a la distinta naturaleza del grupo a analizar (la población en su conjunto tiene unos niveles de heterogeneidad mucho mayores que el grupo de élites) y un tamaño más amplio de la muestra, obtenemos un número mayor de indicadores significativos y el modelo en su conjunto resulta algo más apropiado al considerar el porcentaje de la varianza explicado.

La única variable sociodemográfica de control que resulta algo significativa es la edad para el caso español, donde las cohortes de edad más avanzadas parecen tener una mayor predisposición afectiva hacia Europa.

Al igual que en el caso de las élites, la dimensión de movilización cognitiva tiene un impacto positivo, sobre todo en Portugal. Las tres variables incluidas en esta dimensión

aparecen significativas para explicar la identificación con Europa entre ciudadanos portugueses, y solo una de ellas se relaciona positivamente para España. Así, el hecho de haber visitado otro país de la UE en los últimos doce meses tiene el efecto más claro sobre la identificación con Europa, tanto en Portugal como en España. En el caso de la educación y el interés por la política, este efecto también es positivo aunque menos apreciable, y solo para Portugal.

En cuanto a la dimensión de confianza institucional, y al igual que con las élites, la confianza en las instituciones de la UE deviene como un factor relevante para explicar la identificación europea de la ciudadanía española y no tanto la portuguesa.

El modelo de racionalidad instrumental incluido en exclusiva para la opinión pública es, sin duda, el más potente para explicar la mayor afinidad identitaria con Europa. Los coeficientes tanto para la variable de beneficios personales como para la de beneficios colectivos y compartidos del país son significativos y de orientación positiva en ambos estados ibéricos. La fortaleza de la relación es mayor en España y es más explícita en lo referido al denominado “individualismo egocéntrico”, esto es: los que perciben beneficios recibidos personalmente como ciudadano de la UE tienden a sentir mayor apego a Europa.

Por último, la dimensión identitaria nos aporta argumentos muy evidentes a favor de la asunción teórica acerca de la compatibilidad de diferentes tipos de identidad en España y Portugal. En el caso español, tanto la identidad regional como especialmente la nacional se muestran compatibles y refuerzan la identidad europea entre los ciudadanos. En el caso portugués, la identidad regional no juega ningún papel relevante, pero la nacional sí que potencia la europea al igual que en España, reflejando claramente la distinta arquitectura del sistema político de cada país.

En general, el modelo propuesto resulta bastante apropiado para explicar la identificación europea de la ciudadanía española y portuguesa, aunque al igual que en el caso de las élites la varianza explicada resulta mayor para el caso español (31% frente a un 21% del caso portugués).

CONCLUSIONES

El análisis anterior nos ha mostrado un importante número de evidencias empíricas en torno a la naturaleza de la identidad europea entre las élites y la opinión pública española y portuguesa. Como ya es conocido por los datos del Eurobarómetro y otras encuestas de opinión, Portugal y España se encuentran dentro del grupo de países que podemos considerar más europeístas y con una percepción más positiva de los efectos repercutidos desde la incorporación a la Unión como países miembros de pleno derecho desde principios de 1986. La pregunta acerca de la naturaleza de esta relación nos ha llevado a analizar una serie de variables en torno a la identidad europea de las élites y la opinión pública. Hemos podido constatar cómo persiste una notable diferencia entre ambos tipos de actores en la proyección hacia Europa, siendo la población notablemente más euroescéptica que las élites

en su conjunto, algo que no solo se plantea en el escenario ibérico sino que resulta extrapolable al conjunto de los países del sur de Europa y del continente en su conjunto, confirmando nuestra primera hipótesis. En cuanto al grado de europeización cognitiva de unos y otros, y pese a la demostrada compatibilidad entre ambos tipos de “lealtades” (la nacional y la europea), sigue existiendo un mayor predominio de la primera, sobre todo entre los ciudadanos y con más claridad en Portugal, aunque la opción más aceptada es la de vincular ambas priorizando la primera, es decir, sentirse nacionales y europeos en este orden.

Por su parte, el análisis explicativo del apego a Europa como *proxy* de identidad europea nos ha mostrado, para el caso de las élites en su conjunto, que los factores demográficos no resultan significativos a la hora de explicar su identificación europea. La identidad nacional y la confianza hacia las instituciones de la Unión están correlacionadas positivamente en el caso español. Mientras que la identidad nacional en el caso de élites portuguesas parece tener un impacto positivo, aunque no llega a tener significación estadística. Sin duda, el contacto previo con instituciones de la UE resulta ser el factor que tiene mayor impacto positivo en la identificación europea de las élites de ambos países.

Para la opinión pública, todas las variables de la dimensión de movilización cognitiva resultan significativas en el caso de la opinión pública portuguesa, aunque no tanto de la española (solo haber visitado otro país de la UE). La variable de confianza institucional en la UE se correlaciona con identidad europea de manera positiva en ambos países, al igual que, con un efecto más pronunciado, la dimensión instrumental basada en los beneficios percibidos. Finalmente, se confirma la compatibilidad de identidades nacional y europea para la población de ambos países, e incluso regionales también para el caso hispano.

De esta manera, y en lo referido a nuestra segunda hipótesis, resulta confirmada, en cuanto que se ha podido demostrar que la identidad nacional y europea son claramente complementarias y que, por tanto, una mayor vinculación al país de origen refuerza a la postre una mayor vinculación a la Europa tanto entre la opinión pública, como las élites de España y Portugal. Nuestra tercera hipótesis, sobre los efectos de la movilización cognitiva se verifica en cuanto son los contactos transnacionales los que parecen favorecer identificación con Europa tanto entre las élites como entre la opinión pública. Aunque en el caso de esta última, el peso de consideraciones utilitaristas es mucho mayor.

Creemos, en suma, haber contribuido al conocimiento de la identidad europea entre los españoles y portugueses (tanto élites como ciudadanos de a pie), así como acerca de algunos de los factores que pueden ayudarnos a explicar la misma. Resulta, no obstante, poco probable poder cerrar la investigación en torno a un tema que, por su propia naturaleza, es complejo, multidimensional y ciertamente difícil de medir. La incidencia de la crisis en las percepciones de élites y opinión pública en los últimos cinco años requerirán, sin duda, un renovado acercamiento al tema, por lo que resulta ineludible que estudios posteriores, que puedan disponer de bases de datos más actualizadas, ratifiquen, en su caso, las tendencias aquí descritas.

Referencias

- Álvarez-Miranda, Berta. 1994. "Integración europea y sistemas de partido en el sur de Europa: despolarización y convergencia", *Revista de Estudios Políticos*, 85: 143-167.
- Anderson, Benedict. 2006. *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. New York: Verso.
- Anderson, Christopher J. 1998. "When in doubt, use proxies: Attitudes toward domestic politics and support for European integration", *Comparative Political Studies*, 31 (5): 569-601.
- Aspinwall, Mark. 2002. "Preferring Europe. Ideology and national preferences on European Integration", *European Union Politics*, 3: 81-111.
- Barreiro, Belén e Ignacio Sánchez Cuenca. 2001. "La europeización de la opinión pública española", en Carlos Closa (ed.), *La europeización del sistema político español*, pp. 29-51. Madrid: Istmo.
- Belluci, Paolo, David Sanders y Fabio Serricchio. 2012. "Explaining European identity", en David Sanders, Paolo Bellucci, Gabor Toka y Mariano Torcal (eds.), *The Europeanization of national politics?: Citizenship and support in a post-enlargement Union*. Oxford: Oxford University Press.
- Boomgaarden, Hajo G., Andreas R. Schuck, Matthijs Elenbaas y Claes H. de Vreese. 2011. "Mapping EU attitudes: Conceptual and empirical dimensions of Euroscepticism and EU support", *European Union Politics*, 12 (2): 241-266.
- Bruneau, Thomas C. (ed.). 1997. *Political Parties and Democracy in Portugal*. Boulder (CO): Westview Press.
- Bruter, Michael, 2005. *Citizens of Europe?: The emergence of a mass European identity*. Houndmills: Palgrave Macmillan.
- Carey, Sean. 2002. "Undivided Loyalties: Is national identity an obstacle to European integration?", *European Union Politics*, 3 (4): 387-413.
- Cerutti, Furio. 2011. "How not to (mis)understand political identity in the European Union", en Furio Cerutti, Sonia Lucarelli y Vivien Schmidt (eds.), *Debating political identity and legitimacy in the European Union*. New York: Routledge.
- Citrin, Jack y John Sides. 2004. "More than nationals: how identity choice matters in the new Europe", en Richard Herrmann, Thomas Risse y Marilyn B. Brewer (eds.), *Transnational identities: Becoming European in the EU*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Conti, Nicolò. 2010. *Which Europe do Parties Want? A View from France, Italy, Portugal and Spain*, special issue of *Perspectives on European Politics and Society*, 11 (2).
- Costa Lobo, Marina. 2003. "Portuguese Attitudes Towards EU Membership: Social and Political Perspectives", *South European Society and Politics*, 8 (1-2): 97-118.
- Costa Pinto, Antonio y Marina Costa Lobo. 2004. "Forging a Positive, but Instrumental View: Portuguese Attitudes and the EU 1986-2002", en Anna Dulphy y Christine Mangand (eds.), *Public Opinion and Europe. National identities and the European Integration Process*, 165-181, Brussels, Bern: PIE-Peter Lang.

- Costa Pinto, Antonio y Nuno S. Teixeira. 2004. "From Atlantic past to European destiny", en Wolfram Kaiser y Jürgen Elvert (eds.), *European Union Enlargement. A Comparative History*. London: Routledge.
- Da Cruz, Manuel B. 1993. "National identity in transition", en R. Herr (ed.), *The new Portugal: democracy and Europe*. Berkeley, CA: Institute of International and Asia Studies.
- Deutsch, Franziska. 2006. "Legitimacy and identity in the European Union: findings from the old member states", en Ireneusz Paweł Karolewski y Victoria Kaina (eds.), *European Identity: Theoretical perspectives and empirical insights*. Münster: Lit Verlag.
- Diez Medrano, Juan. 2003. *Framing Europe: Attitudes to European integration in Germany, Spain, and the United Kingdom*. Princeton: Princeton University Press.
- Diez Medrano, Juan y Paula Gutiérrez. 2001. "Nested identities: national and European identity in Spain", *Ethnic and Racial Studies*, 24: 753-778.
- Duchesne, Sophie y André P. Frogner. 1999. "Is There a European identity?", en Oskar Niedermayer y Richard Sinnott (eds.), *Public opinion and internationalized governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Duchesne, Sophie y André P. Frogner. 2008. "National and European identifications: A dual relationship", *Comparative European Politics*, 6: 143-168.
- Easton, David. 1975. "A re-assessment of the concept of political support", *British Journal of Political Science*, 5 (4): 435-457.
- Eichenberg, Richard y Russell Dalton. 1993. "Europeans and the European Community: The dynamics of public support for European integration", *International Organization*, 47: 507-534.
- Fernandes, Tiago. 2012. *Civil society after dictatorship: a comparison of Portugal and Spain, 1970's-1990's*. Working Paper, 384. The Helen Kellogg Institute for International Studies.
- Fligstein, Neil. 2008. *Euroclash: The EU, European identity, and the future of Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Freire, André. 2012. "European integration and party attachments: the Portuguese case as an example of new democracies", en Nuno Teixeira y António Costa Pinto (eds.), *The Europeanization of Portuguese Democracy*, 183-224. New York: Columbia University Press.
- Fuchs, Dieter. 2011a. "European identity and support for European integration", en Furio Cerutti, Sonia Lucarelli y Vivien Schmidt (eds.), *Debating political identity and legitimacy in the European Union*. New York: Routledge.
- Fuchs, Dieter. 2011b. "Cultural diversity, European identity and legitimacy of the EU: A theoretical framework", en Dieter Fuchs y Hans-Dieter Klingemann (eds.), *Cultural diversity, European identity and the legitimacy of the EU*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- García Faroldi, Livia. 2008. *Construyendo Europa. Las redes sociales en la difusión de actitudes e identificación hacia la Unión Europea*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

- Gunther, Richard, Nikiforos Diamandouros y Dimitri A. Sotiropoulos (eds.). 2006. *Democracy and the State in the New Southern Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Herrmann, Richard y Marilyn B. Brewer. 2004. "Identities and institutions: becoming European in the EU", en Richard Herrmann, Thomas Risse y Marilyn B. Brewer (eds.), *Transnational identities: Becoming European in the EU*. Oxford: Rowman & Littlefield.
- Hooghe, Liesbet y Gary Marks. 2005. "Calculation, community and cues: Public opinion on European integration", *European Union Politics*, 6: 419-443.
- Inglehart, Ronald. 1970. "Cognitive mobilization and European identity", *Comparative Politics*, 3: 45-70.
- Janssen, Joseph I. H., 1991. "Postmaterialism, cognitive mobilization and public support for European integration", *British Journal of Political Science*, 21 (4): 443-468.
- Jerez-Mir, Miguel, José Real-Dato y Rafael Vázquez-García. 2014. *Iberian élites and the EU: perceptions towards the European integration process in political and socio-economic élites in Portugal and Spain*. New York: Edwin Mellen Press.
- Katz, Richard y Bernhard Wessels. 1999. *The European Parliament, national parliaments, and European integration*. Oxford: Oxford University Press.
- Katzenstein, Peter J. y Jeffrey T. Checkel. 2009. "Conclusion - European identity in context", en Jeffrey T. Checkel y Peter J. Katzenstein (eds.), *European Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ladrech, Robert. 2002. "Europeanization and party politics. Towards a Framework for Analysis", *Party Politics*, 8 (4): 389-403.
- Loveless, Matthew y Robert Rohrschneider. 2008. "Public perceptions of the EU as a system of governance", *Living Reviews in European Governance*.
- Lucarelli, Sonia, Furio Cerutti y Vivien A. Schmidt (eds.). 2011. *Debating political identity and legitimacy in the European Union*. New York: Routledge.
- Linz, Juan José y Alfred Stepan. 2006. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Magone, José M. 2002. "Attitudes of southern European citizens towards European integration: before and after accession 1984-2000", en António Costa Pinto y Nuno Severiano Teixeira (eds.), *Southern Europe and the Making of the European Union*, pp. 209-236. New York: Columbia University Press.
- Magone, José. M. 2003. *The politics of Southern Europe: Integration into the European Union*. Westport: Praeger.
- Malefakis, Edward. 1995. "The Political and socioeconomic contours of Southern European history", en Richard Gunther, Nikiforos Diamandouros y Dimitri. A Sotiropoulos (eds.), *The politics of democratic consolidation*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Martín de la Guardia, Ricardo y Guillermo A. Pérez Sánchez (eds.). *Portugal e Espanha. Vinte e cinco anos na Uniao Europeia (1986-2011)*. Valladolid: Universidad de Valladolid.

- Menéndez-Alarcón, A. 2000. "Spain in the European Union. A qualitative study of national identity", *International Journal of Cultural Studies*, 3 (3): 331-350.
- Otero Felipe, Patricia. 2008. "Integración europea y opinión pública en el sur de Europa: un análisis del eurooptimismo", *Revista Española de Ciencia Política*, 19: 137-167.
- Pridham, Geoffrey. 2007. "Legitimizing European Union accession?: political élites and public opinion in Latvia", *Party Politics*, 13: 563-586.
- Risse, Thomas. 2010. *A community of Europeans? Transnational identities and public spheres*. Ithaca: Cornell University Press.
- Rodrigues Sanches, Edalina y José Santana Pereira. 2010. "Which Europe do the Portuguese Parties Want? Identity, Representation and Scope of Governance in the Portuguese Euro-manifestos (1987-2004)", *Perspectives on European Politics and Society*, 11 (2): 183-200.
- Royo, Sebastian y Paul C. Manuel. 2003. "Some Lessons from the Fifteenth Anniversary of the Accession of Portugal and Spain to the European Union", *South European Society and Politics*, 8 (1-2): 1-30.
- Ruiz Jiménez, Antonia. M. y Alfonso Egea de Haro. 2011. "Spain: Euroscepticism in a pro-European Country?", *South European Society and Politics*, 16: 105-131.
- Ruivo, Joao Pedro, Diogo Moreira, Antonio Costa Pinto y Pedro Tavares de Almeida. 2012. "Portuguese political elites and the European Union", en Nuno Severiano Teixeira y Antonio Costa Pinto (eds.), *The Europeanization of Portuguese Democracy*, 27-59. New York: Columbia University Press.
- Sánchez-Cuenca, Ignacio. 2000, "The political basis of support for European integration", *European Union Politics*, 1 (2): 147-171.
- Soares, António G. 2007. "Portugal and the European Union: The ups and downs in 20 years of membership", *Perspectives on European Politics and Society*, 8 (7): 460-475.
- Sinnott, Richard. 2006. "An evaluation of the measurement of national, subnational and supranational identity in crossnational surveys", *International Journal of Public Opinion Research*, 18: 211-223.
- Szmolka, Inmaculada 2008. "El apoyo de los españoles al proceso de integración europea: factores afectivos, utilitaristas y políticos", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 122: 55-88.
- Tajfel, Henri y John Turner. 1979. "An integrative theory of intergroup conflict", en William G. Austin y Stephen Worchel (eds.), *The social psychology of intergroup relations*. Monterey: Brooks/Cole Publishing.
- Teixeira, Nuno S. 2012. "Introduction. Portugal and European Integration", en N. Severiano Teixeira y A. Costa Pinto (eds.), *The Europeanization of Portuguese Democracy*. New York: Columbia University Press.
- Thomassen, Jacques (ed.). 2009. *The legitimacy of the European Union after enlargement*. Oxford University Press.
- Vázquez, Rafael, Santiago Delgado y Aleksandra Sojka. 2014. "Spain", en Nicolás Conti (ed.), *Party attitudes towards the EU in the member states. Parties for Europe, Parties against Europe*. Londres: Routledge.

ANEXO

TABLA 1.

RESUMEN DE LAS VARIABLES DE LAS DIMENSIONES EXPLICATIVAS (ÉLITES, 2009)

Dimensión explicativa	Variables en el análisis	Operacionalización	(N)		Media		Desviación típica	
			España	Portugal	España	Portugal	España	Portugal
Controles sociodemográficos	Sexo	0=hombre; 1=mujer	146	118	.23	.31	.42	.47
	Edad	1=<34; 2=35-44; 3=45-54; 4=55-64; 5=65>	146	118	3.21	2.98	.8	1.14
	Tipo de élite	0=medios y sindicales; 1=política	146	118	.54	.57	.50	.50
Movilización cognitiva	Educación	1=ninguna; 8=doctorado	146	118	6.83	6.89	.76	.57
	Contacto con instituciones de la UE	Contacto con las instituciones de la UE en los últimos 12 meses 0=no; 1=si	146	118	.68	.79	.46	.41
	Medios extranjeros	1=nunca; 4=todos los días	146	118	2.91	3.44	.98	.84
Confianza institucional	Confianza Instituciones UE	1= ninguna; 11= total confianza	146	118	7.00	6.76	1.87	1.91
Identidad	Identidad regional	Sentimiento de vinculación a la región (1=nada, 4=mucho)	146	118	3.42	3.59	.80	.77
	Identidad nacional	Sentimiento de vinculación al país (1=nada, 4=mucho)	146	118	3.62	3.90	.63	.33

TABLA 2.

RESUMEN DE LAS VARIABLES DE LAS DIMENSIONES EXPLICATIVAS (OPINIÓN PÚBLICA, 2009)

Dimensión explicativa	Variables en el análisis	Operacionalización	(N)		Media		Desviación típica	
			España	Portugal	España	Portugal	España	Portugal
Demográfica	Sexo	0=hombre; 1=mujer	868	871	.47	.53	.50	.50
	Edad	1=18-24; 2=25-34; 3=35-44; 4=45-54; 5=55-64; 6=65+	868	871	4.76	4.78	1.41	1.50
	Ocupación	0=Empleado, autónomo, sin trabajo remunerado 1=Trabajador manual	868	871	.06	.16	.24	.36
Movilización cognitiva	Educación	1=ninguna; 6=universidad	868	871	4.13	3.97	1.60	1.57
	Visitar otro país UE	¿Cuántas veces en el último año ha visitado otro país de la UE? 1=ninguna; 6= 5 o más veces	868	871	1.67	1.96	1.20	1.43
	Interés en la política	(1=nada; 4=mucho)	868	871	2.49	2.58	.99	1.02
Confianza institucional	Confianza Instituciones UE	(1= ninguna; 11= total confianza)	868	871	6.12	5.94	2.25	2.40
Beneficios	Beneficio país	0=No; 1=Si	868	871	.81	.78	.39	.41
	Beneficio personal	0=No; 1=Si	868	871	.65	.57	.48	.50
Identidad	Identidad regional	Sentimiento de vinculación a la región (1=nada, 4=mucho)	868	871	3.01	3.26	.88	.81
	Identidad nacional	Sentimiento de vinculación al país (1=nada, 4=mucho)	868	871	3.16	3.46	.84	.74

TABLA 3.
REGRESIÓN LOGÍSTICA SOBRE VINCULACIÓN A EUROPA (ÉLITES, 2009)

Variables independientes	Modelo 0 (Socio-demográfico)		Modelo 1 (Movilización cognitiva)		Modelo 2 (Confianza)		Modelo 3 (Identidad)	
	Portugal	España	Portugal	España	Portugal	España	Portugal	España
Sexo (mujer)	.246* (.095)	.196* (.098)	.213* (.093)	.194* (.092)	.190* (.094)	.151 (.086)	.194* (.093)	.116 (.079)
Edad	-.032 (.039)	-.034 (.047)	.010 (.039)	-.057 (.044)	.019 (.039)	-.057 (.040)	.016 (.039)	-.047 (.037)
Tipo de élite (política)	-.144 (.090)	.028 (.083)	-.183* (.093)	.139 (.081)	-.213* (.092)	.076 (.080)	-.221* (.093)	.046 (.082)
Educación			.191* (.086)	-.072 (.053)	.184* (.084)	-.104* (.051)	.157 (.085)	-.103* (.050)
Contacto instituciones UE			.216* (.103)	.283*** (.080)	.221* (.100)	.268*** (.077)	.243* (.100)	.265*** (.075)
Medios extranjeros			.066 (.055)	.103* (.040)	.069 (.055)	.103** (.038)	.080 (.055)	.112** (.037)
Confianza instituciones UE					.038 (.023)	.093*** (.019)	.040 (.023)	.080*** (.019)
Identidad regional							.009 (.059)	.006 (.050)
Identidad nacional							.209 (.128)	.223** (.064)
LR chi2	10.66*	5.01	23.54***	25.59**	26.21***	44.82***	28.82***	57.51***
Pseudo R2	0.07	0.03	0.14	0.13	0.16	0.22	0.18	0.29
N	118	146	118	146	118	146	118	146

Fuente: *IntUne Project Survey*, 2009. Elaboración propia. Nota: la tabla representa los efectos marginales medios de una serie de regresiones logísticas sobre vinculación a Europa (categoría de referencia – muy unido), error estándar entre paréntesis. * p<.05; **p<.01; ***p<.001.

TABLA 4.
REGRESIÓN LOGÍSTICA SOBRE VINCULACIÓN A EUROPA (OPINIÓN PÚBLICA, 2009)

Variables independientes	Modelo 0 (demográfico)		Modelo 1 (movilización cognitiva)		Modelo 2 (confianza)		Modelo 3 (beneficios)		Modelo 4 (identidad)	
	Portugal	España	Portugal	España	Portugal	España	Portugal	España	Portugal	España
Sexo (mujer)	-.026 (.031)	.038 (.034)	-.002 (.030)	.071* (.033)	-.013 (.029)	.029 (.031)	.039 (.029)	-.061* (.030)	.016 (.028)	.047 (.028)
Edad	-.002 (.010)	.038** (.011)	.016 (.011)	.051*** (.012)	.018 (.011)	.034** (.011)	.020 (.011)	.031** (.011)	.013 (.010)	.027** (.010)
Ocupación (trab. manual)	-.132** (.045)	-.071 (.071)	-.049 (.043)	-.019 (.070)	-.027 (.041)	-.015 (.066)	-.040 (.041)	-.018 (.063)	-.034 (.039)	-.013 (.058)
Educación			.033** (.012)	.031** (.011)	.030** (.011)	.030** (.011)	.016 (.011)	.015 (.010)	.022* (.011)	.017 (.010)
Visitar UE			.030* (.012)	.049** (.015)	.031** (.012)	.042** (.014)	.028* (.011)	.032* (.013)	.035** (.011)	.034** (.013)
Interés por la política			.074*** (.014)	.070*** (.017)	.057*** (.014)	.047** (.016)	.040** (.014)	.018 (.016)	.030* (.014)	.001 (.015)
Confianza UE					.036*** (.006)	.075*** (.006)	.022*** (.006)	.055*** (.007)	.016** (.006)	.045*** (.006)
Beneficio país							.088* (.040)	.140** (.049)	.085* (.039)	.117* (.046)
Beneficio personal							.189*** (.038)	.270*** (.040)	.151*** (.036)	.243*** (.038)
Identidad regional									-.021 (.018)	.054** (.016)
Identidad nacional									.152*** (.019)	.151*** (.016)
LR ch2	9.44*	12.74**	68.69***	65.41***	104.22***	173.35***	155.49***	265.15***	220.45***	369.00***
Pseudo R2	0.01	0.01	0.07	0.06	0.10	0.15	0.15	0.22	0.21	0.31
N	871	868	871	868	871	868	871	868	871	868

Fuente: *InrLine Project Survey*, 2009. Elaboración propia. Nota: la tabla representa los efectos marginales medios de una serie de regresiones logísticas sobre vinculación a Europa (categoría de referencia – unido/muy unido), error estándar entre paréntesis. * p<.05; **p<.01; ***p<.001.

Presentado para evaluación: 25 de junio de 2014

Aceptado para publicación: 11 de octubre de 2014

ALEKSANDRA SOJKA, Universidad de Granada

sojka@ugr.es

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Lodz (Polonia), ha cursado los estudios de Máster en la Universidad de Utrecht (Holanda) con una beca Talentia de la Junta de Andalucía. Investigadora predoctoral FPU en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Granada. Está llevando a cabo una investigación sobre las identidades sociopolíticas en los nuevos países miembros de la UE. Ha sido investigadora visitante en el Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) y el European University Institute (EUI) de Florencia.

RAFAEL VÁZQUEZ, Universidad de Granada

rvazquez@ugr.es

Profesor contratado doctor en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada. Ha sido *Visiting Fellow* en el European Institute de la London School of Economics and Political Science (LSE) e investigador visitante en el Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES). Está especialmente interesado en el estudio de la sociedad civil y el asociacionismo cívico, así como en el análisis de las percepciones ciudadanas y de élites en torno al proceso de construcción europea.

Las relaciones de poder y la memoria colectiva desde una perspectiva espacial

Power relations and collective memory from spatial perspective

Sergio C. González García
Universidad Complutense de Madrid
sergioclaudiogonzalez@pdi.ucm.es

Resumen

Siguiendo los planteamientos teóricos de Henri Lefebvre intentaremos mostrar una nueva perspectiva para estudiar la relación existente entre espacio y memoria en un intento crítico de acercarse a lo que los memory studies han denominado “lugares de memoria”. A partir de ciertas categorías analíticas que serán puestas en relación con la memoria colectiva de los grupos sociales se buscará poner en evidencia la doble conflictividad existente, por un lado, entre la memoria hegemónica y las memorias colectivas, y por otro, por el uso, significación y creación del espacio. El objetivo será mostrar cómo ambos procesos pueden ser objeto de estudio desde la ciencia política partiendo de una perspectiva espacial.

Palabras clave: geografía política, estudios de memoria, perspectiva espacial, ciencia política.

Abstract

Following the theoretical approaches of Henri Lefebvre we try to show a new perspective to study the relationship between space and memory in a critical attempt to approach it in the “memory studies” have called “places of memory”. From certain analytical categories, which will be placed in relation to the collective memory of social groups, we will seek to highlight the existing double conflict, on the one hand, between the hegemonic memory and collective memories, and secondly, by the use, meaning and creation of space. The objective is to show how both processes can be studied from political science starting of a spatial perspective.

Keywords: political geography, memory studies, spatial perspective, political science.

En los últimos años los *memory studies* han alcanzado un nivel elevado de producción académica y de reflexión intelectual. Desde diferentes perspectivas como la historia, antropología, filosofía, historia del arte y demás, la memoria colectiva y su importancia en los grupos humanos ha sido un objeto de estudio relevante. Dentro de los mismos ha proliferado la investigación sobre lo que se denominan “lugares de memoria” —concepto vinculado al historiador francés Pierre Nora (1998). De esta manera ha avanzado la reflexión sobre lo que significa la existencia de una memoria colectiva para los grupos sociales, partiendo de las ideas de Maurice Halbwachs (1925 [2004], 1968 [2004]), y las aportaciones que han vinculado esta con sus *lieux*. Desde la importancia que ha tomado la investigación sobre la memoria y los “lugares”, nosotros queremos con esta nota de investigación proponer una perspectiva para el análisis que parta de la espacialidad social. Queremos señalar que espacio y memoria tienen una relación que va más allá de los simples monumentos y memoriales y que, además, los análisis políticos también pueden contemplar la conflictividad inherente a esta relación. Aportamos un nuevo enfoque que parte de la producción teórica de Henri Lefebvre (1972, 1974, 1976a, 1976b, 1978) y que junto a ciertas ideas de la geografía humana permite analizar el carácter político del espacio y la memoria.

La primera afirmación pretende reflejar cómo la memoria colectiva puede ser un objeto de estudio dentro de la ciencia política como elemento que está atravesado por las relaciones de poder y la correlación de fuerzas políticas en un contexto determinado. Es necesario entender que el conflicto también es parte de los análisis de la memoria colectiva, o por lo menos tiene que serlo. La construcción de los relatos hegemónicos sobre el pasado es fundamental a la hora de vertebrar un cuerpo político, una “comunidad imaginada” (Anderson, 2006), e influye directamente en la configuración del “sentido común” en términos gramscianos (Gramsci, 2013). Los hechos sociales no tienen un carácter político por sí mismos sino que tienen que ser problematizados (Errejón Galván, 2009: 3) y, por ello, es necesario entender que la configuración de un relato hegemónico —incluso oficial en determinados niveles— sobre el pasado no es algo neutral sino que está asociado a una intencionalidad. Este relato permite construir una narrativa y un discurso fundamental para la definición de una identidad, de un “nosotros”. Walter Benjamin (1940 [2008]) ya señaló el peligro de la naturalización de estos relatos oficiales que ocultaban los elementos contrarios a sus planteamientos apostando por mirar a contracorriente ese pasado para ver las resistencias y lo que quedaba oculto (Aguirre Rojas, 2002).

Por ello, el “conflicto entre memorias” está presente en la sociedad, un conflicto que puede hacerse evidente o bien simplemente mostrar que determinados colectivos articulan un relato diferenciado del hegemónico. Esa hegemonía no implica homogeneidad y por ello pueden existir lo que hemos denominado “memorias impugnadoras”, “memorias subalternas” o “memorias de resistencia” (Jelin, 2002: 5). El estudio de la memoria tiene que tener en cuenta que esta implica entonces recuperación y utilización (Todorov, 1995: 16-19), es decir, el pasado se utiliza desde el presente. La política ha recurrido a su poder de memoria para construir su propia narrativa ligada a sus intereses, ya sea para la construcción de

identidades colectivas o para sortear determinadas circunstancias políticas (Mate, 2011: 16). La utilización del pasado en el presente implica un elemento más a tener en cuenta, que la memoria supone conservar, seleccionar y construir. El pasado se construye por la selección de lo que se destaca y lo que se silencia, siguiendo a Todorov, “conservar sin elegir no es una tarea de la memoria” (1995: 16). Por ello creemos que la memoria de una sociedad supone que,

“En cualquier momento y lugar, es imposible encontrar una memoria, una visión y una interpretación únicas del pasado, compartidas por toda una sociedad. Pueden encontrarse momentos o periodos históricos en los que el consenso es mayor, en los que un ‘libreto único’ del pasado es más aceptado o aun hegemónico. Normalmente, ese libreto es lo que cuentan los vencedores de conflictos y batallas históricas. Siempre habrá otras historias, otras memorias e interpretaciones alternativas, en la resistencia” (Jelin, 2002: 5).

Estas afirmaciones queremos verlas dentro de nuestro interés por analizar como esta memoria está espacializada. La memoria se visualiza en lugares físicos y en territorios o espacios transitados habitualmente (Jelin y Langland, 2003: 1), pero también articula —y construye— los mismos. Los “lugares de memoria” de Pierre Nora (1998) muestran muy parcialmente esta espacialidad, porque si bien hacen una referencia limitada a esos espacios físicos, dejan de lado conceptualmente el aspecto espacial. Su definición vincula estos con “toda unidad significativa, de orden material o simbólico, de la que la voluntad de los hombres o el trabajo del tiempo ha hecho un elemento simbólico del patrimonio de la memoria de una comunidad cualquiera” (Aravena, 2003: 93). Con ello vemos que el autor francés se refiere más a un “lugar común”, “elemento significativo” o “marco de referencia simbólica”. La espacialidad queda diluida entre un mar de ideas, materialidades, mitos y tradiciones y por ello la utilización de la categoría “lugar” sin ningún tipo de referencia espacial ha sido bastante criticada por los geógrafos (García Álvarez, 2009; Verdier, 2010).

Por todo esto cuando hablamos de espacialidad de la memoria hacemos referencia a cómo esta aparece reflejada en el espacio o cómo existe una memoria colectiva compartida del mismo que, digamos, construye la idea común de ese “lugar” o espacio vivido. Dicha afirmación permite que nos preguntemos por la relación que existe entre el conflicto de la memoria hegemónica y las otras memorias subalternas, por un lado, y la disputa que existe por el dominio, uso y producción del espacio social, por otro. Esto nos lleva a presentar una propuesta teórica que permite analizar el conflicto de memorias dentro del proceso de la producción del espacio social desde los planteamientos teóricos de la producción del espacio de Lefebvre (1974) y con ello analizar su espacialidad.

El punto de partida proviene del reconocimiento de que la introducción de la espacialidad en los análisis sociales se ha revalorizado en las últimas décadas —tomando como punto de partida el “giro espacial” (Cresswell, 2004: 18-19; Schmid, 2008: 27; Soja, 2008: 31)— poniendo de relevancia la importancia del espacio en las ciencias sociales como

realidad a considerar (Massey, 1993: 139-141). Por ello se pueden mencionar algunos análisis que han intentado mirar desde la perspectiva espacial fenómenos que han constituido objetos de estudio tradicionales de la ciencia política. Como ejemplo de esto último podríamos destacar a Ulrich Oslender (2002, 2008, 2010) que introduce un análisis espacial al estudio de los movimientos sociales. Su intencionalidad es completar la comprensión de la movilización sociopolítica y la configuración de identidades por medio del estudio del “lugar” donde se desarrolla y desde donde parte la misma, entendiendo que sin la introducción de una perspectiva espacial en el análisis del objeto —en este caso la acción social del movimiento— no se puede entender la totalidad y la complejidad de la realidad social. Si bien esto supone una forma de introducción del contexto, de la experiencia subjetiva del espacio vivido, es cierto que el autor termina realizando una compleja unión entre Lefebvre (1974) y la “*perspectiva de lugar*” elaborada por John Agnew (1987, 2002), complejizando la relaciones entre el espacio y la acción social, y más generalmente entre estructura y agencia.

Lefebvre, teórico marxista francés, escribió el libro *La Production de l'espace* (1974). Este suponía la culminación de múltiples planteamientos sobre el espacio que había venido desarrollando en su producción teórica anterior y donde reflexionaba sobre la condición política del mismo, su vinculación a las relaciones sociales y el “derecho a la ciudad” (Lefebvre, 1972, 1974, 1976a, 1976b, 1978). Los elementos fundamentales que planteaba en esta obra pasaban por un giro ontológico y un cambio epistemológico. Desde el punto de vista ontológico suponía cambiar la idea sobre la naturaleza del espacio que había predominado hasta ese momento, especialmente desde posiciones estructuralistas, y pasar a considerarlo como algo específico y fundamental no dado a priori ni de forma preexistente ni tampoco derivación superestructural y dependiente de los procesos dados en la estructura socioeconómica (Soja, 1988: 88-90, 1996: 47, 2008: 149-176; Lefebvre, 1991: 73). Dar al espacio un papel fundamental en la realidad social, más concretamente, a la producción social del espacio social. Por otro lado, el cambio epistemológico partía de un intento de evitar el reduccionismo en los análisis que se habían centrado en el espacio mental o el espacio físico, especialmente con una fuerte crítica a la concepción del espacio euclidiano (Lefebvre, 1991: 1-3). El autor buscaba superar los enfoques cartesiano-newtonianos que compartimentalizaban el objeto y apostaba por un planteamiento epistemológico que permitiera alcanzar la unidad de análisis (Merrifield, 1993: 517-519). El espacio pasa a ser entendido en su totalidad, en todas sus dimensiones, con todas las dinámicas y relaciones que le dan sentido. El giro ontológico es fundamental porque nos permite analizarlo en sí mismo, por lo que es, y no simplemente como resultado determinado de otros procesos. Este giro va a permitir ver los procesos y relaciones de poder y conflictos derivados de su producción. Esto junto con un cambio de perspectiva epistemológica que nos lleva a analizar la totalidad del espacio entendiendo que es necesario tener en cuenta su concepción, percepción y vivencia. Esto es lo que en conjunto podemos denominar “giro lefebvriano”.

Esa idea de la unidad supondrá que el autor va a tener en cuenta tres dimensiones o momentos dentro del espacio, lo concebido, lo percibido y lo vivido. En primer lugar

estaría el espacio concebido, es decir, lo que Lefebvre (1991: 33, 38) denomina *representaciones del espacio*. Es el espacio de la planificación y la proyección, de los técnicos, urbanistas y tecnócratas que buscan una identificación de lo que se concibe con lo que se percibe y se vive (Lefebvre, 1991: 38). Una imposición del orden por medio de los códigos y signos que se proyectan en el espacio. Un orden que busca determinar y condicionar las prácticas espaciales, por lo que está cargado de intencionalidad e ideología. Esta intencionalidad supone constatar que las representaciones del espacio están atravesadas por las relaciones de poder que pretenden imponer y que se consolidan en forma de discursos e imaginarios sobre el espacio. Suponen su concepción desde una determinada lógica con el objetivo de reflejar e imponer unos valores de una forma aparentemente neutral y aséptica ocultándose tras una apariencia de objetividad científica y técnica. Las representaciones espaciales aparecen así en esta construcción teórica como unas concepciones ideales del espacio que pretenden imponer una determinada forma de verlo, experimentarlo y vivirlo desde un lenguaje supuestamente objetivo, de tal manera que lo percibido y lo vivido tienen que quedar codificados y racionalizados en función de una lógica hegemónica. El segundo momento lo formaría el espacio percibido, las *prácticas espaciales* (Lefebvre, 1991: 33), que se asientan al nivel de lo material y lo medible. Es el espacio relacionado con la producción y reproducción social y con las rutas y lugares de cada sociedad (Lefebvre, 1991: 38). Son las que permiten la apropiación del espacio haciendo que este sea analizable, observable, percibido y descifrable (Hiernaux-Nicolas, 2004: 16). Para Ulrich Oslender son “las formas en las que nosotros generamos, utilizamos y percibimos el espacio” (2010: 98). Cuando el ser humano actúa, se mueve, transita, crea y realiza actuaciones en el espacio físico está apropiándose del mismo y da a la vida cotidiana una dimensión material, por ello existe “una estrecha asociación en el espacio percibido entre la realidad cotidiana [en el uso del tiempo] y la realidad urbana [las rutas y redes que se ligan a los lugares de trabajo, de vida ‘privada’, de ocio]” (Lefebvre, 1974 [2013]: 97). Las prácticas espaciales están en constante interacción con los discursos sobre el espacio que imponen las representaciones espaciales, una relación determinante ante la imposición que ejercerían las primeras sobre la forma de conocer, experimentar, leer y moverse en el espacio. Por último aparecerían los *espacios de representación* (Lefebvre, 1991: 33), el espacio vivido vinculado a la vida cotidiana donde se generan sentidos, significados y símbolos en el devenir temporal del grupo que interactúan, condicionan y afectan a la experiencia del espacio. Forman parte de la vida social más ligada a la experiencia personal subjetiva que parte de una determinada forma de mirar la realidad social en base a códigos y símbolos compartidos. Estos espacios de representación parten de la identidad, las imágenes, los paisajes y los significados interiorizados por el grupo social que “tienen su fuente en la historia, la historia de los pueblos y de los individuos [...] se viven, se hablan, tienen núcleo o centro afectivo [...]” (Lefebvre, 1974 [2013]: 100). Son el lugar de la resistencia, se convierten en contraespacios (Oslender, 2010) desde donde se enfrentan a las representaciones espaciales por el control de un espacio del cual el grupo social comparte una misma concepción.

Después de la presentación de estos tres momentos para el análisis de la producción del espacio partiendo de un enfoque unitario del mismo que supere la compartimentalización y la preeminencia del espacio euclidiano, existen a nuestro parecer una serie de ideas fundamentales que Lefebvre expone en los capítulos siguientes de *La producción del espacio* (1974) y en otros textos. La cuestión principal que tenemos que destacar dentro de esta nueva concepción y enfoque por parte de Lefebvre es que el espacio, el proceso de su producción, no es neutral, está atravesado por las relaciones de poder y los conflictos políticos. Cuando el autor está expresando un lugar para la resistencia, donde se generan contraespacios, frente a unas representaciones que según el autor son el espacio dominante de la sociedad, está mostrando la conflictividad que existe —o puede existir— entre lo concebido y lo vivido a través de lo percibido. Desde la concepción se busca modelar el espacio intencionalmente pero manteniendo la apariencia de neutralidad mientras que la vivencia diaria e interiorizada del espacio genera —o puede generar— una resistencia a esa dominación. Por todo ello el espacio es político (Oslender, 2002: 1). El espacio puede parecer neutral y dado a priori pero esto supone que ya ha sido ocupado y representado para nosotros (Lefebvre, 1976b: 31), ya se ha creado una forma de verlo y un discurso sobre el mismo, algo que hace que este sea fuente y escenario de conflictos sociales. Por ello es lugar y objeto de conflicto y esta conflictividad es la que tenemos que tomar en consideración a la hora de realizar un análisis que busque observar las luchas por la producción, uso y dominio del espacio. Desde el punto de vista del análisis es aquí donde se debería introducir la reproducción de los conflictos de memoria entre la hegemónica y las subalternas. Como ya hemos mencionado anteriormente, avanzar hacia esta forma de entender esa conflictividad social puede ser una aportación útil dentro de las ciencias sociales y, especialmente, a los *memory studies* vinculados a esos lugares convocantes o emblemáticos.

Lefebvre (1974) expone claramente en el primer capítulo de su obra que el espacio contribuye a la configuración de la hegemonía de una clase. La idea de esta contribución remarca la ausencia de neutralidad en el espacio llegando a afirmar que “las ideologías no producen el espacio; están en él, lo son” (Lefebvre, 1974 [2013]: 253). Es un reflejo y cimienta de las relaciones de poder, refuerza la hegemonía de una clase y reproduce estas relaciones por medio de discursos del y sobre el espacio. Walter Prigge destaca que una de las capacidades de las representaciones del espacio es la de naturalizar la estructura de relaciones sociales y de poder (2008: 47), naturalización que supone la pacificación del conflicto. Un proceso de homogeneización y neutralidad que el autor va a denominar *espacio abstracto* (Lefebvre, 1991: 49) que impone normatividad a lo percibido y lo vivido, que busca un espacio homogéneo y con apariencia de transparencia —en realidad un espacio orientado a favorecer los procesos de acumulación capitalista para el autor—; aun así, también es un proceso con resistencias desde los *espacios diferenciales* donde el “habitar” se impone sobre el “hábitat” (Lefebvre, 1991: 353-400) y el valor de uso sobre el valor de cambio; el lugar de la resistencia de lo que no se ajusta a la concepción del espacio abstracto. Un lugar vinculado a la vida cotidiana como principal espacio de

socialización, explotación, contradicción y resistencia, el lugar de la contrahegemonía (Kipfer, 2008: 205).

Esta contradicción y conflicto en y del espacio va a ser fundamental en esta propuesta de investigación. La aparición de esos contraespacios derivados de los espacios de representación, es decir, del espacio vivido de la cotidianidad, va a suponer que el conflicto por el uso y la apropiación del espacio por parte de los grupos sociales va a ser una dinámica que va a espacializar la resistencia y el conflicto de memorias. Dado que la memoria forma parte del espacio —y está en el mismo— porque está inserta tanto en el espacio concebido, percibido y vivido y a su vez es reproducida por estos, los conflictos de memoria tienen una expresión espacial y las contradicciones espaciales tienen un reflejo en la configuración de las memoria colectivas.

La relación de la memoria con el espacio ya fue anunciada por Halbwachs (1968 (2004), Huici Urmeneta, 2007). Para este los recuerdos de los grupos sociales que configuraban la memoria colectiva de los mismos estaban vinculados al espacio. El grupo compartía una concepción espacio-temporal desde la que configuraba su memoria. Este espacio definía los límites identitarios del grupo posibilitando el recuerdo común (Gensburger, 2008: 22). Por ello, podemos ver esto como expresión de la espacialidad de la memoria. Las relaciones sociales en un determinado espacio vivido, en la configuración de un *espacio de representación*, que influyen en una determinada percepción del mismo, es decir, en unas *prácticas espaciales*, van creando una determinada memoria colectiva que se va entrelazando con un relato del pasado compartido. Se crea así una memoria colectiva vinculada a la vida cotidiana y la experiencia del grupo, una memoria inserta en ese espacio de representación y que influye en una forma de experimentarlo.

El espacio concebido expuesto por Lefebvre (1974), las *representaciones del espacio*, buscan crear un discurso sobre este e insertar en él un relato, la construcción de una espacialidad hegemónica donde la memoria oficial va a estar inserta. De esta manera ese espacio concebido representará un espacio sin conflicto, pacificado, donde la memoria oficial o aquellas que no sean conflictivas serán representadas y tendrán cabida en aquel. El único relato sobre el pasado que aparecerá en el espacio será el dominante, además de buscar su naturalización; un relato que influirá en el espacio vivido y percibido. Aquí aparecerá el conflicto cuando aparezcan contramemorias desde los contraespacios. En estos *espacios de representación* es donde se encuentra el espacio simbólico y donde aparecen los lugares que adquieren un significado par el grupo, lugares convocantes con los cuales se establecen unas relaciones afectivas. Estos lugares son dispositivos materiales que teniendo su propia memoria en un determinado momento son señalizados o resignificados como “lugares convocantes” (Jelin y Langland, 2003: 5) por un grupo, convirtiéndose así en dispositivos específicos donde se pretende fijar una memoria concreta.

Una vez esbozada la unión entre espacio y memoria a través de los planteamientos sobre la espacialidad social que nos han permitido evidenciar el conflicto inserto en estas dinámicas, debemos señalar un último elemento que a nuestro juicio articula bien estos planteamientos. Las llamadas “políticas de memoria”, es decir “todas aquellas iniciativas

de carácter público destinadas a difundir o consolidar una determinada interpretación de algún acontecimiento del pasado de gran relevancia para determinados grupos sociales o político para el conjunto del país” (Aguilar Fernández, 2008: 53) se mezclan con ese espacio concebido, con esas representaciones que buscan normativizar lo que debe ser el espacio, por medio de políticas de patrimonialización. Este tipo de políticas públicas buscan fijar patrimonios materiales o inmateriales en forma de discursos oficiales sobre el pasado (Del Marmol *et al.*, 2010; Godinho, 2012). En relación al espacio se intentan fijar determinados lugares como portadores de relatos sobre el pasado, que en muchas ocasiones son descargados de todo componente conflictivo o son reducidos a lugares de explotación económica-turística (Sánchez-Carretero, 2013: 38). No solo se busca la fijación en lugares físicos sino que también se patrimonializan formas de vida tradicionales de comunidades existentes. Ahora bien, la búsqueda de esta fijación material del relato del pasado también es buscada “desde abajo”, desde comunidades de memoria que no se encuentran suficientemente representadas en la memoria hegemónica o que incluso son contrarias a la misma. Los lugares simbólicos que adquieren significado dentro del espacio vivido también pueden articular demandas de señalización de “lugares de memoria sociales o desde abajo” (Viejo-Rose, 2013: 24). Por ello, aquí aparecería también la discusión sobre la pacificación inherente a todo acto de patrimonialización que se vincularía a los debates “contra-monumentalistas” (Baer, 2010: 140; Hite, 2013: 131). En todo caso, unas prácticas y otras parten de espacios diferenciados aunque interrelacionados, desde lo concebido-racionalizador o desde lo vivido-emocional. Toda investigación tendrá que tener en cuenta estos procesos para analizar la complejidad de dicha realidad social.

Nosotros creemos fundamental señalar que los planteamientos de la producción teórica de Lefebvre consiguen no solo en exponer una forma de entender el espacio con relación a un cambio ontológico y epistemológico sino que presentan una mirada que reduce la distancia entre los análisis estructuralistas y los más subjetivistas mediante una interrelación dialéctica entre estructura y agencia. Lefebvre va a superar la centralidad de la estructura en la configuración del espacio y va a introducir el sujeto por medio de la importancia del espacio vivido al nivel de la experiencia cotidiana (Lindón Villoria, 2004; Ronneberger, 2008; Schmid, 2008). En la experiencia cotidiana es donde estructura y agencia se conectan, se relacionan y se interpelan (Prigge, 2008: 53). Debido a esta superación de la dualidad con la relación entre lo concebido, vivido y percibido es posible introducir la memoria colectiva, es decir, la memoria compartida por las comunidades que se articula y reproduce en los espacios de representación, y la reproducción de la memoria hegemónica por medio de la socialización de cada individuo de la sociedad en los discursos oficiales —por medio también de las representaciones del espacio—.

Por todo lo anterior, el sentido último de esta nota de investigación ha sido el de buscar una problematización de la relación entre la perspectiva espacial y los análisis sociales. La pretensión es doble, como se ha podido ver; por un lado, señalar la importancia de la memoria colectiva en la creación de las identidades y, por extensión, la aparición de un conflicto potencial entre los discursos hegemónicos sobre el pasado y las resistencias que

se crean desde memorias no representadas y excluidas de los mismos, lo cual vincula esta tensión con el conflicto inherente a la vida social que es objeto de estudio de la ciencia política, y por otro lado, considerar que el estudio de la realidad social no está completo sin la introducción de la espacialidad y sin la introducción de las aportaciones que se han hecho desde la geografía a los estudios sociales, es decir, señalando lo acertado de los planteamientos y perspectivas que desde el “giro espacial” han considerado que el espacio importa. Un intento de introducir la importancia del lugar desde donde se articulan los discursos y de la producción del espacio social en la configuración de los mismos. Un espacio que tiene que ser entendido en la totalidad de sus dimensiones y superando su reducción a mero contenedor de los procesos sociales o producto superestructural de las relaciones socioeconómicas, por ello, la necesidad de la teoría de Henri Lefebvre, autor además que politiza y convierte al mismo en objeto de conflicto.

Todos los elementos anteriores nos han permitido mostrar en esta nota de investigación la vinculación que a nuestro juicio existe entre espacialidad y memoria partiendo de un bloque coherente y serio de planteamientos teóricos. Las potencialidades de esta epistemología son amplias dado que no solo permite analizar la problemática social del uso, dominio y producción del espacio sino también asociarlo con la configuración de los relatos del pasado que atraviesan los procesos de subjetivación política. Analizar la “espacialidad de la memoria” superando reduccionismos y la preeminencia del enfoque estructural que deja al sujeto, su vivencia y experiencia de lado. Además, esta forma de analizar la problemática de la memoria desde los planteamientos del conflicto inherente a la producción del espacio permite conectar esta con el análisis de la correlación de fuerzas y las relaciones de poder, es decir, procesos y dinámicas que entroncan con la ciencia política y sus objetos de estudio.

Referencias

- Agnew, John. 1987. *Place and politics: the geographical mediation of state and society*. Boston: Allen & Unwin.
- Agnew, John. 2002. *Place and Politics in Modern Italy*. Chicago-London: University of Chicago Press.
- Aguilar Fernández, Paloma. 2008. *Políticas de la memoria y memorias de la política*. Madrid: Alianza Editorial.
- Aguirre Rojas, Carlos Antonio. 2002. “Walter Benjamin y las lecciones de una historia vista a ‘contrapelo’”, *Secuencia (nueva época)*, 52: 181-198.
- Anderson, Benedict. 2006. *Comunidades imaginadas*. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España.
- Aravena, Andrea. 2003. “El rol de la memoria colectiva y de la memoria individual en la conversión identitaria mapuche”, *Estudios Atacameños*, 26: 89-96.

- Baer, Alejandro. 2010. "La Memoria Social. Breve guía para perplejos", en A. Sucasas, y J. A. Zamora (eds.), *Memoria-Política-Justicia. En diálogo con Reyes Mate*. Madrid: Trotta.
- Benjamin, Walter. 1940 (2008). *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*. México D.F.: Ítaca.
- Cresswell, Tim. 2004. *Place, a short introduction*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Del Marmol, Camila, Joan Frigolé et al. 2010. *Los lindes del patrimonio*. Barcelona: Icaria.
- Errejón Galván, Íñigo. 2009. "¿Qué es el análisis político? Una propuesta desde la teoría del discurso", *Revista Estudiantil Latinoamericana de Ciencias Sociales*.
- García Álvarez, Jacobo. 2009. "Lugares, paisajes y políticas de memoria: una lectura geográfica", *Boletín de la AGE*, 51: 175-202.
- Gensburger. 2008. "Lugares materiales, memoria y espacio social. El recuerdo de los campos anexos de Drancy en París", *Revista Anthropol*, 218: 21-35.
- Godinho, Paula. 2012. *Usos da memória e práticas do património*. Lisboa: Edições Colibri.
- Gramsci, Antonio. 2013. *Antología*. Madrid: Akal.
- Halbwachs, Maurice. 1925 (2004). *Los marcos sociales de la memoria*. Barcelona: Anthropol.
- Halbwachs, Maurice. 1968 (2004). *La memoria colectiva*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Hiernaux-Nicolas, Daniel. 2004. "Henri Lefebvre: del espacio absoluto al espacio diferencial", *Revista Veredas*, 8: 11-25.
- Hite, Katherine. 2013. *Política y arte de la conmemoración. Memoriales en América Latina y España*. Santiago de Chile: Mandrágora.
- Huici Urmeneta, Vicente. 2007. *Espacio, tiempo y sociedad. Variaciones sobre Durkheim, Halbwachs, Gurvitch, Foucault y Bourdieu*. Madrid: Akal.
- Jelin, Elizabeth 2002. *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI.
- Jelin, Elizabeth y Victoria Langland. 2003. *Monumentos, memoriales y marcas territoriales*. Madrid: Siglo XXI.
- Kipfer, Stefan. 2008. "How Henri Lefebvre urbanized Gramsci. Hegemony, everyday life and difference", en K. Goonewardena, S. Kipfer, R. Milgrom y C. Schmid (eds.), *Space, difference, everyday life. Reading Henri Lefebvre*. New York: Routledge.
- Lefebvre, Henri. 1972. *La vida cotidiana en el mundo moderno*. Madrid: Alianza.
- Lefebvre, Henri. 1974. *La production de l'espace*. París: Anthropol.
- Lefebvre, Henri. 1974 (2013). *La producción del espacio*. Madrid: Capitán Swing Libros.
- Lefebvre, Henri. 1976a. *Espacio y política. El derecho a la ciudad II*. Barcelona: Península.
- Lefebvre, Henri. 1976b. "Reflections on the politics of space", *Antipode*, 2(8): 30-37.
- Lefebvre, Henri. 1978. *El derecho a la ciudad*. Barcelona: Península.
- Lefebvre, Henri. 1991. *The Production of Space*. Oxford: Blackwell.

- Lindón Villoria, Alicia. 2004. "Las huellas de Lefebvre sobre la vida cotidiana", *Revista Veredas*, 8: 39-60.
- Massey, Doreen. 1993. "Politics and Space/Time", en M. Keith y S. Pile (eds.), *Place and the politics of identity*. London/New York: Routledge.
- Mate, Reyes. 2011. "Deber de memoria", en R. Escudero Alday (ed.), *Diccionario de memoria histórica*. Madrid: Los libros de Catarata.
- Merrifield, Andrew. 1993. "Place and Space: a Lefebvrian reconciliation", *Transactions of the Institute of British Geographers. New Series*, 18: 516-531.
- Nora, Pierre. 1998. "La aventura de Les lieux de mémoire", *Ayer*, nº 32: 18-34.
- Oslender, Ulrich. 2002. "Espacio, lugar y movimientos sociales: hacia una 'espacialidad de la resistencia'", *Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, vol. VI, nº 115.
- Oslender, Ulrich. 2008. "'Geografías del terror': un marco de análisis para el estudio del terror", *Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, vol. XII, nº 270.
- Oslender, Ulrich. 2010. "La búsqueda de un contra-espacio: ¿hacia territorialidades alternativas o cooptación por el poder dominante?", *Geopolítica(s)*, 1: 95-114.
- Prigge, Walter. 2008. "Reading the urban revolution. Space and representation.", en K. Goonewardena, S. Kipfer, R. Milgrom y C. Schmid (eds.), *Space, difference, everyday life. Reading Henri Lefebvre*. New York: Routledge.
- Ronneberger, Klaus. 2008. "Henri Lefebvre and urban everyday life. In search of the possible", en K. Goonewardena, S. Kipfer, R. Milgrom y C. Schmid (eds.), *Space, difference, everyday life. Reading Henri Lefebvre*. New York: Routledge.
- Sánchez-Carretero, Cristina. 2013. "Patrimonialización de espacios represivos: en torno a la gestión de los patrimonios incómodos en España", en C. Ortiz (ed.), *Lugares de represión, paisajes de la memoria. La cárcel de Carabanchel*. Madrid: Los libros de Catarata.
- Schmid, Christian. 2008. "Henri's Lefebvre theory of the production of space. Towards a three-dimensional dialectic", en K. Goonewardena, S. Kipfer, R. Milgrom y C. Schmid, (eds.), *Space, difference, everyday life. Reading Henri Lefebvre*. New York: Routledge.
- Soja, Edward W. 1988. *Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social theory*. London: Verso.
- Soja, Edward W. 1996. *Thirdspace. Journeys to Los Angeles and other real and imagined places*. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers Inc.
- Soja, Edward W. 2008. *Postmetrópolis: Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Todorov, Tzvetan. 1995. *Los abusos de la memoria*. Barcelona: Paidós.
- Verdier, Nicolas. 2010. "La memoria de los lugares: entre espacios de la historia y territorios de la geografía", en N. Ortega Cantero, J. García Álvarez y M. Ruiz-Gómez (eds.), *Lenguajes y visiones del paisaje y del territorio*.

Viejo-Rose, Dacia. 2013. “Patrimonio cultural armada: la violencia cultural y simbólica”, en C. Ortiz (ed.) *Lugares de represión, paisajes de la memoria. La cárcel de Carabanchel*. Madrid: Los libros de la Catarata.

Presentado para evaluación: 2 de junio de 2014

Aceptado para publicación: 3 de octubre de 2014

SERGIO C. GONZÁLEZ GARCÍA, Universidad Complutense de Madrid
sergioclaudiogonzalez@pdi.ucm.es

Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Durante el último curso fue becario de colaboración en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración II de esa misma facultad. Posteriormente, realizó un máster oficial en Análisis Político por la misma Universidad con un trabajo final sobre los discursos sobre violencia política de los partidos de izquierda durante la transición española. En la actualidad está cursando el doctorado en Ciencia Política siendo becario predoctoral UCM en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración III (Teoría Política y Geografía Humana) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid realizando una tesis doctoral sobre la espacialidad de la memoria y sus lugares en España. Sus líneas de investigación principales están insertas en la disciplina de la Geografía Humana y los “memory studies”. Ha participado en varios congresos y encuentros en España y Portugal y ha realizado reseñas y publicaciones en diversas revistas.

Manuel Alcántara Sáez

The Success of the Left in Latin America. Untainted Parties, Market Reforms and Voting Behavior

Rosario Queirolo. Notre Dame: The University of Notre Dame Press, 2013, 205 pp.

Hace justo tres lustros la irrupción de Chávez supuso un parteaguas en la política latinoamericana. El consiguiente efecto dominó que tuvo sobre países como Ecuador y Bolivia se vio acompañado por cambios significativos de naturaleza endógena que además culminaban ciclos políticos propios en Brasil, Uruguay y El Salvador, donde la izquierda llevaba luchando por la presidencia con opciones claras al menos desde hacía una década. Paralelamente, no debe dejarse de lado las transformaciones acaecidas en el peronismo gobernante en Argentina a partir de 2003 que alejaron al gobierno del sesgo derechista de la experiencia bajo Menem y el regreso de Ortega en Nicaragua. El giro político dado en todos estos países, de los que Chile configura un caso especial, con elementos no siempre iguales ha producido en los últimos años un número de estudios interesantes entre los que se destacan los de Weyland, Madrid y Hunter (2010), Levistky y Roberts (2011), Philip y Panizza (2011) y Dabène (2012). En la mayoría de los casos se trata de obras de carácter colectivo y que, como común denominador, coinciden en poner de relieve el carácter heterogéneo del cambio producido en la región hacia gobiernos salidos de las urnas de carácter popular y con discurso antineoliberal.

Rosario Queirolo es profesora de Ciencia Política en la Universidad Católica de Uruguay e hizo su doctorado en la Universidad de Pittsburg producto del cual es el presente libro. A diferencia de los textos recién citados, la preocupación principal de la autora es responder a tres cuestiones muy precisas y que se refieren a si el actual éxito de la izquierda es algo nuevo y general en la región, a si es verdad que las reformas económicas pro mercado de la década anterior a la llegada al poder de la izquierda eran la causa de la misma y, finalmente, a elucidar los determinantes del voto de los latinoamericanos a favor

de partidos de izquierda. Para ello, el libro se estructura en seis capítulos que abordan los ciclos ideológicos tras la posguerra, las condiciones económicas y políticas que benefician a los partidos de izquierda, las explicaciones micro del voto a la izquierda, una evidencia de las hipótesis planteadas aplicadas a Brasil, México y Uruguay, las razones del voto a la izquierda amparadas en los resultados, las políticas y las oportunidades, y, por último, como conclusión general, la búsqueda por parte de los electores de partidos prístinos (“*untainted parties*”).

El trabajo llevado a cabo combina de forma correcta una aproximación macro con otra micro, para lo cual desarrolla un análisis de regresión múltiple en el que usa datos de diecisiete países cubriendo el periodo entre 1985 y 2004 con un análisis a nivel individual siguiendo el diseño de casos más diferentes en el que selecciona a Brasil, México y Uruguay, realizando para cada uno de estos países un análisis multivariado para probar la influencia de diferentes factores en la intención del voto a favor de los partidos de izquierda. En este segundo análisis el modelo configurado integra un número de variables independientes que, según el caso nacional abordado, oscila entre dieciséis y dieciocho.

Uno de los resultados más interesantes del trabajo de Queirolo es el de considerar que no existe una anomalía latinoamericana como viene históricamente señalando la politología que estudia a la región. Algo que, para ser más preciso, se refiere a los tres casos nacionales abordados. La autora mantiene que los ciclos políticos en base a la ideología han existido claramente desde 1945 hasta la actualidad alzándose dominante la izquierda cuando el descontento social estaba muy extendido. También resulta interesante el hallazgo de que el votante latinoamericano no tiene una posición a priori antimercado y que reacciona votando a la izquierda ante los malos resultados de las políticas implementadas básicamente si estas no consiguen mitigar el desempleo; los partidos de izquierda consiguen óptimos resultados electorales cuando las cifras de desempleo son elevadas. Además, el electorado latinoamericano vota a la izquierda tratando nuevas alternativas que puedan mejorar su bienestar económico, pero se trata de un voto que no va dirigido a cualquier izquierda sino a aquella que ha estado fuera del gobierno y desempeñado un claro papel opositor, lo que ella denomina “*untainted parties*”. Siempre que haya una disponibilidad de estos partidos en la oferta política los votantes les verán como la mejor opción que asegure resultados económicos más favorables. Pero la disponibilidad de estas opciones so siempre es evidente como sucede en el caso del mexicano PRD que vendría a ser la evidencia de las limitaciones de que no toda la izquierda tiene idénticas posibilidades. Pudiendo haber sido la alternativa mexicana al statu quo del PRI no sucedió lo que ocurrió en otros países sino que la gente prefirió sancionar al PRI alejándolo del poder y buscar una solución a la crisis económica que asolaba al país a finales del siglo pasado apostando por un partido con más solera y en las antípodas ideológicas como era el PAN.

Otra evidencia que merece resaltarse de entre los resultados de este libro es que el comportamiento electoral, al menos de brasileños, mexicanos y uruguayos es menos impredecible y errático de lo que se suele afirmar habitualmente. En efecto, la evidencia manejada aleja los tópicos del comportamiento basado en mecanismos clientelares o de la relevancia casi excluyente de las prácticas de las campañas electorales. El rendimiento en la

economía de quien está en el poder, el alineamiento partidista y la identificación ideológica son elementos claramente explicativos del voto. Ello lleva a considerar al electorado como un cuerpo ciertamente estable que actúa activamente en el proceso de rendición de cuentas de la clase política contribuyendo a dar notable estabilidad al sistema democrático. La normalidad con que la izquierda ha llegado al poder, dejando muy atrás su renuencia en la década de 1960 ante los procesos electorales, y ha gobernado es un producto de ello.

Dos son, en mi opinión, las principales críticas particulares que pueden señalarse al trabajo de Queirolo. En primer lugar no tener en cuenta, no tanto las diferencias ideológicas que pudieran existir entre las distintas izquierdas, algo en lo que la autora apenas si entra, cuanto no valorar el hecho de que la izquierda en el poder era poseedora de una capacidad de poder bien diferente en aquellos países en los que el gobierno monocolor contaba con una mayoría cómoda en el Legislativo (Uruguay) de aquellos en los que ni el gobierno era monocolor y la mayoría de apoyo en el Legislativo debía construirse mediante laboriosas tareas de construcción de coaliciones (Brasil). En segundo lugar hay mecanismos institucionales que no se tienen en cuenta y que son fundamentales para entender el proceso de llegada de una fuerza política al poder como son los mecanismos de doble vuelta frente a los de mayoría simple. Existiría una tercera observación menor vinculada a la personalización de la política en países en los que, además, el sistema vigente es el presidencialismo, donde las opciones ideológicas pueden quedar camufladas bajo la imagen de los candidatos, algo que fue determinante en el caso mexicano al articularse una expresión electoral para partidista como fueron “los amigos de Fox” que diluyó el componente ideológico de la propuesta electoral.

De manera general hay que señalar que la acepción del término “América Latina” que aparece en la portada tiende a producir cierta confusión debido a la heterogeneidad de la región y al hecho de que los procesos políticos nacionales han tendido en las últimas tres décadas de asentamiento de la democracia a configurar un panorama si cabe aún más variopinto. La autora sorteja este problema centrando su análisis con mayor precisión en tres casos particulares. Esa decisión es un gran acierto.

Referencias

- Weyland, Kurt, Raúl L. Madrid y Wendy Hunter (eds.). 2010. *Leftist Governments in Latin America. Successes and Shortcomings*. New York: Cambridge University Press, 232 pp.
- Levistky, Steven y Ken Roberts (eds.). 2011. *The Resurgence of the Latin American Left*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 496 pp.
- Philip, George y Francisco Panizza. 2011. *The Triumph of Politics* Cambridge: Polity Press, 224 pp.
- Dabène, Olivier (ed.). 2012. *La gauche en Amérique latine (1998-2012)*. París: SCI-ENCESPO. Les Presses. 456 pp.

Lina M. Cabezas Rincón

Comportamento eleitoral e comunicação política na América Latina: o eleitor latino-americano

Helcimara Telles y Alejandro Moreno (organizadores). Editoraufmg: 2013, 586 pp.

¿Cómo vota la gente en América Latina?, ¿qué factores influyen en la decisión de los electores?, ¿cómo impacta el uso de las nuevas tecnologías tanto la oferta como la demanda electoral en las democracias latinoamericanas?, ¿es posible replicar teorías europeas y estadounidenses en Latinoamérica?, ¿puede el caso latinoamericano aportar a las teorías del voto ya existentes? Estos son algunos de los interrogantes que se plantean y se responden en *Comportamento eleitoral e comunicação política na América Latina: o eleitor latino-americano*, coordinado por Helcimara Telles y Alejandro Moreno, y en el que participan diecisiete académicos más de distintas universidades iberoamericanas.

El libro tiene como objetivo el análisis del elector latinoamericano, además del impacto que tiene en él el desarrollo de las antiguas y nuevas formas de comunicación política como, por ejemplo, las nuevas tecnologías de la información. De esta forma, el libro se divide en dos partes claramente diferenciadas: la primera recoge investigaciones sobre el comportamiento electoral, teniendo en cuenta variables como la oferta partidista, la transformación de los sistemas de partidos, la emergencia de nuevos actores políticos o la influencia de las variables económicas, el voto económico y las percepciones sobre la economía en países de Latinoamérica y Portugal. La segunda parte se centra en el estudio de la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales en los procesos electorales y en el comportamiento electoral de la región.

Han pasado más de 30 años desde que en América Latina los regímenes autoritarios dieron paso a la democracia. Pese a poseer un registro de inestabilidad política y económica importante, se ha logrado avanzar en la consolidación democrática e instaurar la

rutinización de las elecciones como mecanismo de selección de las élites políticas. De esta forma, en la actualidad, es posible analizar las pautas de comportamiento del electorado latinoamericano desde una perspectiva longitudinal, identificando regularidades y coyunturas que desencadenaron procesos de cambio en la conducta de los electores.

Justamente, los constantes cambios en las preferencias electorales de los latinoamericanos constituyen uno de los rasgos característicos de su comportamiento político. La volatilidad electoral ha sido vista como uno de los principales indicadores de la crisis de representación que se ha presentado en la región a partir de la década de 1990, la cual se ha reflejado en la desconfianza mostrada hacia las instituciones representativas, en la emergencia de nuevos actores políticos que disputaron el monopolio de la representación a los partidos y en la aparición de líderes *outsiders* que ha reforzado el personalismo en los sistemas de partidos latinoamericanos (Mainwaring, Bejarano y Pizarro, 2008).

Como lo señala en su capítulo Leticia Ruiz Rodríguez, la volatilidad de las preferencias electorales responde en parte a la existencia, en algunos países, de dinámicas políticas que dificultan la institucionalización de los partidos y los sistemas de partidos, tales como: el elitismo, el personalismo y el clientelismo. Como resultado de ello, la estructuración programática e ideológica de los partidos es débil, así como la identificación partidista por parte del elector latinoamericano. En este sentido, tanto la oferta como la demanda electoral se ven condicionadas, estableciéndose vínculos menos programáticos y más personalistas.

Pero también existen otros factores que desvirtúan el vínculo de la representación política y, además, minan la legitimidad de las instituciones de representación, como lo es la corrupción política. En este sentido, Fernando Filgueiras muestra cómo el uso inadecuado de los recursos públicos, excluye a gran parte de la ciudadanía del proceso de toma de decisión y desvirtúa los principios y procedimientos democráticos. Un aspecto poco estudiado es el impacto que tiene la corrupción política en el comportamiento electoral. Cabría esperar que las percepciones que los ciudadanos tienen de los políticos estén condicionadas por la información que aparece en los medios de comunicación, los cuales, en palabras de Filgueiras, crean una “política del escándalo” alrededor de los casos de corrupción.

Por otra parte, los trabajos de Malco Braga Camargos, Sébastien Dubé y María Celeste Ratto y José Ramón Montero analizan el comportamiento político a partir de las teorías económicas del voto. Teniendo en cuenta variables como la percepción de la economía, el PIB per cápita, la variación de la inflación y del desempleo, se analiza si el voto es usado como mecanismo de premio o castigo, así como la importancia de la dimensión económica frente a otras dimensiones como la sociológica (clase, religión, edad, etc.) o la psicológica (ideología, identidad partidista). Los resultados de estos trabajos son variados.

Por una parte, Ratto y Montero constatan que los factores de corto plazo (como la imagen del político o la percepción sobre la economía) fueron importantes en el apoyo a Fernández de Kirchner en 2007 así como la identidad partidista, mientras que características sociológicas y psicológicas tuvieron una relevancia menor. Asimismo, en un trabajo más amplio, Camargos muestra cómo, efectivamente, la relación entre voto y economía es más fuerte en aquellos países de la región que han estado más expuestos a fuertes

y recurrentes periodos de crisis económica. Un aspecto relevante que señala el autor es la dificultad de encontrar indicadores adecuados para analizar esta relación. Finalmente, el trabajo de Dubé muestra para el caso argentino el peso de los factores políticos sobre los económicos, en este caso algunos gobiernos lograron ampliar su respaldo electoral pese a los indicadores económicos negativos, mientras que otros fueron castigados pese a presentar resultados óptimos en materia económica. Ello sugiere que la relación entre voto y economía no es tan clara como aparenta e invita a continuar estudiando dicha relación en otros países de la región.

Las teorías del voto también han centrado su atención en otro tipo de factores más allá del ámbito económico. En el libro, los trabajos de Helcimara Telles, Pedro Santos Munding y Nayla Lopes, y el de Héctor Briceño exploran aspectos como la clase social, las características personales de los candidatos o la coyuntura política. La primera investigación se centra en la candidatura de Marina Silva, líder evangélica del Partido Verde en Brasil que logró un importante respaldo en las urnas aprovechando la alta movilización cognitiva del electorado brasileño, el uso de las nuevas tecnologías de la información, o el despliegue de un discurso en contra de la corrupción en un contexto en el que los diversos escándalos salpicaban al partido de gobierno (el PT) y a los partidos tradicionales como el PSDB. Por su parte, Briceño estudia el caso venezolano, en el cual muestra cómo el comportamiento electoral ha cambiado a lo largo del tiempo, transformando significativamente el sistema de partidos. Asimismo, este autor demuestra que el electorado chavista era policlasista y, aún más, que fueron las clases más bajas las que mostraron un mayor desencanto con el funcionamiento del sistema político durante la última legislatura de Chávez. De esta manera, el autor logra desmontar la relación que se suele hacer entre el apoyo electoral a Hugo Chávez y la clase social del electorado venezolano.

El trabajo de Jaime Fonseca, en el que analiza el electorado portugués, resume parte de las variables estudiadas por los trabajos anteriormente descritos (clase social, religión, ideología, percepción de la economía) y explora otras de tipo político como el interés en las campañas electorales, la participación política o la percepción respecto al respeto de los derechos humanos y las libertades civiles. Mediante el uso de los Modelos de Clases Latentes, este autor clasifica a los electores en diferentes categorías y muestra cómo la clase social continúa constituyendo un factor importante en la definición de los intereses y preocupaciones de los electores.

La segunda parte del libro aborda un tema actual que constituye un campo de análisis poco explorado en América Latina: la introducción de las nuevas tecnologías de la información en el ámbito político, la cual ha supuesto un cambio en las relaciones de los políticos/candidatos con los ciudadanos/electores. Como ya lo había señalado Norris (2000), las campañas electorales han evolucionado desde el *face to face* hacia la interactividad con el uso de Internet (webs, redes sociales, etc.), pasando por los mensajes de uno hacia muchos que supuso la irrupción de la televisión.

No obstante, como lo señalan, Alejandro Moreno y Karla Yuritzi Mendizábal para el caso mexicano, la brecha digital es aún muy grande, lo que limita el alcance de estas

nuevas herramientas. Estos autores hallaron que el perfil del electorado que usa Internet y las redes sociales es muy específico; se trata de personas jóvenes con un nivel socioeconómico medio, con un nivel de religiosidad bajo y con una identificación partidista igualmente baja. Pero ¿cómo se traduce el uso de estas nuevas tecnologías en términos de comportamiento político? pese a no haber evidencia empírica del impacto en el comportamiento electoral, sí es posible identificar ciertas actitudes vinculadas a su uso, tales como el apoyo a movimientos que buscan cambiar el statu quo o la visión crítica de la situación política.

Pero el impacto de las nuevas tecnologías no solo se puede observar en el electorado. Los políticos también han cambiado los canales de relación con el electorado. Prueba de ello son las webs de las campañas electorales, a través de las cuales según sea su intención, el candidato puede establecer relaciones uni o bidireccionales con los ciudadanos. Esta situación es claramente constatable en el estudio de Sylvia Iasulaitis, en el que analiza los foros de discusión de las webs del candidato presidencial Roberto Rodríguez Saá en Argentina y Marcos Enriquez Ominami en Chile. Las nuevas tecnologías suponen un cambio en la manera en que circula la información y tienen un potencial democratizador importante. No obstante, esto depende de la forma en que se usen y el alcance que puedan tener.

Esto no quiere decir que los medios de comunicación tradicionales hayan perdido relevancia, por el contrario, la televisión y la prensa escrita siguen siendo uno de los principales atajos informativos de los que se valen los ciudadanos para la construcción de sus preferencias electorales. Francisco Fonseca muestra el papel de la prensa brasileña en la construcción de la agenda política y en la formación de la opinión pública respecto a los candidatos en contextos electorales. Asimismo, Isabel Ferin Cunha y Rita Figueiras demostraron el relevante papel de la televisión en la campaña electoral para los comicios legislativos portugueses de 2009. En este caso, la cobertura mediática favoreció a algunos partidos, trató de evitar temas polémicos y se centró en los candidatos más que en los partidos.

Finalmente, los trabajos de Luiz Cláudio Lourenço y de Giliard Gomes Tenório muestran el poder de la televisión en contextos electorales. El primero destaca la importancia de los debates debido a la atención que reciben por parte de los electores, aunque en términos de transformación de preferencias su alcance es limitado. Por su parte, Gomes Tenório cuestiona las teorías sobre la personalización de las campañas, y muestra cómo el marco normativo de las campañas pueden potenciar la etiqueta sobre el candidato. Es lo que sucede en Brasil con el uso de los espacios de propaganda partidista gratuita.

En síntesis, el libro constituye un importante esfuerzo en la comprensión del comportamiento político en Latinoamérica, ya que además de estudiar diversos casos, los autores crearon sus propios modelos de análisis, sus índices de medición y establecieron interesantes diálogos con las teorías del voto más conocidas. Un último hecho a resaltar del libro aquí reseñado es que las investigaciones presentadas fueron el resultado de una convocatoria hecha por el Grupo de Investigación de Comunicación Política y Comportamiento

Electoral vinculado a la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Esto muestra la relevancia y el potencial de este tipo de espacios de intercambio académico para producir investigaciones de calidad que llenan un vacío en el panorama de la ciencia política latinoamericanista.

Referencias

- Mainwaring, Scott, Ana María Bejarano y Eduardo Pizarro. 2008. *La crisis de representación democrática en los países andinos*. Colombia: Editorial Norma.
- Norris, Pippa. 2000. *A Virtuous Circle. Political Communication in Post-Industrial Democracies*. New York: Cambridge University Press.

Noelle Del Giúdice y Aline Burni

Selección de candidatos y elaboración de programas en los partidos políticos

Manuel Alcántara Sáez y Lina M. Cabezas Rincón. Valencia: Tirant le Blanch, 2013, 484 pp.

Los partidos políticos constituyen un sistema de relaciones sociales y de poder en sí mismo con impacto propio en la dinámica política. El estudio de estas instituciones que son clave del sistema representativo permite comprender mejor el funcionamiento del propio régimen democrático. Al mismo tiempo, las democracias latinoamericanas son más jóvenes y están menos institucionalizadas que las democracias consolidadas de Europa Occidental y de Estados Unidos. Por ello, se espera que los partidos políticos también presenten particularidades que reflejen el funcionamiento de los regímenes de la región marcados por el patrimonialismo, el clientelismo, el personalismo y el elitismo.

El libro *Selección de candidatos y elaboración de programas en los partidos políticos*, editado por Manuel Alcántara Sáez y Lina María Cabezas Rincón aborda algunos de los rasgos más importantes del funcionamiento de los partidos y de su impacto sobre las democracias. Este volumen es el resultado del proyecto de investigación “Programas, organización y estrategias electorales de los partidos políticos en América Latina”, que tiene por objetivo la comprensión de las transformaciones internas de los partidos latinoamericanos durante los últimos años, así como el resultado de estos cambios para el sistema político. Se analizan seis países de la región, Costa Rica, Chile, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay, que presentan niveles diferentes de calidad de la democracia, de variación en los procedimientos de selección de candidatos, así como de elaboración de los programas. Dentro de estos países, los partidos elegidos en cada caso presentan variaciones ideológicas, de longevidad, relacionadas con el funcionamiento interno y con el éxito electoral.

El libro está dividido en dos partes: la primera aborda el proceso de selección de candidatos y la segunda parte se detiene en el proceso de elaboración de los programas. Los capítulos son ricos en detalles sobre la dinámica política de cada país, exaltando las particularidades de las dinámicas y normas del caso abordado. Además, aunque cada capítulo trate de un caso individual, existe una lógica subyacente en el trabajo que permite la comparación. Los diferentes casos se trabajan mediante entrevistas en profundidad realizadas a diputados y miembros de los partidos estudiados, documentos partidistas y análisis basados en el modelo de Rahat (2001) para el tema de la selección de candidatos, lo que facilita la comparación.

Existen dos grandes grupos de hallazgos de gran interés en el trabajo editado por Alcántara y Cabezas relacionados con ambos bloques temáticos: selección de candidatos y elaboración de programas. Por una parte, se identifica una tendencia a la democratización interna en la selección de los candidatos que ha permitido la realización de primarias internas, de asambleas partidistas, así como el logro de una mayor transparencia de las normas aplicables a los procedimientos de elección de los candidatos de los partidos estudiados. Sin embargo, estos cambios se solapan con los liderazgos tradicionales de los agrupamientos partidistas que no desean perder el control interno de las decisiones. También se encuentran limitados estos cambios por la persistencia de prácticas clientelares, patrimonialista y personalistas, además de por la convivencia de procedimientos formales e informales, en los que, muchas veces, son los últimos los que ejercen un papel determinante en la decisión final de las candidaturas.

En este sentido, los partidos latinoamericanos son estructuras muy centralizadas y jerarquizadas. Ello supone que los liderazgos y cúpulas partidistas prevalezcan en el momento de seleccionar los candidatos.

En muchos casos, las prácticas informales predominan y hay una distancia entre lo formalmente estipulado y la *praxis* política. Los procedimientos se muestran contradictorios y cambian de acuerdo con los intereses dominantes. Incluso en los casos en los que la democracia presenta un nivel más institucionalizado, las prácticas formales e informales cohabitan.

Por otra parte, los capítulos revelan que no hay una forma idónea de seleccionar candidatos y que los procedimientos referentes a esta tarea no respetan una lógica lineal progresiva donde hay una especie de *trade-off* que afecta a los partidos en lo que se refiere a la democratización interna. La democratización tiene consecuencias negativas para la unidad y cohesión interna de los partidos, puesto que debilita la armonía ideológica y el grado de disciplina del partido. Además, el trabajo muestra que las reformas no han cambiado las precepciones negativas de los partidos políticos y que tampoco instauraron procesos permanentes de inclusión que implican en cambios significativos en la distribución interna de poder.

Por otra parte, respecto a la elaboración de los programas de los partidos, el libro muestra un alineamiento entre los países latinoamericanos que componen el estudio. De forma general, la importancia que se da a los programas de partidos es escasa en la región e

importa muy poco en la hora de decidir el voto. En la situación de inestabilidad de los sistemas de partidos latinoamericanos, caracterizada de forma general por el frecuente incumplimiento de promesas explicitadas en los programas y la convivencia del juego programático con dinámicas clientelares y personalistas, es esperable que haya esta desatención hacia los programas.

Por el contrario, es notoria la importancia de los procesos de elaboración de los programas, más que los contenidos de los mismos. Los acuerdos que se producen durante ese proceso tienen efectos positivos no solo en la obtención de votos sino también en la organización interna del partido. El proceso de elaboración ofrece otros rendimientos a los partidos políticos más allá de divulgar las posiciones de un partido y conseguir votos ayudando a los electores a decidirse por un candidato.

Así, el trabajo que aquí se comenta muestra que dicho proceso constituye una oportunidad de promover la imagen del partido, demostrando a los electores que son capaces de diseñar un plan de gobierno, dejando evidente su potencial como dirigentes. Además, el procedimiento de elaboración produce estructuras, liderazgos o vínculos con los electores, ganando presencia pública y la confianza tanto entre los miembros del partido como fuera del mismo. Al respecto, un rasgo común a todos los países estudiados es el uso del proceso de elaboración del programa como mecanismo de reclutamiento. Las personas a las cuales se encargan las áreas temáticas durante el proceso de elaboración pueden venir en el futuro a ser responsables de esas áreas en el gobierno. Su participación en el proceso sirve como oportunidad para mostrar al líder sus capacidades y para que sea considerado como un potencial miembro del gobierno. Sirve para formar equipos cohesionados y eliminar inconsistencias.

Sin embargo, la importancia que tiene el programa electoral en el proceso de decisión de voto es muy escasa. Aunque sea un documento necesario, cuenta muy poco a la hora de conseguir votos, y es irrelevante para la mayor parte del electorado. Es utilizado durante las campañas para diseñar los temas, los *slogans* y los discursos, pero no es la variable más importante para tener un buen desempeño electoral.

La decisión de elaborar un programa, la relevancia que se concede a este, así como el contenido del mismo responde a diferentes criterios asociados a la posición del partido o del candidato, y al ámbito de competición electoral. Está relacionado también con la centralización del proceso de elaboración de los programas y con la mayor o menor institucionalización de las reglas que rigen la elaboración de los programas. Para unos candidatos la redacción y el contenido del programa ha sido una cuestión relevante, para otros ha constituido un mero trámite o formalidad. Hay partidos que invierten intensivo tiempo y recursos materiales para producir un programa, mientras que otros ofrecen un proceso de construcción del programa menos minucioso y con menos inversión en recursos económicos y técnicos.

Junto a estas tendencias generales relativas a la elaboración de programas, los capítulos que componen el libro muestran que hay rasgos individuales que caracterizan a cada país. En Chile, la elaboración de los programas de partidos ayuda a consolidar el punto de

encuentro entre partidos políticos que forman una misma de coalición, fortaleciendo la identidad de las coaliciones como algo más que un simple pacto electoral. En Uruguay, los partidos han sido portadores de matrices ideológicas y programáticas consistentes y, por ello, la elaboración de los programas de partidos tiene una importancia más fuerte.

Referencias

Rahat, Gideon. 2001. "Candidate selection methods. An analytical framework", *Party Politics*, 7 (3): 297-322.

Juan A. Ramos Gallarín

La formación de la agenda pública. Análisis comparado de las demandas de hombres y mujeres hacia el sistema político en España

Ernesto Carrillo, Manuel Tamayo y Laura Nuño. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013, 350 pp.

Este libro constituye una aportación relevante al campo de las investigaciones de carácter empírico sobre políticas públicas, que viene experimentando un progresivo desarrollo en nuestro país y en el cual los autores acumulan una considerable experiencia. Más concretamente, se centra en el estudio de la formación de la agenda pública, entendida como proceso de política pública. El trabajo que aquí se comenta amplía y profundiza otros ya publicados referidos al mismo tema (Tamayo y Carrillo, 2004 y 2005), al tiempo que incorpora al análisis la perspectiva de género, terreno en el que L. Nuño ha realizado contribuciones de importancia en fechas relativamente recientes (Nuño, 2010).

La obra persigue un triple objetivo: en primer lugar, proceder a una revisión y una ordenación de la literatura científica referida a la formación de la agenda pública; en segundo lugar, llevar a cabo una investigación empírica sobre la agenda pública en España, comparándola con la de otros países europeos; por último, comparar de manera sistemática las demandas que las mujeres y los hombres realizan al sistema político, poniendo de relieve los sesgos de género presentes en la agenda pública.

El análisis que han llevado a cabo E. Carrillo, M. Tamayo y L. Nuño se apoya en una labor de recogida y tratamiento de la información de considerable magnitud que incluye la explotación de microdatos, bases de noticias de prensa, diarios de sesiones e información cuantitativa proporcionada por una amplia variedad de instituciones. Los microdatos sobre agenda pública proceden de dos fuentes: de una parte, un centenar largo de

estudios (*Barómetros de Opinión*, del Centro de Investigaciones Sociológicas y otros) correspondientes al periodo 1985-2009, que han dado lugar a una base armonizada con cerca de 310.000 entrevistas; de otra, quince estudios del *Eurobarómetro* correspondientes al periodo 2002-2009, que aportan más de 230.000 entrevistas. Para estudiar la agenda de los medios se ha recurrido a la explotación de la base *My News* y, en menor medida, a la hemeroteca del diario *El País*. Por lo que respecta a la agenda formal, se ha llevado a cabo un análisis del contenido de los *discursos sobre el estado de la nación*, complementado con datos sobre recursos públicos extraídos del Instituto Nacional de Estadística, Eurostat y la OCDE. Por último, los datos referidos a las condiciones reales de los problemas públicos en España proceden de diversas instituciones españolas e internacionales.

El libro está organizado en siete capítulos. En los tres primeros se realiza una exposición del diseño y la metodología de investigación y una revisión sistemática de la literatura científica sobre la agenda. Así, se dedica un capítulo a tratar las conexiones existentes entre la agenda pública y los procesos de formación de la agenda formal en las democracias avanzadas. Otro, extenso, se emplea para repasar las teorías sobre formación de la agenda pública, prestando atención a cuestiones como la dinámica de las agendas, el ciclo de atención a los temas públicos, los factores que afectan al establecimiento de la agenda o los efectos del cambio cultural sobre la misma.

En un segundo bloque de capítulos se aborda el análisis de la agenda pública en España y el estudio de las demandas de hombres y mujeres al sistema político. Los temas tratados incluyen la descripción de la agenda pública y su evolución en España a lo largo del periodo 1985-2009, la comparación entre la agenda pública española y las de los países de la UE y el análisis del impacto de algunos de los principales factores que afectan a la formación de la agenda pública en nuestro país. El libro se cierra con un capítulo de conclusiones.

Los autores parten de las nociones de agenda pública y de formación de la agenda elaboradas por Cobb, Ross y Ross (1976), al tiempo que encuadran su estudio en la indagación acerca de las demandas hacia el sistema político (Borre y Goldsmith, 1995) y los procesos de conversión de deseos en demandas (Roller, 1995). El enfoque aplicado subraya la conveniencia de abordar el análisis de la agenda pública integrando las aportaciones de distintas teorías que, consideradas conjuntamente, hacen posible una comprensión más completa de la realidad investigada.

Para el análisis de la evolución de la agenda recurren a la distinción entre temas crónicos (presentes en la misma durante largos periodos de tiempo), temas intermitentes y crisis. De acuerdo con ello se produciría un predominio de los temas intermitentes, en línea con los planteamientos sobre el ciclo de atención de los temas públicos propuesto por Downs (1972). También se presta atención al grado de volatilidad de la agenda, entendida como la magnitud del cambio producido en la misma entre dos fechas. En este sentido el estudio constata que, consideradas en su conjunto, las agendas muestran un grado apreciable de estabilidad como consecuencia de la presencia de

un pequeño número de temas crónicos que concentran buena parte de la atención de la ciudadanía.

Por su parte, la capacidad de la agenda, entendida como el número medio de temas mencionados por cada entrevistado, permanece relativamente constante en el tiempo, algo que resulta congruente con lo ya señalado por McCombs y Zhu (1995). Asimismo se pone de manifiesto que dicha capacidad es similar entre países (aunque algo más baja en el caso español), mientras que tiende a ser mayor en el caso de los individuos con un grado de instrucción más elevado.

El análisis del contenido sustantivo de la agenda se enmarca en las teorías sobre el cambio cultural, con una fuerte presencia de las aportaciones de Inglehart (1991 y 1998). Así, las agendas de los países estudiados mostrarían una creciente diversificación de sus contenidos, consecuencia de la progresiva incorporación de temas propios de la agenda posmaterialista. Con todo, determinados temas vinculados a la “vieja” agenda, como los referidos a los problemas económicos y la seguridad física, siguen teniendo una presencia importante en buen número de casos, el español entre ellos.

El libro dedica su capítulo sexto a analizar lo que, en la terminología empleada por los autores, serían los “determinantes” de la agenda pública en España. A tal fin se apoyan en la cuidadosa revisión de la literatura realizada en los capítulos iniciales y optan por considerar un conjunto de factores en el que incluyen la agenda formal, la agenda de los medios y las condiciones reales de los problemas públicos, en línea con lo planteado por Soroka (2002), además de los valores e intereses de los ciudadanos. La principal conclusión a la que llegan es que la agenda pública es, a grandes rasgos, un reflejo de los temas que concentran la atención de los medios, si bien “es la propia evolución real de los problemas la que guía las preocupaciones de los ciudadanos” (p. 314). La agenda del presidente, por su parte, tendría una influencia limitada y no lineal, al tiempo que existiría una relación inversa entre el volumen de recursos dedicados a tratar los temas de la agenda y el grado de preocupación de los ciudadanos por dichos temas. Por último, los valores e intereses de los ciudadanos tendrían una influencia significativa, aunque menor que el resto de los factores considerados.

La variable sexo, por su parte, influye moderadamente sobre la formación de la agenda. No obstante, cuando se comparan las agendas de los varones y las mujeres, se observan sesgos de género en la priorización de los temas que las integran, diferencias que cabría entender como uno de los efectos de los procesos de socialización diferenciados descritos por Millet (1997). La acumulación de estos sesgos da lugar a la existencia de agendas de temas parcialmente divergentes.

En resumen, *La formación de la agenda pública* es una obra ambiciosa que merece la pena estudiar con atención. Basada en un riguroso planteamiento metodológico y en una sólida labor de recogida y análisis de información, procura mantener en todo momento la conexión entre las formulaciones teóricas y el análisis de la evidencia empírica, haciendo posible la obtención de conclusiones relevantes acerca de un objeto de estudio que tiene una importancia considerable. Esperemos que este diseño y este procedimiento

de investigación, aplicados con las modificaciones pertinentes, den lugar a nuevos trabajos de similar interés.

Referencias

- Borre, Ole y Michael Goldsmith. 1995. "The scope of government", en Ole Borre y Elinor Scarbrough (eds.), *The scope of government*. Oxford: Oxford University Press.
- Cobb, Roger W., Jennie-Keith Ross y Mark H. Ross. 1976. "Agenda building as a comparative political process", *The American Political Science Review*, 70 (1): 126-138.
- Downs, Anthony. 1972. "Up and down with ecology: The issue attention cycle", *Public Interest*, 28: 32-50.
- Inglehart, Ronald. 1991. *El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Inglehart, Ronald. 1998. *Modernización y postmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 sociedades*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Mc Combs, Maxwell E. y Jian-Hua Zhu. 1995. "Capacity, diversity and volatility of the public agenda: Trends from 1954 to 1994", *Public Opinion Quarterly*, 59 (4): 495-525.
- Millet, Kate. 1997. *Política sexual*. Madrid: Cátedra.
- Nuño, Laura. 2010. *El mito del varón sustentador: orígenes y consecuencias de la división sexual del trabajo*. Madrid: Icaria.
- Roller, Edeltraud. 1995. "Political agendas and beliefs about the scope of government", en Ole Borre y Elinor Scarbrough (eds.), *The scope of government*. Oxford: Oxford University Press.
- Soroka, Stuart N. 2002. *Agenda-setting dynamics in Canada*. Vancouver: UBC Press.
- Tamayo, Manuel y Ernesto Carrillo. 2004. "La agenda pública en España", *Revista Internacional de Sociología*, 38: 35-59.
- Tamayo, Manuel y Ernesto Carrillo. 2005. "La formación de la agenda pública", *Foro Internacional XLV* (4): 658-681.

Eduardo Alvarado Espina

¿"Democracia sigilosa" en España? Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativos

Joan Font, Clemente Navarro, Magdalena Wojcieszak, Pau Alarcón. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, septiembre de 2012, 133 pp.

Los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente la política española están relacionados con el funcionamiento de su sistema político y el desempeño de sus principales actores —partidos, sindicatos y organizaciones empresariales—. La alta desconfianza política, como consecuencia de una institucionalidad que escasas veces controla a los políticos y que provoca una percepción de corrupción¹, incide en cómo la ciudadanía se relaciona con los procesos de decisión. La crítica hacia las instituciones formales es sistemática, especialmente hacia los partidos y el gobierno. Además, una ciudadanía más participativa, sin abandonar la movilización constante, ha comenzado a organizarse para competir por el poder político. Como dice Belén Barreiro, los ciudadanos en los últimos años sienten la necesidad de exigir más democracia (Barreiro, 2014).

Estos parecen ser motivos suficientes para considerar que las interrogantes que esboza el libro de Font, Navarro, Wojcieszak y Alarcón, sobre qué tipos de procesos políticos prefiere la ciudadanía española resultan oportunos para conseguir dimensionar los fenómenos político-sociales contemporáneos, ya sea el 15M, Podemos, o la caída electoral —y simbólica— del *bipartidismo de facto*. Además, el texto nos presenta una interesante perspectiva acerca de la idea de eficacia democrática como forma de mediación de la relación mutua entre ciudadano y Estado (Offe, 1990: 152), cuando se someten a evaluación los procesos políticos e institucionales dentro del contexto en el que se desarrollan

1. Es una interpretación que puede desprenderse de los últimos estudios del CIS N° 3021, 3024, 3029 y 3033 de 2014.

(Levine y Molina, 2007), evitando la universalización de una realidad que no ha sido contrastada.

Entrando en materia, en la obra que reseñamos se indaga sobre las preferencias que pueden tener los ciudadanos españoles por procesos políticos más o menos participativos en base al modelo de *Stealth Democracy o democracia sigilosa* de Hibbing y Theiss-Morse (2002). Para ello, los autores utilizan los indicadores básicos de dicho modelo, añadiendo otros factores que permiten contrastar empíricamente el índice de democracia sigilosa con actitudes políticas de la ciudadanía española. De este modo, construyen un cuerpo teórico que utiliza como columna vertebral la escala de Hibbing y Theiss-Morse, al cual integran otras variables como la identificación ideológica, la dimensión territorial de la decisión política o la diferenciación por temas (issues), variables que se distribuyen entre la importancia y el compromiso que la ciudadanía les atribuye. Estas variables se usan de correctores ya que los indicadores de democracia sigilosa son volubles al ámbito del gobierno (de un municipio a la UE); o si el debate trata sobre economía, aborto o inmigración; o si la persona se identifica ideológicamente con la izquierda o la derecha. Para el desarrollo de todo el análisis se utiliza como fuente de datos el estudio 2860 sobre *Preferencia por los procesos políticos entre los españoles*, publicado por el CIS en febrero de 2011.

Aunque no se lo propone expresamente, el estudio crítico del modelo de democracia sigilosa ausculta la intención que tienen los ciudadanos de incidir en esa elemental relación política que hace algunas décadas estableció D. Easton (1965) entre las demandas (*inputs*) y los resultados (*outputs*) del sistema político. Un razonamiento lógico que se justifica en los factores complementarios que buscan explicar las preferencias de los ciudadanos españoles sobre los procesos políticos. Estos factores están relacionados con la confianza de las personas hacia los políticos y hacia sus conciudadanos, con el interés en los temas sobre los que se decide, la percepción de consenso en la sociedad o con rasgos psicológicos individuales. Además, estas cuestiones son las que definen los tres objetivos del estudio: 1) comparar las preferencias de los ciudadanos norteamericanos por procesos de democracia sigilosa con las preferencias que pueden tener los españoles; 2) realizar un análisis crítico del índice *Stealth Democracy*; y 3) complementar el modelo explicativo original. Se trata de averiguar si el ciudadano común siente la necesidad de intervenir directamente en el proceso de demandas y resultados del sistema político en el caso español.

En el análisis de los objetivos se establece que la propuesta de democracia sigilosa contribuye —en el caso de EE. UU.— a desmitificar la idea universal de que existe una demanda de mayor participación ciudadana, algo que depende de la valoración que tenga la ciudadanía tanto de los políticos como de sí misma. Esto implica que la ciudadanía, además de interesarse en los resultados del proceso político, se preocupa en el cómo se toman las decisiones pero sin que ello signifique participar en dichos procesos. Asimismo, la inclinación por procesos más o menos participativos sería totalmente independiente de la identificación ideológica. Pero, además, la aversión al conflicto, la desconfianza respecto a las demás personas y la percepción de un consenso ideológico —base explicativa

sobre la que se cimienta la preferencia por un modelo de democracia sigilosa o invisible—son actitudes que, según Hibbing & Theiss-Morse, definen a los estadounidenses frente a la participación política.

En el estudio del caso español —a diferencia del índice original de los investigadores estadounidenses que solo se ocupa de medir la política en general a escala nacional— se propone una acertada matización del análisis al diferenciar los campos evitando el determinismo y el absolutismo teórico, lo que queda reflejado en sus resultados. Una mayor inclinación por la participación o la representación pasa a depender del tema político tratado o del alcance territorial de la decisión. Por ejemplo, los ciudadanos españoles se inclinan a delegar las decisiones de política económica en el gobierno y en expertos, pero en asuntos que entienden más cercanos a su individualidad, como el aborto, se inclinan por la participación. En cuanto a los factores actitudinales, un análisis más riguroso les otorga un valor explicativo insuficiente para determinar las preferencias de la ciudadanía hacia formas de decisión política más o menos participativas. Así, utilizando los datos que ofrece el estudio 2860 del CIS se comprueba, entre otras cosas, que la mayor aversión al conflicto de los españoles, frente a la de EE. UU., está más relacionada con la actividad participativa que con la preferencia hacia un mayor protagonismo de la ciudadanía en política.

De este modo, el examen comparativo del índice de *Stealth Democracy* ofrece la posibilidad de conocer algunas variables comunes que explican actitudes activas o pasivas hacia los procedimientos democráticos dentro de una realidad social determinada. Aclara el camino que siguen los ciudadanos de acuerdo a sus valores e intereses en tiempos en que decae la confianza en el Estado o en el gobierno, pero no en la democracia (Dahl, *et al.*, 1999). También ayuda a conocer los rasgos diferenciadores que debilitan toda pretensión de universalización de dicho modelo. Así, la particularidad de los factores explicativos nos conduce a reconocer la existencia de distintas actitudes frente a las ideas de representación y de participación política entre los españoles.

En términos teóricos, el modelo de *Stealth Democracy* es una oposición a cualquier otro que pretenda dar mayor protagonismo a una democracia más participativa o deliberativa. También es una aportación *parcialmente creíble* si se trata de estudiar la complejidad de las actitudes que tienen los ciudadanos hacia las reglas del juego democrático liberal, como el mejor proceso político para resolver los conflictos (Offe, 1990). Por otra parte, no nos permite profundizar en la influencia que pueden ejercer variables de orden estructural o institucional, como las condiciones sociales (materiales) o las asimetrías informativas. Tampoco nos permite obtener señas de la influencia que tienen los hacedores y líderes de opinión (Dahl, 1997) en referencia a una determinada forma de decisión política. Aunque, si bien es cierto, esto no forma parte de los objetivos de la investigación en cuestión. En cambio, el contenido de la obra sí nos aproxima a una contextualización más adecuada del debate entre democracia procedimental y democracia participativa (Rosanvallon, 2009); o entre política agonística y política de deliberación (Mouffe, 2012), desde

una perspectiva más cercana a quienes, en última medida, deben ejercer la soberanía política en una sociedad: los ciudadanos. En el caso de España se demuestra que la población se inclina moderadamente por los modelos participativos. Una moderación que parece ser un rasgo identitario de la cultura política española, pues es congruente, por una parte, con la alta legitimidad y, por otra, con la considerable desafección política que ha mostrado la democracia en España desde 1978 (Montero, *et al.*, 1998). Sin embargo, y más allá de las apreciaciones sobre *la ilusión del ideal democrático* (Innerness, 2011), el nuevo formato discursivo de la ciudadanía política parece encaminado a hacer efectiva la igualdad política, junto a una mayor participación en decisiones de alta relevancia.

En cuanto a las claves que puede aportar este estudio respecto a los procesos políticos que prefieren los ciudadanos españoles en la actualidad, se podrían mencionar al menos dos. En primer lugar, la mayor demanda de participación proviene de los sectores más jóvenes de la población (menores de 35 años), con estudios superiores, de izquierda, no creyentes, abstencionistas y que viven en ciudades medias (50.000 a 100.000 habitantes). Este es un perfil que puede coincidir, en términos generales, con quienes participan en el *protopartido Podemos*. Al contrario, las personas mayores, con menos estudios, católicos practicantes y electores de los partidos mayoritarios son los que se inclinan hacia un polo representativo. En segundo lugar, aunque la población española se manifiesta abiertamente crítica en cuanto a las virtudes morales de los profesionales de la política o *clase política*, no hay claridad que esto signifique que el conjunto de la ciudadanía apueste por una intervención más directa en los asuntos políticos. Algo que se explica del hecho de que la distancia entre la confianza de los ciudadanos hacia los políticos y entre la misma ciudadanía no es significativa, pero también porque los ciudadanos reconocen que los políticos están dotados de una mayor capacidad para tomar decisiones.

En definitiva, este es un libro que arroja bastantes luces sobre la valoración que puede tener la ciudadanía del sistema político desde un enfoque contextual. Así, los españoles desean unos procesos políticos donde la intervención ciudadana sea superior a la actualmente existente, aunque esta sea una postura más bien moderada. Una moderación que está determinada por los asuntos tratados y los diferentes ámbitos territoriales en que se adopten las decisiones políticas. Asimismo, la claridad de las conclusiones se consigue por medio de un lenguaje sencillo y un impecable esquema que discurre desde la presentación de los objetivos, se detiene en la conceptualización y concluye con la interpretación de los resultados en cada apartado. El planteamiento está tan bien logrado que la simple comparación de la escala de evaluación de procesos políticos permite conocer los niveles de criticidad que hacen más o menos favorable la participación ciudadana. Por todo ello, este es un texto de gran valor ilustrativo, recomendable tanto para aquellos que tengan un conocimiento más profundo sobre los dilemas que caracterizan a las democracias modernas, como para quienes deseen acercarse desde intuiciones más profanas a este tipo de análisis científico-sociales.

Referencias

- Barreiro, Belén., 2014. *Podemos se ha sentado en la silla del PSOE y el PSOE de momento se ha quedado de pie* [Entrevista] (septiembre 2014).
- Dahl, Robert. 1997. *La Poliarquía. Participación y oposición*. Segunda ed. Madrid: TECNOS.
- Dahl, Robert, Giovanni Sartori y Fernando Vallespín. 1999. *El futuro de la democracia*. Madrid: Taurus.
- Easton, David, 1965. *Framework for Political Analysis*. Primera ed. Chicago: University of Chicago Press.
- Hibbing, John y Elizabeth Theiss-Morse. 2002. *Stealth Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Innerarity, Daniel. 2011. La política después de la indignación, *Claves*, 218: 18-30.
- Levine, Daniel y José Molina. 2007. The Quality of Democracy in Latin America. Another View, *Kellogg Institute*, 342: 1-36.
- Montero, José Ramón, Richard Gunther y Mariano Torcal. 1998. Actitudes hacia la democracia en España: legitimidad, descontento y desafección, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 83: 9-49.
- Morlino, Leonardo. 2009. La calidad de la democracia. *Claves de la razón práctica*, 193: 26-35.
- Mouffe, Chantal. 2012. *La paradoja democrática*. Segunda ed. Barcelona: Gedisa.
- Offe, Claus. 1990. *Contradicciones en el Estado del Bienestar*. Madrid: Alianza.
- Rosanvallon, Pierre. 2009. La democracia y sus condiciones. *Cuadernos del Cendes*, 71: 149-160.

Eduardo Alvarado Espina

¿"Democracia sigilosa" en España? Preferencias de la ciudadanía española sobre las formas de decisión política y sus factores explicativos

Joan Font, Clemente Navarro, Magdalena Wojcieszak, Pau Alarcón. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, septiembre de 2012, 133 pp.

Los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente la política española están relacionados con el funcionamiento de su sistema político y el desempeño de sus principales actores —partidos, sindicatos y organizaciones empresariales—. La alta desconfianza política, como consecuencia de una institucionalidad que escasas veces controla a los políticos y que provoca una percepción de corrupción¹, incide en cómo la ciudadanía se relaciona con los procesos de decisión. La crítica hacia las instituciones formales es sistemática, especialmente hacia los partidos y el gobierno. Además, una ciudadanía más participativa, sin abandonar la movilización constante, ha comenzado a organizarse para competir por el poder político. Como dice Belén Barreiro, los ciudadanos en los últimos años sienten la necesidad de exigir más democracia (Barreiro, 2014).

Estos parecen ser motivos suficientes para considerar que las interrogantes que esboza el libro de Font, Navarro, Wojcieszak y Alarcón, sobre qué tipos de procesos políticos prefiere la ciudadanía española resultan oportunos para conseguir dimensionar los fenómenos político-sociales contemporáneos, ya sea el 15M, Podemos, o la caída electoral —y simbólica— del *bipartidismo de facto*. Además, el texto nos presenta una interesante perspectiva acerca de la idea de eficacia democrática como forma de mediación de la relación mutua entre ciudadano y Estado (Offe, 1990: 152), cuando se someten a evaluación los procesos políticos e institucionales dentro del contexto en el que se desarrollan

1. Es una interpretación que puede desprenderse de los últimos estudios del CIS N° 3021, 3024, 3029 y 3033 de 2014.

(Levine y Molina, 2007), evitando la universalización de una realidad que no ha sido contrastada.

Entrando en materia, en la obra que reseñamos se indaga sobre las preferencias que pueden tener los ciudadanos españoles por procesos políticos más o menos participativos en base al modelo de *Stealth Democracy o democracia sigilosa* de Hibbing y Theiss-Morse (2002). Para ello, los autores utilizan los indicadores básicos de dicho modelo, añadiendo otros factores que permiten contrastar empíricamente el índice de democracia sigilosa con actitudes políticas de la ciudadanía española. De este modo, construyen un cuerpo teórico que utiliza como columna vertebral la escala de Hibbing y Theiss-Morse, al cual integran otras variables como la identificación ideológica, la dimensión territorial de la decisión política o la diferenciación por temas (issues), variables que se distribuyen entre la importancia y el compromiso que la ciudadanía les atribuye. Estas variables se usan de correctores ya que los indicadores de democracia sigilosa son volubles al ámbito del gobierno (de un municipio a la UE); o si el debate trata sobre economía, aborto o inmigración; o si la persona se identifica ideológicamente con la izquierda o la derecha. Para el desarrollo de todo el análisis se utiliza como fuente de datos el estudio 2860 sobre *Preferencia por los procesos políticos entre los españoles*, publicado por el CIS en febrero de 2011.

Aunque no se lo propone expresamente, el estudio crítico del modelo de democracia sigilosa ausculta la intención que tienen los ciudadanos de incidir en esa elemental relación política que hace algunas décadas estableció D. Easton (1965) entre las demandas (*inputs*) y los resultados (*outputs*) del sistema político. Un razonamiento lógico que se justifica en los factores complementarios que buscan explicar las preferencias de los ciudadanos españoles sobre los procesos políticos. Estos factores están relacionados con la confianza de las personas hacia los políticos y hacia sus conciudadanos, con el interés en los temas sobre los que se decide, la percepción de consenso en la sociedad o con rasgos psicológicos individuales. Además, estas cuestiones son las que definen los tres objetivos del estudio: 1) comparar las preferencias de los ciudadanos norteamericanos por procesos de democracia sigilosa con las preferencias que pueden tener los españoles; 2) realizar un análisis crítico del índice *Stealth Democracy*; y 3) complementar el modelo explicativo original. Se trata de averiguar si el ciudadano común siente la necesidad de intervenir directamente en el proceso de demandas y resultados del sistema político en el caso español.

En el análisis de los objetivos se establece que la propuesta de democracia sigilosa contribuye —en el caso de EE. UU.— a desmitificar la idea universal de que existe una demanda de mayor participación ciudadana, algo que depende de la valoración que tenga la ciudadanía tanto de los políticos como de sí misma. Esto implica que la ciudadanía, además de interesarse en los resultados del proceso político, se preocupa en el cómo se toman las decisiones pero sin que ello signifique participar en dichos procesos. Asimismo, la inclinación por procesos más o menos participativos sería totalmente independiente de la identificación ideológica. Pero, además, la aversión al conflicto, la desconfianza respecto a las demás personas y la percepción de un consenso ideológico —base explicativa

sobre la que se cimienta la preferencia por un modelo de democracia sigilosa o invisible—son actitudes que, según Hibbing & Theiss-Morse, definen a los estadounidenses frente a la participación política.

En el estudio del caso español —a diferencia del índice original de los investigadores estadounidenses que solo se ocupa de medir la política en general a escala nacional— se propone una acertada matización del análisis al diferenciar los campos evitando el determinismo y el absolutismo teórico, lo que queda reflejado en sus resultados. Una mayor inclinación por la participación o la representación pasa a depender del tema político tratado o del alcance territorial de la decisión. Por ejemplo, los ciudadanos españoles se inclinan a delegar las decisiones de política económica en el gobierno y en expertos, pero en asuntos que entienden más cercanos a su individualidad, como el aborto, se inclinan por la participación. En cuanto a los factores actitudinales, un análisis más riguroso les otorga un valor explicativo insuficiente para determinar las preferencias de la ciudadanía hacia formas de decisión política más o menos participativas. Así, utilizando los datos que ofrece el estudio 2860 del CIS se comprueba, entre otras cosas, que la mayor aversión al conflicto de los españoles, frente a la de EE. UU., está más relacionada con la actividad participativa que con la preferencia hacia un mayor protagonismo de la ciudadanía en política.

De este modo, el examen comparativo del índice de *Stealth Democracy* ofrece la posibilidad de conocer algunas variables comunes que explican actitudes activas o pasivas hacia los procedimientos democráticos dentro de una realidad social determinada. Aclara el camino que siguen los ciudadanos de acuerdo a sus valores e intereses en tiempos en que decae la confianza en el Estado o en el gobierno, pero no en la democracia (Dahl, *et al.*, 1999). También ayuda a conocer los rasgos diferenciadores que debilitan toda pretensión de universalización de dicho modelo. Así, la particularidad de los factores explicativos nos conduce a reconocer la existencia de distintas actitudes frente a las ideas de representación y de participación política entre los españoles.

En términos teóricos, el modelo de *Stealth Democracy* es una oposición a cualquier otro que pretenda dar mayor protagonismo a una democracia más participativa o deliberativa. También es una aportación *parcialmente creíble* si se trata de estudiar la complejidad de las actitudes que tienen los ciudadanos hacia las reglas del juego democrático liberal, como el mejor proceso político para resolver los conflictos (Offe, 1990). Por otra parte, no nos permite profundizar en la influencia que pueden ejercer variables de orden estructural o institucional, como las condiciones sociales (materiales) o las asimetrías informativas. Tampoco nos permite obtener señas de la influencia que tienen los hacedores y líderes de opinión (Dahl, 1997) en referencia a una determinada forma de decisión política. Aunque, si bien es cierto, esto no forma parte de los objetivos de la investigación en cuestión. En cambio, el contenido de la obra sí nos aproxima a una contextualización más adecuada del debate entre democracia procedimental y democracia participativa (Rosanvallon, 2009); o entre política agonística y política de deliberación (Mouffe, 2012), desde

una perspectiva más cercana a quienes, en última medida, deben ejercer la soberanía política en una sociedad: los ciudadanos. En el caso de España se demuestra que la población se inclina moderadamente por los modelos participativos. Una moderación que parece ser un rasgo identitario de la cultura política española, pues es congruente, por una parte, con la alta legitimidad y, por otra, con la considerable desafección política que ha mostrado la democracia en España desde 1978 (Montero, *et al.*, 1998). Sin embargo, y más allá de las apreciaciones sobre *la ilusión del ideal democrático* (Innerness, 2011), el nuevo formato discursivo de la ciudadanía política parece encaminado a hacer efectiva la igualdad política, junto a una mayor participación en decisiones de alta relevancia.

En cuanto a las claves que puede aportar este estudio respecto a los procesos políticos que prefieren los ciudadanos españoles en la actualidad, se podrían mencionar al menos dos. En primer lugar, la mayor demanda de participación proviene de los sectores más jóvenes de la población (menores de 35 años), con estudios superiores, de izquierda, no creyentes, abstencionistas y que viven en ciudades medias (50.000 a 100.000 habitantes). Este es un perfil que puede coincidir, en términos generales, con quienes participan en el *protopartido Podemos*. Al contrario, las personas mayores, con menos estudios, católicos practicantes y electores de los partidos mayoritarios son los que se inclinan hacia un polo representativo. En segundo lugar, aunque la población española se manifiesta abiertamente crítica en cuanto a las virtudes morales de los profesionales de la política o *clase política*, no hay claridad que esto signifique que el conjunto de la ciudadanía apueste por una intervención más directa en los asuntos políticos. Algo que se explica del hecho de que la distancia entre la confianza de los ciudadanos hacia los políticos y entre la misma ciudadanía no es significativa, pero también porque los ciudadanos reconocen que los políticos están dotados de una mayor capacidad para tomar decisiones.

En definitiva, este es un libro que arroja bastantes luces sobre la valoración que puede tener la ciudadanía del sistema político desde un enfoque contextual. Así, los españoles desean unos procesos políticos donde la intervención ciudadana sea superior a la actualmente existente, aunque esta sea una postura más bien moderada. Una moderación que está determinada por los asuntos tratados y los diferentes ámbitos territoriales en que se adopten las decisiones políticas. Asimismo, la claridad de las conclusiones se consigue por medio de un lenguaje sencillo y un impecable esquema que discurre desde la presentación de los objetivos, se detiene en la conceptualización y concluye con la interpretación de los resultados en cada apartado. El planteamiento está tan bien logrado que la simple comparación de la escala de evaluación de procesos políticos permite conocer los niveles de criticidad que hacen más o menos favorable la participación ciudadana. Por todo ello, este es un texto de gran valor ilustrativo, recomendable tanto para aquellos que tengan un conocimiento más profundo sobre los dilemas que caracterizan a las democracias modernas, como para quienes deseen acercarse desde intuiciones más profanas a este tipo de análisis científico-sociales.

Referencias

- Barreiro, Belén., 2014. *Podemos se ha sentado en la silla del PSOE y el PSOE de momento se ha quedado de pie* [Entrevista] (septiembre 2014).
- Dahl, Robert. 1997. *La Poliarquía. Participación y oposición*. Segunda ed. Madrid: TECNOS.
- Dahl, Robert, Giovanni Sartori y Fernando Vallespín. 1999. *El futuro de la democracia*. Madrid: Taurus.
- Easton, David, 1965. *Framework for Political Analysis*. Primera ed. Chicago: University of Chicago Press.
- Hibbing, John y Elizabeth Theiss-Morse. 2002. *Stealth Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Innerarity, Daniel. 2011. La política después de la indignación, *Claves*, 218: 18-30.
- Levine, Daniel y José Molina. 2007. The Quality of Democracy in Latin America. Another View, *Kellogg Institute*, 342: 1-36.
- Montero, José Ramón, Richard Gunther y Mariano Torcal. 1998. Actitudes hacia la democracia en España: legitimidad, descontento y desafección, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 83: 9-49.
- Morlino, Leonardo. 2009. La calidad de la democracia. *Claves de la razón práctica*, 193: 26-35.
- Mouffe, Chantal. 2012. *La paradoja democrática*. Segunda ed. Barcelona: Gedisa.
- Offe, Claus. 1990. *Contradicciones en el Estado del Bienestar*. Madrid: Alianza.
- Rosanvallon, Pierre. 2009. La democracia y sus condiciones. *Cuadernos del Cendes*, 71: 149-160.